



Asamblea General

Distr.
GENERAL

A/HRC/4/40/Add.1
2 de febrero de 2007

ESPAÑOL
Original: ESPAÑOL,
FRANCÉS E INGLÉS

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS
Cuarto período ordinario de sesiones
Tema 2 del programa provisional

**APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 60/251 DE LA ASAMBLEA
GENERAL, DE 15 DE MARZO DE 2006, TITULADA
"CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS"**

**Opiniones emitidas por el Grupo de Trabajo
sobre la Detención Arbitraria**

El presente documento contiene las opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en sus períodos de sesiones 44º, 45º y 46º, celebrados en noviembre de 2005, mayo de 2006 y agosto de 2006, respectivamente. En el informe que el Grupo de Trabajo presenta al Consejo de Derechos Humanos en su cuarto período ordinario de sesiones (A/HRC/4/40) figura un cuadro con la lista de todas las opiniones emitidas por el Grupo de Trabajo y los datos estadísticos correspondientes.

ÍNDICE

<i>Opinión</i>	<i>Página</i>
Nº 38/2005 (China).....	4
Nº 39/2005 (Camboya)	7
Nº 40/2005 (Francia)	11
Nº 41/2005 (Túnez)	15
Nº 42/2005 (Colombia).....	21
Nº 43/2005 (China).....	22
Nº 44/2005 (Irak y Estados Unidos de América)	26
Nº 45/2005 (Irak y Estados Unidos de América)	30
Nº 46/2005 (Irak y Estados Unidos de América)	37
Nº 47/2005 (Yemen).....	45
Nº 48/2005 (Namibia).....	49
Nº 1/2006 (Uzbekistán)	53
Nº 2/2006 (Egipto).....	54
Nº 3/2006 (Reino Unido).....	55
Nº 4/2006 (Myanmar).....	56
Nº 5/2006 (Irak y Estados Unidos de América)	58
Nº 6/2006 (Japón)	59
Nº 7/2006 (Yemen).....	60
Nº 8/2006 (Jamahiriya Árabe Libia).....	61
Nº 9/2006 (Arabia Saudita).....	62
Nº 10/2006 (Argelia)	64
Nº 11/2006 (China).....	68

ÍNDICE (continuación)

<i>Opinión</i>	<i>Página</i>
Nº 12/2006 (Arabia Saudita)	73
Nº 13/2006 (Reino Unido).....	75
Nº 14/2006 (República Islámica del Irán)	80
Nº 15/2006 (República Árabe Siria).....	84
Nº 16/2006 (República Árabe Siria).....	87
Nº 17/2006 (Líbano).....	93
Nº 18/2006 (Jamahiriya Árabe Libia)	98
Nº 19/2006 (República Islámica del Irán)	100
Nº 20/2006 (Gabón).....	102
Nº 21/2006 (República Árabe Siria).....	103
Nº 22/2006 (Camerún).....	104
Nº 23/2006 (Qatar)	108
Nº 24/2006 (Colombia)	109
Nº 25/2006 (Rumania).....	110
Nº 26/2006 (República Islámica del Irán)	111
Nº 27/2006 (China).....	114
Nº 28/2006 (Uruguay)	119
Nº 29/2006 (Estados Unidos de América).....	120
Nº 30/2006 (Colombia)	129
Nº 31/2006 (Iraq y los Estados Unidos de América).....	133

OPINIÓN N° 38/2005 (CHINA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 21 de abril de 2005

Relativa al Sr. Hu Shigen

El Estado ha firmado pero no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue creado en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos, la cual prorrogó y aclaró su mandato en la resolución 1997/50, y lo reconfirmó en la resolución 2000/31. Actuando de conformidad con sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno de China la comunicación arriba mencionada.
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haber facilitado la información sobre las denuncias de la fuente.
3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:
 - i) Cuando es evidentemente imposible invocar base legal alguna que la justifique (como el mantenimiento en detención de una persona tras haber cumplido la pena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);
 - ii) Cuando la privación de libertad resulta del enjuiciamiento o condena por el ejercicio de derechos o libertades proclamados en los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, además, respecto de los Estados Partes, en los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);
 - iii) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad, en cualquier forma que fuere, un carácter arbitrario (categoría III).
4. Habida cuenta de las alegaciones presentadas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta del Gobierno a la fuente, y recibió de éste sus observaciones.
5. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y las circunstancias del caso en el contexto de las denuncias formuladas y de la respuesta del Gobierno a esas denuncias, así como de las observaciones formuladas por la fuente.
6. Según la fuente, el Sr. Hu Shigen, nacido el 14 de noviembre de 1954, de nacionalidad china, profesor en el Instituto de Lengua y Cultura de Beijing, residente en Beijing, miembro del Partido para la Libertad y la Democracia de China, de la Alianza Progresista de China y del Comité Preparatorio de la Unión de Sindicatos Libres de China fue inicialmente detenido el 27 de mayo de 1992 por la Oficina de Seguridad Pública de Beijing, pero los trámites

necesarios para su ingreso en la cárcel con arreglo a la legislación china (*zhengshi daibu*) se cumplieron únicamente el 27 de septiembre de 1992. Estuvo cuatro meses privado de libertad hasta su encarcelamiento formal. Posteriormente, fue juzgado junto con otras 14 personas por haber organizado un grupo contrarrevolucionario y haber llevado a cabo actividades de propaganda e incitación contrarrevolucionarias, según lo dispuesto en los artículos 98 y 102 de la Ley penal de la República Popular de China de 1979. El 16 de diciembre de 1994, fue condenado por la organización de un grupo contrarrevolucionario y por propaganda contrarrevolucionaria, delitos que fueron posteriormente eliminados de la Ley penal de China. El Sr. Hu fue condenado a 20 años de prisión y transferido de los locales de la Oficina de Seguridad Pública de Beijing a la Cárcel N° 2 de Beijing. Hasta el momento en que se presentó la comunicación seguía cumpliendo su pena.

7. De acuerdo con la fuente, el Sr. Hu había ayudado a establecer el Partido para la Libertad y la Democracia de China y haber fundado su filial de Beijing. Actuó como su copresidente en enero de 1991. También había participado en la Alianza Progresista de China. En 1991, había ayudado a establecer el Comité Preparatorio de la Unión de Sindicatos Libres Chinos. En junio de 1989, el Sr. Hu también había participado en una petición para que el Gobierno reevaluara la supresión del movimiento prodemocracia. Fue detenido mientras planificaba actividades en conmemoración de ese movimiento, en particular un plan para lanzar folletos en la plaza Tiananmen.

8. La fuente mencionó además que, tras su detención, el Sr. Hu estuvo incomunicado durante dos años antes de su juicio en 1994, sin acceso a un abogado. Fue juzgado y condenado junto con otras 14 personas, que integran el grupo conocido con el nombre de "los quince de Beijing", que supuestamente recibieron una de las penas más duras desde los juicios relacionados con las protestas de 1989.

9. La fuente indica también que el Sr. Hu ha sufrido y sufre de graves problemas médicos, como migrañas crónicas, enfermedad intestinal, dolor de espalda y malnutrición, como resultado del trato duro que recibió mientras estaba en prisión y que, pese a la solicitud de su familia de que se le practique un examen físico general y se le proporcione atención médica, se le deniega el tratamiento médico apropiado. El hecho de que siga privado de libertad constituye una grave amenaza a su salud, e incluso a su vida.

10. La fuente considera que la detención del Sr. Hu contraviene su derecho a la libertad de expresión y opinión. Además, no se ha autorizado ningún proceso de revisión de su condena pese a que los delitos de actividades contrarrevolucionarias de que fue acusado fueron eliminados de la Ley penal.

11. En sus observaciones, el Gobierno básicamente confirma las denuncias de la fuente en cuanto a los hechos de la detención y condena del Sr. Hu. No obstante, recalca que, aunque según el artículo 35 de la Constitución china los ciudadanos de ese país gozan de libertad de expresión, de prensa, de reunión, de asociación, y de participar en desfiles y demostraciones, el artículo 51 de la Constitución establece que, cuando ejercen sus derechos y libertades, los ciudadanos no pueden causar daño al Estado, la sociedad o la comunidad, o a los derechos y libertades legítimos de otros ciudadanos. El Gobierno agrega que el Sr. Hu fue castigado debido a su participación en actividades que menoscabaron la seguridad del Estado.

12. En sus comentarios sobre las observaciones del Gobierno, la fuente reiteró que el Sr. Hu fue castigado por el mero hecho de ejercer su libertad de expresión.

13. En su evaluación, el Grupo de Trabajo parte de la base de que el Gobierno ni siquiera afirmó que el Sr. Hu hubiese recurrido alguna vez a la violencia o habría incitado a otras personas a un comportamiento violento al realizar las actividades por las que fue condenado. Todo lo que hizo fue participar en el intento de establecer el Partido para la Libertad y la Democracia de China, participar en la Alianza Progresista de China y ayudar a crear una unión de sindicatos libres. Sin embargo, esas organizaciones estaban fuera de la estructura estatal oficial, o deberían haberlo estado. Todas esas actividades el Sr. Hu las realizó de manera pacífica.

14. Dado que toda restricción al ejercicio pacífico de la libertad de asociación es incompatible con el derecho internacional, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión.

La privación de libertad del Sr. Hu Shigen es arbitraria, ya que contraviene lo dispuesto en los artículos 9 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y corresponde a la categoría II de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

15. Habida cuenta de la opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para poner remedio a la situación del Sr. Hu que, dadas las circunstancias concretas del caso, a saber, el largo período transcurrido en la cárcel, la situación precaria de salud del Sr. Hu y la modificación de la tipificación del delito por el que se lo consideró culpable, consiste en la pronta liberación del Sr. Hu.

16. El Grupo de Trabajo también invita al Gobierno a que ratifique lo antes posible el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 25 de noviembre de 2005.

OPINIÓN N° 39/2005 (CAMBOYA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 15 de junio de 2005

Relativa al Sr. Channy Cheam

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno de Camboya por haber facilitado la información solicitada.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 38/2005.)
4. Habida cuenta de las denuncias presentadas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta proporcionada por el Gobierno a la fuente y recibió de éstas sus observaciones.
5. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y las circunstancias del caso, en el contexto de las denuncias formuladas y de la respuesta del Gobierno, así como de las observaciones formuladas por la fuente.
6. La fuente informó al Grupo de Trabajo de que el Sr. Channy Cheam, nacido el 15 de febrero de 1961, de nacionalidad camboyana, elegido miembro del Parlamento Camboyano en representación del Partido de Sam Rainsy de la oposición, fue detenido el 3 de febrero de 2005 y actualmente está encarcelado en la Cárcel Militar Nacional Toul Sleng en Phnom Penh por la Policía Militar Nacional.
7. El Sr. Cheam fue supuestamente arrestado y detenido en la vía pública en Phnom Penh central por agentes de la Policía Militar Nacional en virtud de una orden de detención dictada por el fiscal militar. Si bien como miembro de la Asamblea Nacional el Sr. Cheam gozaba de inmunidad judicial, el 3 de febrero de 2005 se le retiró la inmunidad por una mayoría de dos tercios de los votos de la Asamblea y, fue detenido pocas horas más tarde. También se revocó la inmunidad de otros dos miembros del Parlamento del mismo partido, pero éstos abandonaron el país el mismo día.
8. Se ha acusado al Sr. Cheam, junto con otros dos miembros del partido de Sam Rainsy, de haber organizado un ejército secreto ilegal en contravención del derecho camboyano. Estas denuncias fueron hechas por primera vez en un discurso público pronunciado por el Primer Ministro en julio de 2004, mucho antes de la detención del Sr. Cheam, aunque en esa oportunidad no se le nombró personalmente. En las semanas posteriores al discurso, el Tribunal Militar de Camboya inició una investigación a raíz de la cual se formularon cargos contra distintos miembros del partido de Sam Rainsy, incluido el Sr. Cheam. El Sr. Cheam y el partido de Sam Rainsy han negado categóricamente esas acusaciones y han afirmado que el ejército secreto ilegal de que se les acusa haber organizado no es otra cosa que "un ministerio en la sombra", es decir, uno de los varios comités partidistas que forman la estructura de oposición al Gobierno. Este comité partidista sobre la defensa y la seguridad pública había sido fundado en 2002 por el Sr. Cheam, quien lo presidió desde entonces.

9. La fuente menciona que después de que la Asamblea Nacional votara por el retiro de la inmunidad parlamentaria del Sr. Cheam el 3 de febrero de 2005, éste fue detenido por decisión de un fiscal militar que dictó una orden de arresto y una orden de detención provisional el mismo día. El 4 de febrero de 2005, un juez de instrucción del tribunal militar dictó una orden de detención en que se formulaban distintos cargos, entre otros, complicidad en un delito organizado y fraude, en relación con las denuncias de organización de un ejército ilegal secreto.

10. La fuente también mencionó que se le había denegado al Sr. Cheam la libertad bajo fianza por decisiones del tribunal militar de 11 de febrero de 2005 y del tribunal de apelaciones el 21 de marzo de 2005, fundadas en que el Sr. Cheam podía huir del país, o ser un obstáculo para la investigación. Según se informa, los dos tribunales han rechazado los argumentos de ilegalidad presentados en relación con su arresto y detención por la jurisdicción militar, y el Sr. Cheam ha apelado esta decisión ante el Tribunal Supremo. Además, se informa de que desde la detención del Sr. Cheam se han producido varias otras irregularidades procesales.

11. La fuente sostuvo que el procedimiento para retirar la inmunidad parlamentaria al Sr. Cheam no se llevó a cabo adecuadamente, y que el dirigente del partido de Sam Rainsy y otro miembro del mismo partido están viviendo en el extranjero por miedo a su detención. Se afirma que los cargos contra el Sr. Cheam, así como su detención y encarcelamiento, constituyen un intento políticamente motivado para silenciar a un miembro de la oposición.

12. La fuente también observó que el 7 de febrero de 2005, el Representante Especial del Secretario General para los Derechos Humanos en Camboya manifestó públicamente su preocupación por el retiro de la inmunidad parlamentaria del Sr. Cheam, su detención y las acusaciones formuladas contra él.

13. En sus comentarios, el Gobierno confirmó las alegaciones de hecho formuladas por la fuente en cuanto al retiro de la inmunidad parlamentaria del Sr. Cheam y su posterior detención. El Gobierno explicó que se habían iniciado varios procedimientos penales en contra del Sr. Cheam. Había sido acusado por el Fiscal Militar, junto con Khom Piseth, un capitán del ejército que escapó al extranjero cuando el tribunal militar dictó la orden de arresto, de haber conspirado para establecer una fuerza armada ilegal en violación del Reglamento del Comandante General en Jefe de las Fuerzas Armadas Reales Camboyanas.

14. En cuanto a la pregunta de por qué se había enjuiciado y juzgado al Sr. Cheam por un tribunal militar, el Gobierno explicó que cuando un miembro del personal militar y un civil son coacusados por el mismo delito, la ley establece que el delito será de la competencia del tribunal militar. Por consiguiente, aunque el Sr. Cheam es un civil, el delito es de la competencia del tribunal militar.

15. El Gobierno indicó además que el tribunal había rechazado la petición de libertad condicional del Sr. Cheam sobre la base de pruebas presentadas y del riesgo de que podía huir del país o ser un obstáculo para la investigación. El Gobierno indica además que las pruebas presentadas en el tribunal y las declaraciones de los testigos demostraron que el Sr. Cheam había creado una estructura ilegal integrada por personal del ejército, la policía militar, la marina, la fuerza aérea, y el cuerpo de ingenieros, había otorgado ascensos ilegales a comandantes del ejército y había reclutado a soldados. En particular, el Sr. Cheam había organizado ilegalmente la estructura militar de la región militar 5 (ubicada en las provincias de Battambang y Banteay

Meanchy, cerca de la frontera con Tailandia) para lo cual había designado expertos, un jefe de estado mayor y un jefe de estado mayor adjunto y jefes de distintas dependencias. Esas personas reclutadas ilegalmente para integrar la estructura militar habían pagado honorarios, según el grado que tenían, al Sr. Cheam y su cómplice Khom Piesh. Por ese delito se había acusado al Sr. Cheam de fraude.

16. El Gobierno sostuvo que las pruebas presentadas en el tribunal demostraban que el Sr. Cheam había intentado ocultar sus acciones de la opinión nacional e internacional, pero que en efecto había organizado unas fuerzas armadas en las dependencias militares para buscar y recopilar información militar secreta con el objeto de destruir las fuerzas armadas.

17. El Gobierno informó al Grupo de Trabajo de que el juicio del Sr. Cheam se había abierto el 8 de agosto de 2005 en el Tribunal Militar de Phnom Penh en relación con los cargos mencionados. El 9 de agosto fue declarado culpable de fraude y de la organización de una fuerza armada ilegal y fue condenado por el mismo tribunal a una pena de prisión de siete años.

18. En sus comentarios acerca de las observaciones del Gobierno, la fuente presentó dos argumentos para fundamentar que la privación de libertad del Sr. Cheam era arbitraria.

19. En primer lugar, sostuvo que el Decreto-ley N° 5 sobre la organización del tribunal militar (1981), que el Gobierno considera la base jurídica de la jurisdicción de los tribunales militares en el caso del Sr. Cheam, es nulo y sin valor puesto que había sido derogado y sustituido por dos leyes más recientes, a saber, las Disposiciones relativas a la judicatura y a la ley y procedimiento penal aplicable en Camboya durante el período de transición (1992); y la Ley sobre la organización y las actividades de los tribunales jurisdiccionales del Estado de Camboya (1993). En las dos leyes se establece claramente que los tribunales militares no podrán juzgar a civiles. Los textos jurídicos pertinentes presentados por la fuente se reproducen en el anexo de este capítulo.

20. En segundo lugar, la fuente indicó varios vicios graves de procedimiento durante el juicio. Afirmó que se había impedido a los abogados de la defensa interrogar a todos los testigos de la parte acusadora, no se les había permitido llamar a sus propios testigos y, al interrogar al inculpado, se les había interrumpido sin ningún motivo válido.

21. Por razones de conveniencia, el Grupo de Trabajo desea centrar su atención en la denuncia de que la condena del Sr. Cheam, que es civil, por un tribunal militar confirió a su privación de libertad un carácter arbitrario.

22. En base a los argumentos sólidos de la fuente, corroborado por los textos jurídicos, el Grupo de Trabajo está convencido de que, en virtud de las leyes de Camboya, el tribunal militar no tenía competencia para juzgar el caso del Sr. Cheam.

23. El párrafo 1 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal *competente*, independiente e imparcial establecido por la ley (sin cursiva en el original). Esta disposición, que es una de las piedras angulares del procedimiento imparcial, se fundamenta en que la confianza en el sistema de justicia requiere estabilidad en la reglamentación de la competencia, y en que la autoridad no interferirá en la administración de

justicia modificando o eliminando arbitrariamente las normas sobre la competencia de los tribunales.

24. Habida cuenta de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad del Sr. Channy Cheam es arbitraria, ya que contraviene lo dispuesto en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y corresponde a la categoría III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

25. Habida cuenta de la opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Channy Cheam.

Aprobada el 25 de noviembre de 2005.

Anexo

1. Disposiciones relativas a la judicatura y a la ley y el procedimiento penal aplicable en Camboya durante el período de transición (1992) (conocida como la "Ley de la Autoridad Provisional"), que es el Código Penal actualmente en vigor en Camboya (y en virtud del cual se condenó al Sr. Channy Cheam).

El artículo 11 ("Tribunales militares") de esta ley dice lo siguiente:

"Los tribunales militares sólo tienen jurisdicción sobre los delitos militares. Los delitos militares son los cometidos por personal militar, ya sea alistado o reclutado, y entrañan una cuestión de disciplina en las fuerzas armadas o daños a bienes militares. Todos los delitos ordinarios cometidos por el personal militar serán juzgados en tribunales civiles."

El artículo 73 ("Derogación de normas incompatibles") dice lo siguiente:

"Todo texto, disposición o norma escrita o no escrita que sea contraria a la letra o al espíritu del presente texto se declaran nulos y de ningún valor."

2. La Ley sobre la organización y las actividades de los tribunales jurisdiccionales del Estado de Camboya (1993), artículo 9 ("Tribunal militar") dice lo siguiente:

"El tribunal militar tendrá competencia para juzgar y pronunciarse en apelación en los casos de delitos militares. Los delitos militares son los cometidos por personal militar del ejército y atañen una cuestión de disciplina militar o afecta a los bienes de las fuerzas armadas militares. En los casos en que un militar cometa un delito penal ordinario, el tribunal provincial o municipal iniciará la acción correspondiente."

Además, el artículo 24 ("Disposición final") dice lo siguiente:

"Se deroga por la presente toda disposición contraria a esta ley."

OPINIÓN N° 40/2005 (FRANCIA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 19 de abril de 2005

Relativa al Sr. Joseph Antoine Peraldi

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo expresó su agradecimiento al Gobierno por haberle presentado oportunamente la información solicitada.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 38/2005.)
4. Habida cuenta de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. La respuesta del Gobierno ha sido transmitida a la fuente, que ha presentado sus observaciones. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y circunstancias del caso, teniendo especialmente en cuenta las denuncias formuladas y la respuesta del Gobierno al respecto.
5. Según la información recibida, el Sr. Joseph Antoine Peraldi, nacido el 11 de septiembre de 1941, de nacionalidad francesa, jubilado, domiciliado en Manicola Vecchia, La Confina N° 1, 20167 Ajaccio-Mezzavia (Córcega del Sur, Francia), fue detenido en la noche del 26 de febrero de 2000 delante de su domicilio cerca de Ajaccio por policías vestidos de civil armados y algunos de ellos encapuchados, mientras estacionaba su vehículo de regreso a su casa. Fue llevado a la comisaría en donde se le mostró una orden dictada por una comisión rogatoria presidida por el Juez Bruguière de la 14ª sección antiterrorista de la Fiscalía de París, que no estaba ni firmada ni sellada. El 27 de febrero de 2000, el Sr. Peraldi fue llevado al centro de detención de la brigada de la Gendarmería de Curzo. El 28 de febrero de 2000 fue transferido en un avión especial a los locales de la División Nacional Antiterrorista de París en donde estuvo detenido cuatro días mientras le efectuaban interrogatorios, para ser luego trasladado al centro de detención de la Conciergerie, en donde pasó un día más, antes de ser llevado al juez de instrucción. El 2 de marzo de 2000, el Sr. Peraldi fue transferido a la cárcel de Fresnes en la región parisina, lugar en donde permanece detenido desde entonces.
6. El Sr. Peraldi fue acusado de complicidad en la destrucción con explosivos, de los edificios de la URSSAF y la DDE en Ajaccio el 25 de noviembre de 1999, y de asociación ilícita en relación con un atentado terrorista, acusaciones que el Sr. Peraldi siempre ha impugnado.
7. En el momento de la presentación del caso al Grupo de Trabajo aún no había comenzado el juicio en relación con las acusaciones formuladas contra el Sr. Peraldi, quien seguía en detención provisional desde hacía más de 60 meses. La fuente menciona además que las tres peticiones de excarcelación por violación de los artículos 5.3 y 6.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos y del artículo 148.1 del Código de Procedimiento Penal, y presentadas al Tribunal de Apelación de París y al Tribunal de Casación, fueron rechazadas por considerarse que la detención era el único medio de evitar una concertación fraudulenta con los coacusados, así como eventuales presiones sobre los testigos.

8. La fuente menciona que el 10 de enero de 2005 el abogado del Sr. Peraldi presentó una petición al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en aplicación del artículo 34 de la Convención Europea de Derechos Humanos por violación de los artículos 5.3 y 6.1 de dicha Convención. La fuente considera que un período de detención provisional de más de 60 meses supera con creces el plazo razonable que corresponde al derecho a un juicio imparcial y equitativo.

9. El Gobierno de la República Francesa indica en su respuesta que el 2 de marzo de 2000 se dictó una orden de ingreso en prisión contra el Sr. Peraldi tras la incoación del sumario. El 16 de abril de 2002, fecha en que concluyó el sumario, la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París confirmó en diez ocasiones las decisiones relativas a la detención provisional adoptadas por el juez de garantías (*juge des libertés et de la détention*) de París. El Sr. Peraldi solicitó su excarcelación en cuatro ocasiones a la sala de instrucción, pero las peticiones fueron rechazadas en sendas resoluciones contra una de las cuales se presentó recurso de casación, que fue desestimado.

10. El Gobierno comunicó que, por decisión de 15 de marzo de 2005, la sala de instrucción aplicó las disposiciones del párrafo 9 del artículo 181 del Código de Procedimiento Penal y ordenó la prórroga del encarcelamiento del interesado a partir del 31 de marzo de 2005, puesto que el auto de procesamiento era firme desde el 31 de marzo de 2004. El párrafo 8 del artículo 181 prevé la excarcelación del acusado puesto a disposición de la *cour d'assises* que no haya comparecido al vencimiento del plazo de un año a partir de la fecha en que el auto de procesamiento era firme, salvo prórroga por un plazo de seis meses decretada por la sala de acusación, lo que en realidad sucedió en el caso del Sr. Peraldi puesto que éste compareció ante la *cour d'assises* de París el 4 de abril de 2005, dentro del plazo legal, y su detención fue prorrogada seis meses a partir del 31 de marzo de 2005.

11. El Gobierno recuerda que el Sr. Peraldi ha sido juzgado por los atentados perpetrados el 25 de noviembre de 1999 en Ajaccio contra los locales de la Dirección Departamental del Equipamiento y de la Unión de Cobro de las Cuotas de la Seguridad Social y de las Ayudas Familiares. La instrucción demostró que en esos hechos estaban implicados los principales responsables de la organización política "Corsica Viva" y su brazo armado el "FLNC de 5 de mayo". El Sr. Peraldi fue identificado como el dirigente de hecho de "Corsica Viva". El Gobierno señala que los dos atentados fueron perpetrados en pleno día y causaron importantes daños materiales y humanos: de un total de 71 heridos, algunos de ellos quedaron totalmente incapacitados para el trabajo durante 60 días.

12. El Gobierno señala que el Sr. Peraldi fue condenado el 22 de abril de 2005 a una pena de 15 años de prisión y fue transferido el 8 de junio de 2005 al centro de detención de Borgo, cerca del lugar donde tiene vínculos familiares, por lo que puede recibir visitas, en particular de su esposa, llamar por teléfono y, gracias a su computadora, escribir. Habida cuenta de ello, el Gobierno considera que la detención del Sr. Peraldi no puede calificarse de arbitraria.

13. Además, el Gobierno solicita al Grupo de Trabajo que declare la comunicación inadmisble dado que paralelamente el Sr. Peraldi ha presentado su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 10 de enero de 2005, y que es una práctica establecida que las comunicaciones individuales presentadas ante los comités creados en virtud de los distintos

instrumentos de las Naciones Unidas son inadmisibles cuando el caso está siendo examinado por otra instancia internacional de investigación, examen o arreglo.

14. En su respuesta, la fuente precisa que el Sr. Peraldi fue detenido frente a su domicilio por encapuchados que no llevaban brazaletes, ni luces rotativas en los vehículos, y que le pusieron un revolver en la cabeza. Tres cuartos de hora más tarde le presentaron en la comisaría una comisión rogatoria que no llevaba ni la firma del magistrado que ordenaba su detención ni un sello, lo que constituiría un vicio de procedimiento. El Sr. Peraldi fue posteriormente encarcelado el 2 de marzo de 2000 en el establecimiento penitenciario de Fresnes luego de permanecer 96 horas en detención policial y 19 horas privado de libertad a la espera de ser llevado ante el magistrado encargado de la instrucción.

15. La fuente insiste en que el Sr. Peraldi pasó 63 meses y medio en la cárcel en régimen de detención provisional, y esperó 39 meses después del último interrogatorio, efectuado por el juez Bruguière el 22 de diciembre de 2001, antes de ser juzgado. Después de esa fecha ya no vio más al juez de instrucción, sino sólo al juez de garantías (*juge de la détention et des libertés*), quien renovó su orden de ingreso en prisión cada seis meses, tal como prevé la ley. Durante ese período, el juez de instrucción no ordenó ninguna investigación adicional, ni el acusado inició acción alguna que habría podido demorar la conclusión del sumario, salvo el haber presentado un recurso ante el tribunal de casación para impugnar su puesta a disposición ante la *cour d'assises* especial.

16. La fuente confirma que el Sr. Peraldi está detenido desde el 9 de junio de 2005 en el centro de Borgo en Córcega, donde puede recibir visitas, en particular de su esposa y de su familia, pero no posee ni computadora ni ha producido ningún material escrito. Además, precisa que el movimiento "Corsica Viva" era un movimiento público con estatutos registrados en la Prefectura de Ajaccio, y que el Sr. Peraldi era miembro del cuerpo colegiado de ese movimiento.

17. Por último, la fuente precisa que el Sr. Peraldi fue condenado a 15 años de reclusión sobre la base del convencimiento personal del fiscal quien afirmó en el proceso que no contaba con pruebas materiales, al igual que el comisario de policía. Sin embargo, los atentados fueron perpetrados por desconocidos que actuaban en nombres falsos. Durante todo el proceso, el Sr. Peraldi se declaró no culpable y numerosas personalidades públicas le manifestaron su apoyo.

18. En cuanto a la admisibilidad de la comunicación, el Grupo de Trabajo observa que el Sr. Peraldi, que estaba en detención provisional desde el 26 de febrero de 2000, presentó su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, el 10 de enero y el 30 de marzo de 2005, respectivamente, invocando la violación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o puesto en libertad. En su respuesta, el Gobierno pide al Grupo de Trabajo que declare la comunicación inadmisible por estar establecido que las comunicaciones individuales presentadas a los comités establecidos en virtud de distintos instrumentos de las Naciones Unidas son inadmisibles cuando la misma cuestión se ha sometido a otro procedimiento de examen o arreglo internacional.

19. El Grupo de Trabajo, basándose en el párrafo 25 de sus métodos de trabajo, considera que el mero hecho de que una demanda idéntica o similar esté pendiente ante un mecanismo regional, en este caso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no le impide examinar la comunicación.

20. En cuanto al fondo, la fuente invoca varias quejas, la más pertinente de las cuales para el mandato del Grupo de Trabajo es la violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad. El Grupo de Trabajo observa que el Sr. Peraldi fue objeto de una investigación judicial por su participación en los atentados perpetrados en 1999 en Ajaccio. La cronología judicial del procedimiento revela que la instrucción comenzó en marzo de 2000, el juez de instrucción dictó su auto de procesamiento el 2 de septiembre de 2003, y la puesta a disposición del acusado ante la *cour d'assises* fue confirmada el 19 de diciembre de 2003 por la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París. El Sr. Peraldi presentó recurso de casación contra la resolución de sometimiento formal a juicio. El 31 de marzo de 2004, el tribunal de casación desestimó el recurso. El 4 de abril de 2005, el Sr. Peraldi compareció ante la *cour d'assises* de París que lo declaró culpable y condenó a 15 años de reclusión.

21. El Grupo de Trabajo observa que, si bien el derecho a un juicio equitativo implica necesariamente que se haga justicia sin dilaciones indebidas, la noción de plazo razonable se evalúa teniendo en cuenta las circunstancias y el grado de complejidad de cada caso y, si procede, el ejercicio de las vías de recurso y del derecho a impugnar periódicamente el mantenimiento en detención provisional. En su evaluación, el Grupo de Trabajo se pronuncia sobre cada caso en particular. En el caso del Sr. Peraldi, considera que, teniendo en cuenta el carácter de los hechos imputados y el desarrollo del procedimiento, la demora no fue excesivamente prolongada. Además, el Sr. Peraldi tuvo varias oportunidades de impugnar su detención provisional, pero las autoridades competentes estimaron que no debían ponerlo en libertad.

22. La fuente invoca otras quejas en relación con irregularidades del procedimiento y vicios de forma que habrían invalidado la orden de detención del Sr. Peraldi y su traslado a París. La fuente sostiene también que el Sr. Peraldi fue condenado sin pruebas materiales. El Grupo de Trabajo recuerda al respecto que, cuando verifica las condiciones de aplicación de la legislación nacional por los jueces, como en este caso, se cerciora de que no se sustituye a las autoridades judiciales o se considera una clase de tribunal supranacional. Cuando examina una comunicación, no se propone cuestionar los hechos y las pruebas, sino que examina únicamente el respeto de las normas pertinentes del derecho internacional, asegurándose que la aplicación de esas normas no haya causado una violación cuya gravedad le confiere a la detención un carácter arbitrario.

23. El Grupo de Trabajo opina que las presuntas irregularidades del procedimiento mencionadas por la fuente, muchas de las cuales han sido impugnadas por el Gobierno, no son de una gravedad tal que confiera a la privación de libertad un carácter arbitrario.

24. Habida cuenta de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La detención del Sr. Joseph Antoine Peraldi no es arbitraria.

25. Habida cuenta de la opinión emitida, el Grupo de Trabajo decide archivar el caso conforme a lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 17 de sus métodos de trabajo.

Aprobada el 28 de noviembre de 2005.

OPINIÓN N° 41/2005 (TÚNEZ)

Comunicación dirigida al Gobierno el 20 de abril de 2005

Relativa al Sr. Mohammed Abbou

El Estado Parte ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haberle facilitado oportunamente la información necesaria.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 38/2005.)
4. Habida cuenta de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta del Gobierno a la fuente, que facilitó al Grupo de Trabajo sus observaciones al respecto. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de expresar una opinión sobre los hechos y circunstancias del caso en el contexto de las denuncias formuladas y de la respuesta del Gobierno a esas denuncias.
5. De acuerdo con la información recibida, el señor Mohammed Abbou, nacido el 10 de mayo de 1966, de nacionalidad tunecina, abogado, miembro de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de un partido político de la oposición, fue detenido por unas personas vestidas de paisano, probablemente policías, a la salida de un café la noche del 1° de marzo de 2005. En ese momento no se presentó ninguna orden de detención ni ningún otro documento oficial. Sólo al día siguiente, tras varias peticiones de sus abogados, se presentó copia de una comisión rogatoria de fecha 28 de febrero de 2005 emitida por el juez de instrucción de la segunda sala del Tribunal de Primera Instancia de Túnez, firmada por el jefe de la Brigada de la sección de asunto penales.
6. El Sr. Abbou fue encarcelado en primer lugar en la prisión civil "9 de abril" de Túnez, y el 11 de marzo de 2005 fue trasladado a la prisión civil de Kef, a 170 km de Túnez. La fuente señala que este traslado no se efectuó de conformidad con la legislación aplicable, puesto que según el Código de Procedimiento Penal, el Sr. Abbou debería de haber sido detenido en una prisión de la jurisdicción del tribunal competente, a saber, el de Túnez. Además, en la orden de detención emitida por el juez de instrucción se precisaba que el Sr. Abbou debía ser internado en la prisión civil "9 de abril" de Túnez. Según se afirma, el Sr. Abbou se encuentra actualmente recluido en la prisión de Kef.
7. La fuente indica que el Sr. Abbou estaba siendo juzgado por haber publicado artículos en Internet en dos ocasiones, a saber, el 25 de agosto de 2005, un artículo en el que comparaba las condiciones penitenciarias en Túnez con las de la prisión de Abu Ghrai en el Iraq, y otro, de 28 de febrero de 2005, en el que criticaba la invitación hecha al Primer Ministro israelí a participar en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información que debía celebrarse en Túnez en noviembre de 2005. Las bases de la inculpación del Sr. Abbou son las siguientes: publicación y difusión de información falsa que altera o que podría alterar el orden público, difamación contra

el aparato judicial e incitación a la población a infringir las leyes del país, en virtud de los artículos 42, 44, 49, 51, 68 y 72 del Código de la Prensa y del artículo 121-3 del Código Penal.

8. La fuente precisa que en el momento de la presentación de esta comunicación, el Sr. Abbou se encontraba en detención preventiva y que no se había fijado fecha alguna para su proceso. El único documento constituyente del expediente es la comisión rogatoria de 28 de febrero de 2005.

9. La fuente considera que la detención y el encarcelamiento del Sr. Abbou son arbitrarios porque pueden atribuirse al ejercicio de la libertad de expresión y de opinión. Además, se han producido muchas irregularidades después de la detención del Sr. Abbou que han viciado todo el procedimiento. En primer lugar, la detención del Sr. Abbou no se produjo según la ley porque tuvo lugar en ausencia de flagrante delito. El Sr. Abbou debió haber sido convocado a comparecer por un juez de instrucción, quien, después de haberlo interrogado, habría podido dictar una orden de detención. Además, se debería de haber informado al Consejo del Colegio de Abogados en caso de incoarse una instrucción judicial contra el Sr. Abbou, puesto que éste ejercía normalmente su profesión de abogado.

10. En segundo lugar, la comisión rogatoria de 2 de marzo de 2005 adolece de varias irregularidades, a saber, no fue comunicada a los abogados del Sr. Abbou hasta el 2 de marzo, no obstante estar fechada el 28 de febrero; en ella no se menciona ni la decisión judicial ni la fecha de inicio de la instrucción firmada por el fiscal; se menciona una carta de la sección de asuntos penales de fecha 31 de septiembre, cuando ese mes sólo cuenta con 30 días; en el procedimiento tunecino no se prevé la necesidad de someter un asunto al juez de instrucción mediante escritos, aún rubricados por el Fiscal de la República; y la falta de requisitoria en el expediente anula la instrucción en general, según el artículo 199 del Código de Procedimiento Penal, como sucede en el presente caso.

11. En tercer lugar, la fuente indica que desde su traslado a la prisión de Kef el 11 de marzo de 2005, no se ha autorizado al Sr. Abbou a reunirse con sus abogados, no obstante las múltiples visitas de éstos, lo que constituye una violación del artículo 70 del Código de Procedimiento Penal. Como el Sr. Abbou se niega a comparecer ante el juez de instrucción en ausencia de sus abogados, hasta ahora no ha tenido lugar la audiencia pertinente.

12. Por otra parte, la fuente indica que el 2 de marzo de 2005, cuando el Sr. Abbou debía de haber sido interrogado por el juez instrucción, sus abogados fueron impedidos de asistir a la audiencia y fueron agredidos físicamente por las fuerzas policiales que les cerraron el paso a la oficina del juez de instrucción. La audiencia fue postergada hasta el 16 de marzo de 2005, pese a que en el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal se dispone que el inculcado deberá ser interrogado por el juez en el plazo de los tres días siguientes a su ingreso en el lugar de detención preventiva. El 16 de marzo de 2005, fecha en que el Sr. Abbou debía comparecer nuevamente ante el juez de instrucción, sólo se autorizó al Presidente del Consejo del Colegio de abogados a reunirse con el juez de instrucción, que le informó de que de los 815 abogados que habían firmado el anuncio de constitución para defender a su colega, sólo 10 habían sido admitidos para defender al Sr. Abbou. Cuando el Presidente del Colegio de abogados intentó impugnar esta decisión, la fuente indica que fue insultado y expulsado de la oficina del juez. No obstante, el Sr. Abbou no estaba presente ese día para su interrogatorio.

13. El Gobierno de Túnez indica en su respuesta que el Sr. Abbou, abogado y miembro del Colegio de abogados, fue objeto de una instrucción iniciada por la fiscalía de Túnez sobre la base de una queja interpuesta contra él por una de sus colegas por agresiones manifiestas que le ocasionaron daños físicos e hicieron necesaria la intervención médica de urgencia de ésta, con dos meses de baja laboral. Asimismo, el Sr. Abbou fue investigado por difamación de las autoridades judiciales, difusión de noticias falsas e incitación a la población a infringir las leyes.

14. El Gobierno menciona que el Sr. Abbou compareció el 2 de marzo de 2005 en presencia de sus abogados ante el juez de instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Túnez, que dio curso favorable a la petición de aplazamiento formulada por el acusado para que sus abogados pudiesen preparar su defensa.

15. El Gobierno informa de que el Sr. Abbou compareció nuevamente el 16 de marzo de 2005 ante el juez de instrucción, que autorizó a 17 de sus abogados a asistir al interrogatorio. Esta decisión fue recusada por el interesado, que se había negado a someterse al interrogatorio so pretexto de que todos sus abogados no estaban presentes. Ante la imposibilidad material de acoger a todos los abogados de la defensa y la negativa del Sr. Abbou a responder sino en presencia de todos sus abogados, el juez de instrucción recordó al acusado las disposiciones que le autorizan a seguir adelante con el proceso indistintamente de su negativa a responder. Durante este interrogatorio, uno de los abogados presentes se opuso a la presencia del ministerio público en el interrogatorio, en desconocimiento de las disposiciones del artículo 73 del Código de Procedimiento Penal, que permite explícitamente la presencia del Fiscal de la República en los interrogatorios y careos de inculpados.

16. El Gobierno indica que el 23 de abril de 2005 el juez de instrucción decidió poner término a la instrucción y remitir al acusado a la sala penal del Tribunal de Primera Instancia de Túnez por golpes y lesiones seguidos de una incapacidad permanente no superior al 20%.

17. Por lo que toca a la segunda cuestión, el Gobierno indica que el juez de instrucción tropezó con el rechazo categórico del Sr. Abbou, quien, por sus escritos y actitud, es culpable de difusión de información falsa y difamación de las autoridades judiciales. El 28 de abril de 2005 el acusado fue condenado en esa sala a 2 años de prisión firme por agresiones manifiestas contra su colega que entrañaron una tasa de incapacidad permanente no superior al 20%, y a 18 meses de prisión por difamación de las autoridades judiciales, difusión de información falsa e incitación a la población a infringir las leyes.

18. El Gobierno informa de que el Sr. Abbou interpuso recurso de apelación contra ese fallo y compareció el 10 de junio de 2005, en condición de detenido, ante la sala penal del Tribunal de Apelación de Túnez. Según se informa, durante el examen de la primera cuestión, el Sr. Abbou se negó a responder al tribunal, lo que trajo como consecuencia que la Presidenta de la audiencia aplicara el artículo 148 del Código de Procedimiento Penal, que permite hacer caso omiso del silencio del acusado y dar la palabra a uno de los abogados de la defensa. A continuación, según parece, la Presidenta de la audiencia quiso dar la palabra a otro abogado de la defensa, a lo que se opuso un colega, alterando el curso normal de la audiencia, puesto que cada abogado pretendía ser el primero en defender la causa. Ante esta desavenencia y el jaleo consiguiente, la Presidenta de la audiencia decidió, a solicitud de la fiscalía, suspender momentáneamente la audiencia hasta que se restableciera el orden. Una vez vuelta la calma, la audiencia se reanudó en presencia de los abogados del Sr. Abbou, que presentaron ciertas demandas formales. Al ser

rechazadas éstas, los abogados de la defensa se retiraron; dos de ellos permanecieron en la sala con algunos observadores. El tribunal procedió a continuación a examinar el segundo asunto, y el Sr. Abbou reconoció haber difundido el escrito, objeto de las actuaciones. Los dos abogados que permanecieron presentes se negaron a presentar sus alegatos. Después de deliberar, el tribunal confirmó el fallo dictado por el tribunal de primer instancia, tanto en el plano civil como en el plano penal, y la sentencia adquirió carácter de definitiva en ausencia de un recurso extraordinario por parte del acusado o del Fiscal general.

19. El Gobierno concluye que la detención del Sr. Abbou no es arbitraria puesto que el procedimiento judicial que concluyó con su condena se desarrolló de conformidad con la norma de procedimiento en vigor con respecto a las garantías de la defensa. Además, el Sr. Abbou goza desde su detención de todas las garantías legales, en particular los derechos a un examen médico, a reunirse con sus abogados y recibir la visita de sus allegados.

20. La fuente responde a los argumentos del Gobierno mencionando que el Sr. Abbou fue detenido sin la debida orden de detención y sin que se informara al interesado ni a su familia de las razones de su detención. Los agentes de los servicios de seguridad que efectuaron su detención no tenían derecho a hacerlo puesto que el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal les prohíbe esas intervenciones (según los argumentos de los abogados tunecinos que afirman que los miembros de los servicios de seguridad, al no ser agentes de la policía judicial, ya no están facultados para efectuar detenciones, habida cuenta de que su autoridad dependía de los tribunales de seguridad, que fueron abolidos en 1987). La fuente indica además que no se ha informado al Presidente del Colegio de Abogados local de la detención y la acusación contra el Sr. Abbou, como se exige en el artículo 45 de la Ley Nº 87 de 1989.

21. La fuente informa de que el Sr. Abbou fue internado en la prisión "9 de abril" después de haber comparecido ante el juez de instrucción el 2 de marzo, antes de ser trasladado a la prisión de Kef a 200 km de Túnez, lejos de su familia. La fuente opina que se procedió así para alejarlo de sus abogados, domiciliados en Túnez. Además, varios de ellos no fueron autorizados a visitarlo en la prisión de Kef, en particular los considerados "activistas".

22. En lo que respecta a la instrucción iniciada por la fiscalía de Túnez sobre la base de una queja interpuesta contra él por una de sus colegas por agresiones manifiestas que le ocasionaron lesiones corporales, la fuente menciona que el expediente no contenía más que una sola página, a saber, un dictamen médico no firmado con fecha de 2005, cuando, según parece, el incidente ocurrió en 2002.

23. Por último, la fuente menciona que el artículo utilizado para incriminar al Sr. Abbou, de su propia redacción, condena el recurso a la tortura en Túnez. Sin embargo, la fuente opina que su detención se debe a otro artículo de su propia pluma, en el que comparaba a Ariel Sharon, Primer Ministro israelí, al Presidente tunecino Ben Ali.

24. Se desprende de lo que antecede que las alegaciones de la fuente y las formuladas por el Gobierno son discordantes. Para la fuente, la detención del Sr. Abbou se efectuó en contravención de la legislación tunecina y su condena es violatoria de las normas de un proceso equitativo, y estaba destinada a sancionar su libertad de expresión ejercida por Internet. Para el Gobierno, la indagatoria que condujo a la condena del Sr. Abbou se inició a raíz de una queja por agresión interpuesta contra él por una de sus colegas, y, según parece, posteriormente también

fue investigado por difamación de las autoridades judiciales, difusión de información falsa e incitación de la población a infringir las leyes.

25. El Grupo de Trabajo observa que el 1º de marzo de 2005 el Sr. Abbou, abogado, miembro de varias organizaciones de defensa de los derechos humanos y de un partido político de la oposición, fue detenido poco después de publicar (el 28 de febrero) en el sitio internet tunisnews.net, un artículo muy crítico del Gobierno. El Grupo de Trabajo señala asimismo que la comisión rogatoria que sirvió de base legal para la detención del Sr. Abbou adolece de varias irregularidades. Según esta comisión rogatoria, los hechos reprochados al Sr. Abbou tienen que ver con un artículo que éste publicó en el mismo sitio internet el 25 de agosto de 2004. Estos hechos son calificados de "difusión y propagación de información falaz y malintencionada, con miras a alterar el orden público, difamar a las autoridades judiciales e incitar a los ciudadanos a infringir la ley de la República, y la presentación al público de escritos susceptibles de alterar el orden público". No se hace ninguna mención de la queja de la colega del Sr. Abbou en dicha comisión rogatoria.

26. De lo que antecede y de las circunstancias en que se efectuó el proceso del Sr. Abbou, su traslado a la prisión de El-Kef, no obstante el hecho de que la instrucción y el proceso se llevaban a cabo en Túnez, del apoyo que recibió del Colegio de abogados tunecino y de muchísimas organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales, el Grupo concluye que efectivamente la detención y la condena del Sr. Abbou se debieron a los artículos publicados en Internet, y no a la queja de su colega. Según la fuente, 815 abogados se presentaron para defenderlo.

27. En cuanto al ejercicio de la libertad de expresión en Internet, el Grupo de Trabajo reafirma que el derecho a la libertad de opinión y de expresión garantizado por los artículos 19 respectivos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos comprende la libertad de difundir ideas de toda índole, de cualquier forma y por todos los medios, salvo que al ejercer este derecho, los interesados hayan incitado al delito, al odio racial, hayan recurrido a la violencia, o amenazado, en violación de la ley, la seguridad nacional, la seguridad pública, el orden público, o la salud o la moral públicas, así como los derechos y la reputación ajenos, lo que no parece ser el caso en el presente caso. En el artículo titulado "Abou Ghraib del Iraq y Abou Ghraib de Túnez", por el cual el Sr. Abbou fue condenado a 18 meses de prisión firme, el autor expresa opiniones políticas críticas del Jefe de Estado y de la política de su Gobierno, sin transgredir los límites permisibles del ejercicio de la libertad de expresión.

28. El Grupo de Trabajo estima que la libertad de expresión protege no solamente las opiniones e ideas acogidas favorablemente o que se consideran inofensivas, o indiferentes, sino también las capaces de ofender a los actores de la vida pública, en particular los dirigentes políticos. La expresión pacífica de un opinión difundida por Internet, si no es de carácter violento y no incita al odio nacional, racial o religioso, o a la violencia, es conforme a los límites de la libertad de expresión.

29. Teniendo en cuenta esta posición, el Grupo de Trabajo no ha estimado necesario examinar la denuncia de la fuente relativa a la falta de equidad del proceso.

30. Habida cuenta de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad del Sr. Mohammed Abbou es arbitraria, por cuanto que contraviene los artículos 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de que es Parte la República de Túnez, y corresponde a la categoría II de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

31. Habida cuenta de la opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de conformidad con las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 28 de noviembre de 2007.

OPINIÓN N° 42/2005 (COLOMBIA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 7 de julio de 2005

Relativa al Sr. Luis Torres Redondo

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue creado en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos, la cual precisó su mandato por la resolución 1997/50 y lo renovó por la resolución 2003/31. Actuando de conformidad con sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno la comunicación arriba mencionada.
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno de Colombia por haber proporcionado la información solicitada oportunamente.
3. El Grupo de Trabajo también toma nota con reconocimiento de la información recibida de la fuente, en la que informa de que el Sr. Torres Redondo ha sido liberado.
4. Habiendo examinado toda la información disponible, y sin determinar el carácter arbitrario o no de la detención de dicha persona, el Grupo de Trabajo decide archivar el caso sobre el Sr. Torres Redondo con arreglo al apartado a) del párrafo 17 de sus métodos de trabajo.

Aprobada el 29 de noviembre de 2005.

OPINIÓN N° 43/2005 (CHINA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 10 de marzo de 2005

Relativa al Sr. Peng Ming

El Estado Parte ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero no lo ha ratificado.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno de China por haber transmitido la información requerida.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 38/2005.)
4. Habida cuenta de las denuncias presentadas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta del Gobierno a la fuente, la cual facilitó al Grupo de Trabajo sus observaciones.
5. El Grupo de Trabajo considera que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y circunstancias del caso, teniendo en cuenta las alegaciones formuladas, la respuesta del Gobierno al respecto y las observaciones de la fuente.
6. La fuente informó al Grupo de Trabajo de que el Sr. Peng Ming, ciudadano chino nacido el 11 de octubre de 1956, había participado en 1997 en la creación de la Unión para el Desarrollo de China, una ONG dedicada a promover políticas ambientales sólidas y el desarrollo sostenible de China. La Unión para el Desarrollo de China posteriormente fue prohibida por el Gobierno. Desde enero de 1999 hasta agosto de 2000, las autoridades chinas recluyeron al Sr. Peng en un campamento de reeducación mediante el trabajo. Después de ser puesto en libertad, el Sr. Peng se trasladó a los Estados Unidos de América, donde se le concedió el estatuto de refugiado. En octubre de 2001, mientras se encontraba en los Estados Unidos, participó en la fundación del Partido de la Federación de China, del que fue elegido Presidente. El partido declaró su intención de convertirse en la base de la futura gobernanza democrática de China.
7. En marzo de 2001 el Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos autorizó al Sr. Peng a emigrar a ese país. El 15 de mayo de 2001 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) expidió un documento en el que certificaba que el Sr. Peng Ming, su esposa Nie Ying, su hijo Peng Yiale y su hija Peng Jia-Yin, eran considerados refugiados con arreglo al mandato del ACNUR. Ese certificado tenía una validez de cuatro meses. Más recientemente, el 19 de marzo de 2004, el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos expidió al Sr. Peng Ming un documento de viaje como refugiado.
8. En mayo de 2004 el Sr. Peng viajó a Tailandia y, desde allí, a Myanmar. El propósito de su viaje a Myanmar era crear refugios seguros para los refugiados chinos. En torno al 22 de mayo de 2004 las fuerzas de seguridad de Myanmar detuvieron al Sr. Peng bajo la acusación de estar en posesión de una elevada suma de yuanes renminbi falsificados. El 28 de mayo de 2004 fue entregado a la policía en la provincia de Yun Nan (China) e ingresó en el Centro de Detención de esa provincia.

9. Según la orden de detención de 16 de junio de 2004, el Departamento de Policía de Xishuangbanna detuvo al Sr. Peng amparándose en el artículo 61 de la Ley de procedimiento penal, por "supuesta posesión y utilización de moneda falsificada". Según otra orden de detención de 18 de junio de 2004, la policía de la ciudad de Wuhan detuvo al Sr. Peng el 17 de junio de 2004 por "presuntas infracciones de la Ley de procedimiento administrativo" y lo trasladó al Centro de Detención N° 2 de la ciudad de Wuhan. Según una orden de detención de 23 de julio de 2004, la policía de la ciudad de Wuhan detuvo al Sr. Peng ese mismo día bajo la acusación de "presunto secuestro".

10. El Sr. Peng sigue preso en el Centro de Detención N° 2 de la ciudad de Wuhan. Aunque sus familiares han contratado a dos abogados que ejercen en China para defenderlo, se ha restringido severamente su acceso al detenido. El Sr. Peng sufre cálculos renales dolorosos, pero se le ha denegado la hospitalización que necesita.

11. Además, la fuente sostiene que se mantiene recluido al Sr. Peng con el fin de impedirle llevar a cabo sus actividades políticas encaminadas a poner fin pacíficamente al actual Gobierno de China y sustituirlo por otro elegido democráticamente. Los continuos cambios en los cargos que se imputan al Sr. Peng (primero, posesión de moneda falsificada, después, delitos contra la Ley de procedimiento administrativo y, por último, secuestro) corroboran que el proceso penal incoado contra él es arbitrario y que es una farsa para encubrir los verdaderos motivos de su detención. La anterior reclusión del Sr. Peng en un campamento de reeducación por el trabajo confirma también los motivos puramente políticos de su detención.

12. Por último, la fuente señala que se está privando al Sr. Peng de su derecho a un proceso con las debidas garantías. El mero hecho de que fuera entregado a las autoridades chinas contravenía las normas internacionales, en particular el principio de no devolución. Además, las normas de derecho internacional exigen que las personas privadas de libertad tengan acceso a su familia y a un letrado. Al Sr. Peng se le han denegado ambos derechos.

13. En su respuesta, el Gobierno indicó que el Sr. Peng Ming es un varón de la etnia han, nacido en 1965 que tiene formación universitaria y es originario de Beijing. En 2001 empezó a crear una organización terrorista y utilizó artículos, publicaciones y ensayos publicados en Internet para divulgar su violenta ideología terrorista, recaudar fondos, constituir una base y reclutar formadores. Empleó todo tipo de métodos, en particular el secuestro y el asesinato, para llevar a cabo violentas actividades terroristas y trató de "paralizar Beijing en un instante y sembrar el caos", provocando "el consiguiente malestar social y una crisis económica". En junio de 2003 tramó un plan para entrenar a líderes terroristas en Myanmar que, a su vez, enseñarían a sus discípulos a perpetrar actos terroristas violentos como, por ejemplo secuestros y asesinatos. Cuando completaran su entrenamiento, los discípulos recibirían un diploma y se confiaba en que, a su regreso a China, reclutarían activamente a miembros para la organización terrorista y llevarían a cabo secuestros y actividades terroristas de otra índole.

14. Además, el Gobierno sostiene que durante un período de dos años transcurrido entre noviembre de 2001 y 2004, el Sr. Peng, actuando desde el extranjero, recopiló cierta información sobre influyentes presidentes de entidades bancarias, funcionarios del Gobierno e importantes empresarios tanto de China como del extranjero, e ideó, organizó e intentó llevar a la práctica una serie de secuestros (proyectos que fueron abortados). El 22 de mayo de 2004 el Sr. Peng entró en Myanmar procedente de Tailandia y fue detenido por la policía de Myanmar que

descubrió que llevaba consigo 108 millones de yuanes en moneda falsificada. El 20 de julio de 2005 la Fiscalía Popular de Wuhan en la provincia de Hubei entabló un proceso contra el Sr. Peng ante el Tribunal Popular Intermedio de Wuhan, imputándole los cargos de haber organizado y dirigido una organización terrorista, de secuestro y de posesión de moneda falsificada. En el momento en que el Gobierno envió su respuesta, se estaba celebrando la vista de este caso.

15. El Gobierno concluye señalando que el terrorismo constituye una violación brutal de la democracia y los derechos humanos; es el enemigo común de la humanidad; demuestra un completo desprecio por la vida y las obras humanas; y mancilla el derecho a la vida proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, una vida "en que los seres humanos... [estén] liberados del temor". Por consiguiente, para salvaguardar los derechos humanos, hay que tomar medidas enérgicas contra el terrorismo. El Gobierno de China se opone rotundamente a todas las formas de terrorismo y está aplicando activamente la Declaración del Milenio colaborando con todos los demás países del mundo para apoyar, adoptar y coordinar medidas de lucha contra el terrorismo internacional.

16. La fuente, al comentar la respuesta del Gobierno, sostiene que éste trata de distorsionar el caso presentando al Sr. Peng como un delincuente y un terrorista cuando es obvio que se trata de un disidente que reside en el extranjero y que goza de la condición de refugiado reconocida por las Naciones Unidas que le ha otorgado el ACNUR. La fuente sostiene que el Gobierno de Myanmar detuvo al Sr. Peng bajo cargos erróneos, lo que equivale a un secuestro. Según la fuente, las autoridades chinas formularon contra el Sr. Peng los mismos cargos (a saber, posesión de moneda falsificada en Myanmar). Este pretexto se ha utilizado también contra otros disidentes. La fuente sostiene que, si el Gobierno de China insiste en juzgar al Sr. Peng, el proceso debería tener lugar suceder en un tercer país donde se le garantizara el derecho a un juicio con las debidas garantías, cosa que no puede ocurrir en China donde ya fue perseguido en el pasado.

17. La fuente sostiene que, en esencia, el Gobierno confirma la información facilitada por ella en relación con las circunstancias en que se practicó la detención del Sr. Peng. Sin embargo, el Gobierno no da ninguna explicación sobre el procedimiento seguido para lograr que el Sr. Peng Ming fuera expulsado de Myanmar y puesto en manos de las autoridades chinas de la provincia de Yun Nan.

18. El Gobierno, que justifica la detención de Peng Ming basándose en su ideología y sus actividades supuestamente terroristas y de naturaleza violenta, informa además de que se está juzgando al Sr. Peng por los cargos que ha formulado contra él la Fiscalía de Distrito de la provincia de Hubei y que básicamente son: organización y dirección de una organización terrorista, secuestro y posesión de moneda falsificada.

19. La fuente reitera que el Sr. Peng Ming es ciertamente un disidente político que se opone al actual Gobierno y que ha publicado dos libros en los que critica al Gobierno. No obstante, pone de relieve que de ningún modo el Sr. Peng apoyó objetivos terroristas o realizó actividades violentas.

20. Al evaluar la información que figura en la comunicación en cuestión, el Grupo de Trabajo tiene dificultades para considerar que los fines atribuidos por el Gobierno chino a las actividades del Sr. Peng Ming equivalgan a actividades terroristas. La forma vaga e imprecisa en que el Gobierno describe la ideología de la organización creada por el Sr. Peng, supuestamente con el objetivo de "intentar paralizar la actividad de Beijing sembrando el malestar social y generando una crisis económica" [sic] no puede considerarse motivo suficiente para fundamentar la acusación de llevar a cabo actividades terroristas. En su evaluación, el Grupo de Trabajo toma en consideración la información facilitada por la fuente que no ha sido refutada por el Gobierno, a saber, que el Sr. Peng Ming pasó un año y medio en un campamento de "reeducación mediante el trabajo" y que el ACNUR reconoció su condición de refugiado.

21. Además, el Gobierno no ha facilitado ninguna información específica sobre la supuesta "recopilación de información sobre personalidades de la política y las finanzas" ni sobre los intentos de secuestro abortados que se imputan al Sr. Peng Ming.

22. Por último, aunque el Gobierno informa de que el Fiscal del Distrito también ha acusado al Sr. Peng Ming de haber falsificado 108 millones de yuanes, el vínculo por el que asocia este delito a las actividades políticas del Sr. Peng Ming, así como el hecho de que la fuente niega rotundamente esta acusación, permiten al Grupo de Trabajo suponer que la imputación de cargos por un delito común puede tener una motivación política.

23. El Grupo de Trabajo considera que cualquier limitación de las actividades políticas legítimas y no violentas realizadas por el Sr. Peng Ming pacíficamente y en ejercicio de sus derechos a la libertad de asociación y de expresión sería contraria a las normas de derecho internacional recogidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

24. A la luz de cuanto antecede, y sin necesidad de analizar la supuesta manera irregular en que el Sr. Peng Ming fue transferido a China desde Myanmar, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad del Sr. Peng Ming es arbitraria por ser contraria a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y corresponde a la categoría II de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

Habida cuenta de la opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Peng Ming de conformidad con las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El Grupo de Trabajo reitera al Gobierno la recomendación de que estudie la posibilidad de ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 29 de noviembre de 2005.

OPINIÓN N° 44/2005 (IRAQ Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

**Comunicación dirigida a los Gobiernos del Iraq y los Estados Unidos de América
el 18 de marzo de 2005**

Relativa al Sr. Abdul Jaber al-Kubaisi

Ambos Estados son Partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo lamenta que sólo respondiera el Gobierno de los Estados Unidos de América facilitando únicamente información general que no se refería específicamente a la persona en cuestión. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y circunstancias del caso.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 38/2005.)
4. Según la información recibida, el Sr. Adbul Jaber al-Kubaisi es fundador y director del semanario *Nida al watan* ("La Llamada de la Nación") y Presidente de la Alianza Patriótica del Iraq; reside en Al-Hamriya (Bagdad). El Sr. Al-Kubaisi fue víctima del régimen de Saddam Hussein. Se vio obligado a vivir en el exilio durante casi 30 años: primero, en la República Árabe Siria y después, desde 1995, en Francia, donde tanto él como su familia obtuvieron la condición de refugiados. Dos de sus hermanos fueron ejecutados bajo el régimen de Saddam Hussein. Sin embargo, el Sr. Al-Kubaisi no estaba a favor ni de las sanciones impuestas por las Naciones Unidas al Iraq ni de la guerra en 2003, y mantuvo una estrecha colaboración con algunos de los actuales dirigentes del Iraq.
5. El Sr. Al-Kubaisi fue detenido en su domicilio en la noche del 4 al 5 de septiembre de 2005 por unos 30 soldados de una Unidad de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Llegaron en tres vehículos blindados mientras que un helicóptero supervisaba la operación. No se le presentó una orden de detención. Los soldados lo condujeron a un lugar secreto y, ocho horas después, el 5 de septiembre de 2004, los mismos agentes de las Fuerzas Especiales regresaron para registrar su vivienda. Además de romper la puerta principal y las ventanas y de destrozar el mobiliario, confiscaron los datos y archivos relativos al periódico *Nida al watan*.
6. En febrero de 2005 el hermano del Sr. Al-Kubaisi fue informado oficiosamente de que el Sr. Al-Kubaisi se encontraba retenido en el campamento Cropper, un campamento militar de los Estados Unidos cercano al aeropuerto de Bagdad. Sus familiares no recibieron ninguna información oficial y no se ha dado ninguna explicación para justificar su detención. No se han autorizado visitas ni correspondencia y tampoco se ha permitido a su abogado entrevistarse con él.
7. Según la fuente, el Sr. Al-Kubaisi estaba recluido en una celda de aislamiento en condiciones deplorables e inhumanas. Se ha expresado el temor de que esté siendo víctima de torturas.

8. Además, se informó de que, en varias ocasiones, los familiares del Sr. Al-Kubaisi se habían dirigido al Ministerio del Interior iraquí; al ejército iraquí; a las autoridades militares de los Estados Unidos; a la Embajada de los Estados Unidos y a la Oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja en Bagdad, sin obtener ningún resultado.

9. La fuente considera que el Sr. Al-Kubaisi fue detenido debido a sus artículos en detracción de la ocupación militar del Iraq liderada por los Estados Unidos, en los que pedía al pueblo iraquí que pusiera término a tal situación. Se dijo que, la víspera de su detención, el Sr. Al-Kubaisi había concedido una entrevista al periódico francés *Journal du Dimanche* en la que habló de la situación de dos periodistas franceses secuestrados en el Iraq, Christian Chesnot y Georges Malbrunot. En dicha entrevista afirmó que haría todo lo posible por lograr su liberación.

10. El Gobierno de los Estados Unidos proporcionó información general sobre el campamento Cropper, un centro de detención reservado para detenidos por motivos de seguridad considerados muy importantes. Sostuvo que la situación de los prisioneros por motivos de seguridad, retenidos por la Fuerza Multinacional en el Iraq al amparo de las normas del derecho internacional humanitario y la resolución 1546 del Consejo de Seguridad, se regía por las normas de derecho internacional humanitario y, por lo tanto, el Gobierno de los Estados Unidos afirmó que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria no era competente para examinar este asunto.

11. El Gobierno de los Estados Unidos ofreció información de carácter general sobre el trato dispensado a los detenidos por motivos de seguridad y su cooperación al respecto con el Gobierno del Iraq y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Sin embargo, rehusó confirmar o denegar la presencia del Sr. Al-Kubaisi en el campamento Cropper o que estuviera bajo su custodia. El Gobierno de los Estados Unidos invita a sus familiares a que pidan información a la Fuerza Multinacional.

12. Al presentar sus observaciones sobre la respuesta del Gobierno, la fuente señaló que el Gobierno de los Estados Unidos no había respondido a las preguntas sobre la detención del Sr. Al-Kubaisi y reiteró que el Comité Internacional de la Cruz Roja no podía visitar el campamento Cropper y dar información concreta a los familiares. Lo mismo ocurría con las autoridades iraquíes y los letrados del Colegio de Abogados del Iraq. La fuente añadió que el Parlamento Europeo había aprobado una resolución sobre el Iraq en la que pedía la liberación del Sr. Al-Kubaisi.

13. El Grupo de Trabajo desearía subrayar que, por una cuestión de principio, la aplicación del derecho internacional humanitario a un conflicto armado internacional o no internacional no impide aplicar las normas de derechos humanos. Los dos regímenes jurídicos son complementarios y no se excluyen recíprocamente. En caso de que las disposiciones de los dos regímenes entren en conflicto respecto de una determinada situación, deberá determinarse cuál es la *lex specialis* y ésta será la ley aplicable. El Grupo de Trabajo adoptó ese enfoque en su "Dictamen jurídico sobre la privación de libertad de las personas detenidas en la Bahía de Guantánamo" (E/CN.4/2003/8, párr. 64).

14. En lo que respecta al mandato, el Grupo de Trabajo considera que cuando se priva de libertad a las personas en el contexto de un conflicto armado internacional, pero se les niega la

protección de los Convenios de Ginebra Tercero y Cuarto, no procede aplicar los criterios para no abordar las situaciones de conflicto armado internacional que se recogen en el párrafo 14 de los métodos de trabajo¹. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo ya ha examinado comunicaciones de detenidos que se encontraban en esa situación².

15. En el caso que se está examinando, el Sr. Al-Kubaisi fue detenido en su domicilio en la noche del 4 al 5 de septiembre de 2004 por soldados de una Unidad de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos y fue conducido a un lugar no revelado. Esto ocurrió cuando los Estados Unidos ya no ostentaban la condición de Potencia ocupante en el Iraq a tenor de lo dispuesto en el Cuarto Convenio de Ginebra. Aunque se considerara que los Estados Unidos son una Potencia ocupante en ese país y que el Sr. Al-Kubaisi fue detenido por representar una amenaza contra la seguridad de la Potencia ocupante, o bien se considerara que, al amparo de la resolución 1546 (2004) del Consejo de Seguridad, los Estados Unidos están autorizados a detener a civiles, ambos países siguen obligados por las disposiciones del Cuarto Convenio de Ginebra y por el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos en los que son Parte los Estados Unidos y el Iraq, y de cuyo cumplimiento no se han apartado.

16. De conformidad con el artículo 78 del Cuarto Convenio de Ginebra, sólo se podrá proceder a la detención administrativa o al internamiento de civiles en los territorios ocupados "por razones imperiosas" de seguridad. En su observación sobre el artículo 78 del Convenio, el Comité Internacional de la Cruz Roja explica que: "En cualquier caso, estas medidas sólo podrán tomarse por razones de seguridad imperiosas y reales; y deberán tener siempre carácter excepcional". El internamiento se llevará a cabo según el procedimiento habitual con arreglo a las disposiciones del Convenio.

17. En el párrafo 4 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se exige que "toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal".

18. En ausencia de comentarios del Gobierno de los Estados Unidos sobre el caso específico que se ha señalado a su atención y ante la falta de respuesta por parte del Gobierno del Iraq, el Grupo de Trabajo está obligado a aceptar las afirmaciones de la fuente, a saber, que el Sr. Al-Kubaisi fue detenido y sigue recluido en el campamento Cropper, un campamento militar de los Estados Unidos, y que la única razón para ello son sus ideas políticas. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo considera que la prolongada privación de libertad (14 meses) del Sr. Al-Kubaisi en un lugar secreto sin permitirle tener acceso al Comité Internacional de la Cruz Roja, sus familiares, letrados u otras personas del exterior contraviene las disposiciones del Cuarto Convenio de Ginebra, así como el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

¹ Véase el dictamen jurídico del Grupo de Trabajo sobre la detención en la cárcel de El-Khiam (E/CN.4/2000/4, párrs. 11 a 18) y la privación de libertad de las personas detenidas en la Bahía de Guantánamo (E/CN.4/2003/8, pág. 21).

² Véase la Opinión N° 5/2003 (Estados Unidos de América) (E/CN.4/2004/3/Add.1, pág. 33).

19. A la luz de cuanto antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

Sobre la base de la información anterior, el Grupo de Trabajo concluye que la detención del Sr. Abdul Jaber al-Kubaisi es arbitraria, ya que contraviene el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a la categoría III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

20. Habiendo emitido esta opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Abdul Jaber al-Kubaisi, conforme a las normas y principios enunciados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 30 de noviembre de 2005.

OPINIÓN N° 45/2005 (IRAQ Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Comunicación dirigida a los Gobiernos el 17 de enero de 2005

Relativa al Sr. Tareq Aziz

Ambos Estados son Partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 38/2005.)
3. Habida cuenta de las denuncias presentadas, el Grupo de Trabajo agradece la información recibida del Gobierno de los Estados Unidos de América. También habría acogido con satisfacción la cooperación del Gobierno del Iraq. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta del Gobierno de los Estados Unidos a la fuente, la cual facilitó al Grupo de Trabajo sus observaciones.
4. Según la información recibida de la fuente, el Sr. Tareq Aziz, ciudadano iraquí nacido en Mosul (Iraq) el 6 de febrero de 1936, es periodista y profesor de inglés de profesión. Fue uno de los miembros de más alto rango del Gobierno del Iraq, ocupando primero el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores y posteriormente el de Viceprimer Ministro.
5. El 20 de marzo de 2003 miembros de las fuerzas militares de los Estados Unidos y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte principalmente invadieron el Iraq. El 9 de abril de 2003 los Estados Unidos asumieron oficialmente el control de la seguridad en Bagdad y se declaró el fin del régimen de Saddam Hussein. El 1° de mayo de 2003 el Presidente de los Estados Unidos anunció el término de las principales operaciones de combate en la guerra del Iraq. Como se reconoce en la resolución 1483 (2003) del Consejo de Seguridad, en torno a esa fecha los Estados Unidos y el Reino Unido asumieron "la autoridad, la responsabilidad y las obligaciones específicas que, en virtud del derecho internacional aplicable, corresponde a esos Estados en su calidad de Potencias ocupantes bajo un mando unificado". Las fuerzas de la Coalición crearon una Autoridad Provisional de la Coalición bajo el mando de un Administrador designado por los Estados Unidos. Esa Autoridad formó un Consejo de Gobierno iraquí provisional. El 30 de junio de 2004 terminó la ocupación del Iraq y la Autoridad Provisional de la Coalición dejó de existir. A partir de ese momento, el Iraq reafirmó su plena soberanía y un Gobierno provisional del Iraq asumió por entero la responsabilidad de gobernar el país (véanse los párrafos 1 y 2 de la resolución 1546 (2004) del Consejo de Seguridad). Sin embargo, de conformidad con esa resolución, a petición del Gobierno del Iraq, siguió presente en el país una fuerza multinacional, compuesta esencialmente por los ejércitos de los Estados Unidos y del Reino Unido.
6. Además, la fuente señala que el 24 de abril de 2003 el Sr. Tareq Aziz se rindió a miembros de las fuerzas militares de los Estados Unidos en Iraq y fue recluido en un lugar no revelado. Desde esa fecha hasta el momento en que se presentó la comunicación en diciembre de 2004, su único contacto con sus familiares (que actualmente residen en Jordania) tuvo lugar a través de dos cartas que les hizo llegar la delegación en Bagdad del Comité Internacional de la Cruz Roja. Sus familiares no saben si él ha recibido las numerosas cartas que le han enviado.

7. La fuente desconoce si el Sr. Aziz fue detenido inicialmente como prisionero de guerra o con otra condición jurídica.
8. El 10 de diciembre de 2003 el Consejo de Gobierno iraquí creó el Tribunal Especial del Iraq. A tenor de lo dispuesto en el apartado b) del artículo 1 de su Estatuto, el tribunal "tendrá jurisdicción sobre cualquier ciudadano iraquí o residente en el Iraq acusado de cualquiera de los delitos que se enumeran en los artículos 11 a 14, cometidos entre el 17 de julio de 1968 y el 1º de mayo de 2003 inclusive, en el territorio de la República del Iraq o en cualquier otro lugar, en particular los delitos perpetrados en relación con las guerras del Iraq contra la República Islámica del Irán y el Estado de Kuwait". Los delitos enumerados en los artículos 11 a 14 del Estatuto son: el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y la violación de ciertas leyes iraquíes citadas en el artículo 14. El 11 de octubre de 2005, el Presidente del Iraq firmó el nuevo estatuto y el nuevo reglamento del tribunal, según los cuales éste pasó a denominarse Tribunal Penal Supremo del Iraq (denominación empleada en lo sucesivo).
9. La fuente afirma que el 1º de julio de 2004 el Sr. Aziz compareció ante el Tribunal Especial del Iraq con el fin de hacer su alegato, como se estipula en el apartado c) del artículo 21 del Estatuto. La vista se celebró en un lugar secreto y el acusado no fue asistido por un abogado. Una empresa no autorizada tomó fotografías de esta audiencia que fueron difundidas a los medios de comunicación de todo el mundo. En esas fotografías podía verse a Tareq Aziz con el uniforme color naranja característico de los reclusos en los Estados Unidos y con los pies encadenados. Había perdido mucho peso y parecía confuso y perdido.
10. Un hijo de Tareq Aziz contrató a un equipo de abogados para que representaran a su padre; sin embargo, hasta la fecha en que se presentó la comunicación en diciembre de 2004, aún no se había permitido a los letrados ponerse en contacto con su cliente, ni visitándolo en su lugar de detención, ni por teléfono ni por correspondencia. Los abogados tampoco habían recibido ninguna información o documentos sobre los cargos que se le imputaban. El Sr. Aziz seguía privado de libertad en régimen de aislamiento en un lugar desconocido y sin tener acceso a un abogado ni a su familia.
11. La fuente sostiene que la detención de Tareq Aziz es arbitraria en lo que respecta a la categoría III del mandato del Grupo de Trabajo. La fuente aduce que, dado que Tareq Aziz fue obligado a preparar su juicio totalmente aislado del mundo exterior, recluido en un lugar secreto, privado (hasta el momento en que se presentó la comunicación inicial) de todo contacto con su abogado (aunque los cargos que se le imputan deben de ser muy graves ya que compete juzgarlos al Tribunal Penal Supremo iraquí) y en precario estado de salud, el incumplimiento de las normas internacionales sobre un proceso con las debidas garantías es tan grave como para considerar arbitraria su prisión provisional, así como cualquier pena de prisión que se le imponga después de ser condenado.
12. La fuente señala que, sea cual fuere la condición jurídica de Tareq Aziz después de su detención, actualmente está privado de libertad *de jure* por las autoridades iraquíes soberanas mientras que *de facto* se encuentra en manos de las fuerzas de la Coalición, más concretamente de los Estados Unidos. Por lo tanto, la fuente llega a la conclusión de que la responsabilidad jurídica de esta detención arbitraria recae tanto sobre el Iraq como sobre los Estados Unidos.

13. En su respuesta a la comunicación, el Gobierno de los Estados Unidos pone de relieve que, como también señaló la fuente, Tareq Aziz está físicamente preso bajo la custodia de la Fuerza Multinacional en el Iraq en virtud del acuerdo entre ésta y el Ministerio de Justicia iraquí, pero que se le mantiene detenido con arreglo a la autoridad legal de un tribunal iraquí. Por lo tanto, el Gobierno de los Estados Unidos considera que el Gobierno del Iraq es el más indicado para explicar los motivos legales de la privación de libertad de Tareq Aziz.

14. Sin embargo, como se indicó anteriormente, el Grupo de Trabajo no recibió ninguna información del Gobierno del Iraq.

15. En su respuesta a la declaración del Gobierno de los Estados Unidos, la fuente insiste en que debe considerarse a ambos Gobiernos responsables de la detención de Tareq Aziz. En particular, el Gobierno de los Estados Unidos es responsable del riguroso aislamiento al que está sometido Tareq Aziz, que le impide preparar adecuadamente su defensa.

16. Además, la fuente proporciona información actualizada sobre la situación de Tareq Aziz, a quien se le permitió recibir por primera vez la visita de uno de sus abogados poco después de que se presentara la comunicación al Grupo de Trabajo en diciembre de 2004. En marzo y agosto de 2005 Tareq Aziz y su abogado se entrevistaron otras cuatro veces; en todas estas ocasiones, estuvo presente un funcionario de los Estados Unidos. Además, aún no se ha informado a Tareq Aziz de los cargos que pesan sobre él. La fuente concluye que la detención de Tareq Aziz sigue siendo arbitraria por los motivos que esgrimió en el momento en que presentó la comunicación.

17. La comunicación se puso en conocimiento de los dos Gobiernos interesados en una carta del Presidente-Relator de 17 de enero de 2005, transmitida de conformidad con el artículo 15 de los métodos de trabajo revisados del Grupo de Trabajo, en la que se pedía a esos Gobiernos que facilitaran sus respectivas respuestas dentro de un plazo de 90 días.

18. Dado que ninguno de ellos respondió dentro de ese plazo, el Grupo de Trabajo envió una comunicación a la Misión Permanente de la República del Iraq ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (el 29 de abril de 2005) y a la Misión Permanente de los Estados Unidos de América ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (el 3 de mayo de 2005). En la comunicación se informaba a ambos Gobiernos de que el siguiente período de sesiones del Grupo de Trabajo se celebraría en Ginebra del 23 al 27 de mayo de 2005 y que el Grupo debatiría la comunicación presentada en nombre de Tareq Aziz. Se recordaba a las Misiones Permanentes que no se había respondido a la carta del Presidente-Relator de 17 de enero. El 18 de julio de 2005 el Gobierno de los Estados Unidos de América dio una respuesta en la que recomendaba al Grupo de Trabajo que solicitara información al Gobierno del Iraq. Dado que éste no había contestado a la carta del Presidente-Relator de 17 de enero de 2005, el Grupo de Trabajo volvió a instar a la Misión Permanente del Iraq en Ginebra a que diera una respuesta en dos comunicaciones de fecha 8 de agosto y 28 de octubre de 2005, respectivamente. No se ha recibido ninguna contestación.

19. El párrafo 16 de los métodos de trabajo revisados del Grupo de Trabajo reza: "Aun cuando no se haya recibido una respuesta al expirar el plazo, el Grupo de Trabajo puede emitir una opinión sobre la base de todos los datos recopilados".

20. Con el fin de poder precisar la ley aplicable a las distintas cuestiones planteadas por la fuente y determinar qué Gobierno es responsable con arreglo a las normas de derecho internacional de la legalidad de la detención y de la posible violación, si la hubiere, de los derechos del Sr. Tareq Aziz, el Grupo de Trabajo considera necesario poner de relieve la particularidad de las circunstancias del caso que tiene ante sí.

21. El Grupo de Trabajo quisiera subrayar que el Sr. Tareq Aziz era el Viceprimer Ministro del Iraq cuando las fuerzas armadas de los Estados Unidos y del Reino Unido invadieron el Iraq en marzo de 2003. El 1º de mayo de 2003 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en su resolución 1483, admitió que los Estados Unidos y el Reino Unido de Gran Bretaña habían asumido la autoridad, la responsabilidad y las obligaciones específicas en virtud de las normas de derecho internacional en el territorio del Iraq. Es un hecho innegable que el Sr. Aziz se rindió a las fuerzas militares de los Estados Unidos el 24 de abril de 2003 y desde ese momento está privado de libertad. La fuente no sabe a ciencia cierta si fue considerado un "prisionero de guerra" o "internado civil" durante el período inicial de su detención. En su respuesta, el Gobierno de los Estados Unidos tampoco aclaró cuál era la condición jurídica que se atribuyó al Sr. Tareq Aziz al practicar su detención. Sin embargo, es de sobra conocido que, desde el inicio del conflicto en el Iraq, el Gobierno de los Estados Unidos reconoció que los Convenios de Ginebra se aplicaban de manera general a los individuos capturados en el conflicto. El Gobierno de los Estados Unidos también aseguró que tenía intención de cumplir con el artículo 5 del Tercer Convenio de Ginebra tratando a todas las personas que hubieran cometido un acto de beligerancia y hubieran sido capturadas en el Iraq como prisioneros de guerra salvo si un tribunal de guerra competente había determinado que no les correspondía el estatuto de prisionero de guerra, o en espera de ello³.

22. El Grupo de Trabajo opina que es indiferente que se considerara al Sr. Aziz prisionero de guerra o internado civil cuando fue detenido, ya que no puede refutarse que, aunque la Coalición invasora declarara el fin de las principales operaciones de combate el 1º de mayo de 2003, la ocupación total aún continuó hasta el 30 de junio de 2004. Por lo tanto, dado que la detención de Tareq Aziz se produjo en el contexto de un conflicto armado internacional que llevó a la invasión del Iraq por las fuerzas del Gobierno de los Estados Unidos y la Coalición armada, su condición jurídica está regulada por el Tercer Convenio de Ginebra, al menos hasta el 30 de junio de 2004.

23. Por consiguiente, y de conformidad con el párrafo 16 de sus métodos de trabajo (párrafo 14 de sus métodos de trabajo revisados)⁴, el Grupo de Trabajo no juzgará la legalidad de la privación de libertad del Sr. Aziz durante el período comprendido entre el 13 de diciembre de 2003 y el 30 de junio de 2004, ya que se produjo en el contexto de un conflicto armado

³ Declaración realizada en abril de 2003: véase, por ejemplo, "Briefing on Geneva Convention, EPW and war crimes"(Sesión informativa sobre el Convenio de Ginebra, los enemigos prisioneros de guerra y los crímenes de guerra), 7 de abril de 2003 disponible en http://www.defenselink.mil/transcripts/2003/t04072003_t407genv.html.

⁴ Las situaciones de conflicto armado internacional, amparadas por el Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos Adicionales, no son competencia del Grupo de Trabajo, especialmente cuanto tiene competencia el Comité Internacional de la Cruz Roja".

internacional en curso en la medida en que el Gobierno de los Estados Unidos reconoció la aplicabilidad de los Convenios de Ginebra a los individuos capturados en el conflicto del Iraq y, según la fuente, el Comité Internacional de la Cruz Roja pudo hacer llegar dos cartas a los familiares de Tareq Aziz.

24. Con arreglo al quinto párrafo del artículo 119 del Tercer Convenio de Ginebra y el segundo párrafo del artículo 133 del Cuarto Convenio de Ginebra, los prisioneros de guerra y los internados civiles procesados por un crimen o un delito penal podrán ser retenidos hasta que finalice el proceso. El Grupo de Trabajo no está en condiciones de juzgar la conformidad con las correspondientes disposiciones del derecho internacional humanitario (artículos 12, 118 y 119 del Tercer Convenio de Ginebra en el que son Partes los Estados Unidos y el Iraq) del procedimiento por el que el Sr. Tareq Aziz fue puesto a disposición del Gobierno provisional del Iraq por la Autoridad Provisional de la Coalición en su calidad de Potencia ocupante. Sin embargo, no se discute el hecho de que si bien el Sr. Aziz fue transferido *de jure*, sigue estando *de facto* bajo la custodia de los Estados Unidos. En su respuesta al Grupo de Trabajo, el Gobierno de los Estados Unidos reconoce que "aunque se encuentra bajo la autoridad de un tribunal iraquí, el detenido está bajo la custodia de la "Fuerza Multinacional en el Iraq" en virtud de un acuerdo alcanzado con el Ministro de Justicia iraquí".

25. El Grupo de Trabajo concluye que hasta el 1º de julio de 2004 el Sr. Tareq Aziz permaneció detenido exclusivamente bajo la responsabilidad de los miembros de la Coalición como Potencias ocupantes, o más precisamente, bajo la responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos. A partir de ese momento, y puesto que el Tribunal Penal del Iraq es un órgano jurisdiccional del Estado soberano del Iraq, la prisión preventiva de una persona imputada ante un tribunal es responsabilidad del Iraq. Dado que el Sr. Aziz físicamente está bajo la custodia de las autoridades de los Estados Unidos, cualquier posible conclusión acerca del carácter arbitrario de su privación de libertad puede entrañar la responsabilidad internacional del Gobierno de los Estados Unidos.

26. En cuanto al período de privación de libertad posterior al 30 de junio de 2004, el Sr. Aziz compareció el 1º de julio de 2004 ante el Tribunal Penal Supremo del Iraq con el fin de presentar su defensa. Posiblemente fue informado entonces de los cargos que se le imputaban. En esa ocasión no contó con la asistencia de un letrado. Posteriormente, en diciembre de 2004 y en otras cuatro ocasiones entre marzo y agosto de 2005, se le permitió entrevistarse y consultar con uno de sus abogados, pero siempre en presencia de un funcionario de los Estados Unidos. Por lo tanto, cualquiera haya sido su condición jurídica cuando estuvo preso antes del 1º de julio de 2004, después pasó a ser un acusado en un proceso penal con derecho a la protección que ofrece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dado que tanto los Estados Unidos como el Iraq han ratificado este instrumento internacional, pueden aplicarse a este caso de privación de libertad el párrafo 3 del artículo 9 y el artículo 14 del Pacto.

27. El Grupo de Trabajo no ha recibido información sobre el juicio que se ha previsto contra el Sr. Aziz ni sobre los hechos y delitos por los que va a ser juzgado. La posibilidad de que tenga un juicio con las debidas garantías (cuestión fundamental para determinar la legalidad o la arbitrariedad de su privación de libertad antes del juicio, así como durante éste o después de que se haya dictado sentencia) dependerá en gran medida de las circunstancias específicas en que se lleve a cabo dicho juicio. El Grupo de Trabajo no puede especular sobre lo que ocurrirá en el futuro, pero ya pueden detectarse algunos signos negativos. El Grupo de Trabajo tuvo acceso a

información sobre el Tribunal Penal Supremo del Iraq y su reglamento y recopiló datos al respecto.

28. Este tribunal fue creado por el Consejo de Gobierno iraquí el 10 de diciembre de 2003 y, en los primeros días de agosto de 2004, la Asamblea provisional iraquí modificó el reglamento que lo regulaba. El Grupo de Trabajo desconoce los criterios utilizados por el Gobierno iraquí para designar a los jueces que componen este tribunal. Sin embargo, la supuesta retirada o sustitución de varios magistrados es motivo de preocupación. El ambiente que rodea a la preparación del juicio, que puede repercutir negativamente en la independencia e imparcialidad del tribunal, o al menos dar la impresión de que éste no cumple los requisitos de independencia e imparcialidad, también inquieta al Grupo de Trabajo. El asesinato de abogados de la defensa, así como la actitud amenazante del público con respecto a algunos acusados, motivada por los males sufridos bajo el régimen anterior, podrían ejercer una presión excesiva sobre el tribunal. Más concretamente, el hecho de que hace poco volvió a introducirse la pena capital y no se permite apelar después de que se haya dictado sentencia, en total contravención del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, puede menoscabar la necesaria imparcialidad del proceso. También se puso en conocimiento del Grupo de Trabajo que hay discrepancias entre el antiguo Código de Procedimiento Penal iraquí y el reglamento del Tribunal Penal Supremo sobre puntos importantes y que no está claro qué norma prevalece.

29. En su informe anual (2005) a la Asamblea General de las Naciones Unidas, Leandro Despouy, Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, planteó sus propios temores sobre los procesos judiciales que se desarrollaban ante el "Tribunal Especial del Iraq":

"Más allá del compromiso y los esfuerzos personales de los jueces [...] y de la cooperación prestada por algunos países para la formación [del tribunal], preocupa [al Relator Especial] que la gran presión a la que dichos miembros están sometidos y la inseguridad reinante en el Iraq, afecten su independencia. A ello se suman las carencias del propio tribunal, algunas de las cuales se remontan al modo en que fue instituido, y en particular a las limitaciones en su competencia personal y temporal, que lo constriñen a enjuiciar únicamente a iraquíes por actos cometidos con anterioridad al 1° de mayo de 2003, fecha del inicio de la ocupación. La posibilidad de aplicar la pena de muerte prueba hasta qué punto el tribunal transgrede los estándares internacionales de derechos humanos. Además, la circunstancia de haber sido constituido durante un período de ocupación y con financiamiento principalmente de los Estados Unidos ha suscitado innumerables críticas en cuanto a su legitimidad, que han dañado su credibilidad.

El Relator Especial insta a las autoridades iraquíes a seguir el ejemplo de otros países con sistemas judiciales deficientes, acudiendo a las Naciones Unidas para conformar un tribunal independiente que responda a los parámetros internacionales en materia de derechos humanos."⁵

⁵ Véase A/60/321, pág. 15.

30. Estos temores también se refieren al juicio preparado contra el Sr. Tareq Aziz. Ya en la fase preparatoria del juicio contra él pueden detectarse algunos vicios de procedimiento graves, sobre todo en relación con el acceso pleno e ilimitado de éste a su abogado para preparar su defensa en privado sin que tengan que estar presentes miembros del personal penitenciario u otros funcionarios.

31. El Grupo de Trabajo es plenamente consciente de que el proceso judicial en curso en el Iraq tiene por fin hacer comparecer ante la justicia a los dirigentes de más alto rango del antiguo régimen de Saddam Hussein, entre ellos Tareq Aziz, por los delitos más graves que, presuntamente cometieron contra el pueblo iraquí y algunos países vecinos. Los delitos por los que se les juzga comprenden, aunque no exhaustivamente, el genocidio, los crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

32. El Grupo de Trabajo quisiera subrayar que, como mecanismo de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, defiende firmemente el principio de que cualquier violación de los derechos humanos, cometida por políticos u otras personas, debe ser investigada y repararse, si procede, haciendo que los autores comparezcan ante la justicia. No obstante, todo proceso destinado a corregir graves violaciones de los derechos humanos, y como tal proceso acogido positivamente por el Grupo de Trabajo, deberá respetar escrupulosamente las reglas y normas elaboradas y aceptadas por la comunidad internacional para respetar los derechos de toda persona acusada de un delito penal. La violación de los derechos del acusado puede también tener consecuencias negativas. Esto es especialmente cierto en el caso en cuestión; toda falta de respeto de los derechos de los dirigentes del antiguo régimen iraquí en los procesos penales incoados contra ellos puede menoscabar la credibilidad del sistema de justicia de la democracia emergente en el Iraq.

33. El Grupo de Trabajo opina que, en esas circunstancias, la manera correcta de garantizar que la privación de libertad del Sr. Tareq Aziz no equivale a una privación de libertad arbitraria sería velar por que el juicio se celebre ante un tribunal independiente e imparcial en estricta conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

34. Habida cuenta de cuanto antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

- a) El Grupo de Trabajo no se pronunciará con respecto a la presente arbitrariedad de la privación de libertad del Sr. Tareq Aziz durante el período del conflicto armado internacional.
- b) En lo que respecta a la presente arbitrariedad de su privación de libertad tras el restablecimiento de la soberanía iraquí, el Grupo de Trabajo seguirá la evolución del proceso y pedirá más información a los dos Gobiernos interesados y a la fuente. Entretanto, y con referencia al apartado c) del párrafo 17 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo decide mantener el caso en examen a la espera de recibir más información.

Aprobada el 30 de noviembre de 2005.

OPINIÓN N° 46/2005 (IRAQ Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Comunicación dirigida a los Gobiernos el 9 de marzo de 2005

Relativa al Sr. Saddam Hussein al-Tikriti

Ambos Estados son Partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su reconocimiento a ambos Gobiernos por haber facilitado información con respecto a esta comunicación.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 38/2005.)
4. Habida cuenta de las alegaciones formuladas, el Grupo de Trabajo acoge favorablemente la cooperación de los Gobiernos del Iraq y de los Estados Unidos de América. El Grupo de Trabajo transmitió las respuestas proporcionadas por ambos Gobiernos a la fuente y recibió sus observaciones.
5. De conformidad con la información recibida de la fuente, el Sr. Saddam Hussein al-Tikriti, nacido el 28 de abril de 1937, de nacionalidad iraquí, es el ex Presidente del Iraq.
6. De conformidad con información de dominio público, el 20 de marzo de 2003 fuerzas militares principalmente de los Estados Unidos de América y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte empezaron la invasión del Iraq. El 9 de abril de 2003, Bagdad fue tomada oficialmente por las fuerzas de los Estados Unidos y se declaró el fin del régimen iraquí encabezado por el Presidente Saddam Hussein. El 1° de mayo de 2003, el Presidente de los Estados Unidos anunció que habían terminado las principales operaciones de combate de la guerra del Iraq. Como se reconoce en la resolución 1483 (2003) del Consejo de Seguridad, alrededor de esa fecha los Estados Unidos y el Reino Unido "asumieron la autoridad, la responsabilidad y las obligaciones específicas que, en virtud del derecho internacional aplicable, correspondían a esos Estados en su calidad de Potencias ocupantes bajo un mando unificado".
 - a) Las fuerzas de la Coalición establecieron una Autoridad Provisional de la Coalición, con un administrador designado por los Estados Unidos, y la Autoridad Provisional de la Coalición nombró un Consejo de Gobierno provisional del Iraq. El 30 de junio de 2004 terminó la ocupación del Iraq y la Autoridad Provisional de la Coalición dejó de existir. A partir de esa fecha el Iraq reafirmó su plena soberanía y un Gobierno provisional asumió plena responsabilidad por el gobierno del país (véanse los párrafos 1 y 2 de la resolución 1546 (2004) del Consejo de Seguridad). Sin embargo, de conformidad con la resolución 1546 del Consejo de Seguridad, una fuerza multinacional, integrada principalmente por fuerzas militares de los Estados Unidos y del Reino Unido, permaneció en el Iraq a solicitud del Gobierno provisional.
7. El 13 de diciembre de 2003, el Sr. Saddam Hussein fue capturado en Tikrit por fuerzas militares de los Estados Unidos, que entonces eran la Potencia ocupante en el Iraq, y fue detenido en un lugar secreto. A partir de esa fecha hasta la presentación de la comunicación, su único contacto con su equipo de defensa se produjo el 16 de diciembre de 2004, en que se entrevistó con uno de sus abogados bajo la supervisión de por lo menos dos guardias militares de

los Estados Unidos, que estuvieron presentes durante la entrevista. La fuente señala que a pesar de las reiteradas solicitudes formuladas tanto antes como después de esta entrevista, se denegó a los abogados del comité de defensa la posibilidad de celebrar otras entrevistas con su cliente.

8. La fuente alega que inicialmente el Sr. Saddam Hussein fue detenido en calidad de prisionero de guerra, con arreglo a lo dispuesto en el Tercer Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. Sin embargo, desde entonces, el Gobierno de los Estados Unidos ha afirmado que ha dejado de ser un prisionero de guerra y que es un prisionero del Gobierno del Iraq. La fuente añade que, a pesar de esta alegación del Gobierno de los Estados Unidos, Saddam Hussein continúa bajo control total de ese Gobierno.

9. El 10 de diciembre de 2003, el Consejo de Gobierno del Iraq estableció el Tribunal Especial del Iraq. De conformidad con el apartado b) del artículo 1 de su estatuto:

"El tribunal tendrá jurisdicción sobre todo nacional iraquí o residente del Iraq acusado de los delitos que figuran en los artículos 11 a 14 *infra*, cometidos desde el 17 de julio de 1968 hasta el 1º de mayo de 2003 inclusive, en el territorio de la República del Iraq o en otro lugar, en particular los delitos cometidos en relación con las guerras del Iraq contra la República Islámica del Irán y el Estado de Kuwait."

Los delitos a que se hace referencia en los artículos 11 a 14 del Estatuto son los de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y las violaciones de algunas leyes iraquíes a que se hace referencia en el artículo 14. El 11 de octubre de 2005, el Presidente del Iraq firmó un nuevo estatuto y un nuevo reglamento del tribunal en que se le asigna el nuevo nombre de Tribunal Penal Supremo del Iraq.

10. De conformidad con información de dominio público, el Sr. Saddam Hussein compareció ante el Tribunal Penal Supremo del Iraq para su primera audiencia (acto de iniciación del proceso) el 1º de julio de 2004. La audiencia tuvo lugar en un lugar secreto y el acusado no fue asistido por un abogado defensor. El juez instructor se limitó a verificar la identidad del acusado. Además, se informó al Sr. Saddam Hussein de los siete cargos que se le imputaban. Dado que no tuvo la asistencia de un letrado, se negó a firmar los autos procesales.

11. La fuente alega además que la condición del Sr. Saddam Hussein debería estar abarcada por el Tercer Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, ya que fue capturado debido a su participación en un conflicto armado. Sin embargo, el Gobierno de los Estados Unidos, como Potencia ocupante y autoridad de custodia, le ha negado esa protección y las autoridades iraquíes han interpuesto denuncias contra él ante el tribunal. Por lo tanto, la fuente opina que la responsabilidad jurídica por su detención arbitraria afecta tanto al Iraq como a los Estados Unidos.

12. La fuente alega que la detención del Sr. Saddam Hussein es arbitraria por los siguientes motivos:

- La acusación contra él no se interpuso de manera oportuna;

- No se le concedieron los plenos privilegios de un prisionero de guerra (por ejemplo, el derecho a comunicarse con su familia sin demoras indebidas o a recibir los documentos relacionados con su representación legal);
- Fue obligado a preparar su juicio en condiciones de total aislamiento del mundo exterior;
- Fue detenido en un lugar secreto;
- Se limitaron estrictamente sus contactos con sus asesores jurídicos (aunque los cargos que se le imputaban debían ser de carácter sumamente grave para que competan al mandato del tribunal).

a) La fuente concluye que el incumplimiento de las normas internacionales relativas a un juicio imparcial es tan grave que hace arbitraria su detención preventiva, así como cualquier detención después de un fallo condenatorio. Además, la fuente alega que se negó al Sr. Saddam Hussein el derecho a impugnar la legalidad de su detención. Finalmente, la fuente expresa dudas sobre si en las condiciones de seguridad imperantes en el Iraq es del todo posible celebrar un juicio imparcial, ante un tribunal especial que carece de la independencia y la imparcialidad necesarias.

13. En su respuesta a la comunicación de fecha 2 de mayo de 2005, el Gobierno del Iraq señala que el Sr. Saddam Hussein está en espera de ser sometido a juicio y que es prematuro examinar los asuntos relativos a su derecho a preparar su defensa y a un juicio imparcial. En cuanto al lugar de su detención, se mantiene en secreto para protegerlo. El Gobierno informa además de que se permitió al Sr. Saddam Hussein reunirse con uno de sus abogados el 27 de abril de 2005, y que esa reunión duró seis horas y que el abogado pudo entrevistarse libremente con el Sr. Saddam Hussein en presencia de un oficial.

14. En su respuesta a la comunicación, el Gobierno de los Estados Unidos (como también ha señalado la fuente) subraya que el Sr. Saddam Hussein se encuentra bajo custodia física de la fuerza multinacional en el Iraq, con arreglo a los acuerdos entre la fuerza multinacional y el Ministro de Justicia del Iraq, aunque está detenido bajo la autoridad jurídica de un tribunal iraquí. En consecuencia, el Gobierno de los Estados Unidos considera que el Gobierno del Iraq está en mejores condiciones para aclarar el fundamento jurídico de su detención.

15. Al responder a la declaración del Gobierno de los Estados Unidos, la fuente alega que ya que es el Estado que efectivamente mantiene al Sr. Saddam Hussein en detención, los Estados Unidos son responsables de velar por que se respete su derecho a la seguridad de la persona. No pueden denegar esta responsabilidad con el argumento de que el Sr. Saddam Hussein se encuentra bajo custodia en nombre del Gobierno del Iraq o de que no está detenido en el territorio de los Estados Unidos.

16. En cuanto a la respuesta del Gobierno del Iraq, la fuente afirma que este Gobierno confirmó la exactitud de todas sus alegaciones. La fuente afirma que los derechos de Saddam Hussein a recibir asistencia letrada, a preparar su defensa y a un juicio imparcial han sido violados durante más de 20 meses (a partir de mediados de agosto de 2005). Añade que una sola reunión entre el abogado y el acusado en presencia de un oficial militar de los

Estados Unidos a todas luces no satisface los requisitos del derecho a la asistencia letrada. Finalmente, la fuente alega que la violación de los derechos del Sr. Saddam Hussein se ha visto agravada por los repetidos ataques contra el domicilio de su abogado defensor, así como por la humillación a la que se le sometió mediante la difusión de fotografías en que aparecía parcialmente desnudo y por el hecho de que el Gobierno permitió que fuera objeto de ataques físicos mientras se encontraba detenido.

17. A fin de poder explicar la ley aplicable a las diversas cuestiones planteadas por la fuente y determinar el Gobierno o los gobiernos responsables en virtud del derecho internacional por la legalidad de la detención y la eventual violación de los derechos del Sr. Saddam Hussein, el Grupo de Trabajo considera necesario destacar la particularidad de las circunstancias del caso que tiene ante sí.

18. El Grupo de Trabajo desearía hacer hincapié en que el Sr. Saddam Hussein era el Presidente de la República cuando las fuerzas armadas de los Estados Unidos y del Reino Unido invadieron el Iraq el 20 de marzo de 2003. El 1º de mayo de 2003, el Consejo de Seguridad, en su resolución 1483, reconoció que los Estados Unidos y el Reino Unido habían asumido la autoridad, la responsabilidad y las obligaciones aplicables en virtud del derecho internacional en el territorio del Iraq. El 13 de diciembre de 2003, Saddam Hussein fue capturado en Tikrit por las fuerzas militares de los Estados Unidos. Posteriormente, las fuerzas de ocupación establecieron una Autoridad Provisional de la Coalición bajo el control de un enviado nombrado por el Gobierno de los Estados Unidos.

a) El 30 de junio de 2004, la ocupación llegó a su fin y se restableció la plena soberanía del Iraq mediante la instauración de un Gobierno provisional. De conformidad con la resolución 1546 del Consejo de Seguridad, de 8 de junio de 2004, una fuerza multinacional integrada principalmente por fuerzas militares de los Estados Unidos y el Reino Unido permaneció en el Iraq a solicitud del Gobierno provisional. En determinado momento, antes de que se restableciera la soberanía del Iraq, el Sr. Saddam Hussein y otros miembros del anterior régimen iraquí fueron transferidos oficialmente o *de jure* de la Autoridad Provisional de la Coalición a la custodia de las autoridades iraquíes.

19. Según información de dominio público en relación con el caso que se examina, el 1º de julio de 2005, Saddam Hussein y otros 11 dirigentes baathistas comparecieron ante el juez de instrucción del Tribunal Penal Supremo del Iraq. Se informó a los acusados de los cargos que se les imputaban y fueron interrogados por el juez de instrucción. No estuvieron presentes sus asesores legales y no hay transcripciones públicas completas de las actuaciones.

20. La vista de la causa de Saddam Hussein y los siete coacusados en el caso *Dujail* empezó el 19 de octubre de 2005 en el Tribunal Penal Supremo del Iraq. En la audiencia, la defensa y algunos de los acusados plantearon los tres problemas siguientes:

- Que la defensa no había contado con tiempo suficiente para estudiar el expediente definitivo y preparar el caso;
- Que los abogados defensores no habían tenido suficiente acceso a los acusados;

- Que había motivos de preocupación con respecto a la legitimidad y competencia del tribunal.

21. El tribunal aplazó el juicio hasta el 28 de noviembre de 2005. En el momento de redactarse la presente opinión (30 de noviembre de 2005), se había concedido un nuevo aplazamiento hasta el 5 de diciembre de 2005.

22. El 20 de octubre de 2005, un día después de la audiencia inicial, el Sr. Sadoum al-Janabi, abogado de uno de los coacusados de Saddam Hussein, fue secuestrado de su oficina por hombres armados. Posteriormente fue hallado muerto con dos heridas de bala en la cabeza.

23. El 8 de noviembre de 2005, en Bagdad, varios hombres armados abrieron fuego desde un automóvil en marcha y asesinaron al Sr. Adel Muhammad al-Zubaidi, que estaba representando a otro acusado en el caso *Dujail*, e hirieron a otro abogado defensor, el Sr. Thamer al-Khuzai.

24. La fuente alega que el Sr. Saddam Hussein fue detenido inicialmente como prisionero de guerra pero que no se le han otorgado los plenos privilegios de un prisionero de guerra con arreglo al Tercer Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. En sus respuestas, ni el Gobierno de los Estados Unidos ni el Gobierno del Iraq proporcionaron información sobre esta alegación. Sin embargo, como bien se sabe, desde los primeros días del conflicto en el Iraq, el Gobierno de los Estados Unidos reconoció que los Convenios de Ginebra se aplicaban plenamente a las personas capturadas en ese conflicto. También ofreció garantías de que tenía la intención de cumplir lo dispuesto en el artículo 5 del Tercer Convenio de Ginebra y tratar a todos los beligerantes capturados en el Iraq como prisioneros de guerra, al menos hasta que un tribunal competente determinara que no tenían derecho a ese estatuto⁶.

25. La posición del Grupo de Trabajo es que si bien la Coalición invasora ha declarado que las principales operaciones de combate terminaron el 1º de mayo de 2003, la ocupación total continuó hasta el 30 de junio de 2004. Por lo tanto, ya que la detención de Saddam Hussein se produjo en el contexto de un conflicto armado internacional que desembocó en la invasión del Iraq por las fuerzas de los Estados Unidos y la Coalición armada, su estatuto está protegido por el Tercer Convenio de Ginebra, por lo menos hasta el 30 de junio de 2004.

26. En consecuencia, y de conformidad con el párrafo 16 de sus métodos de trabajo y el párrafo 14 de sus métodos de trabajo revisados⁷, el Grupo de Trabajo no evaluará la legalidad de la detención del Sr. Saddam Hussein en el período comprendido entre el 13 de diciembre de 2003 y el 30 de junio de 2004, ya que tuvo lugar durante un conflicto armado internacional y

⁶ Declaración formulada en abril de 2003: véase por ejemplo "Reunión de información sobre el Convenio de Ginebra, prisioneros de guerra y crímenes de guerra", 7 de abril de 2003, que puede consultarse en http://www.defenselink.mil/transcripts/2003/t04072003_t407genv.html.

⁷ "El Grupo de Trabajo no se ocupará de situaciones de conflictos armados internacionales en la medida en que éstos estén abarcados por los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos Adicionales, y en particular cuando el Comité Internacional de la Cruz Roja tenga competencia."

que el Gobierno de los Estados Unidos reconoció que los Convenios de Ginebra se aplicaban a las personas capturadas en el conflicto en el Iraq.

27. De conformidad con el quinto párrafo del artículo 119 del Tercer Convenio de Ginebra, se permite el internamiento de prisioneros de guerra hasta la conclusión de cualesquiera procedimientos penales pendientes. El Grupo de Trabajo no está en condiciones de determinar si el procedimiento con arreglo al cual el Sr. Saddam Hussein fue transferido de la Autoridad Provisional de la Coalición al Gobierno provisional del Iraq es compatible con las disposiciones aplicables del derecho internacional humanitario (artículos 12, 118 y 119 del Tercer Convenio de Ginebra, en el que son Partes los Estados Unidos y el Iraq). Sin embargo, no se pone en duda que, si bien fue transferido *de jure*, el Sr. Saddam Hussein permanece *de facto* bajo custodia de los Estados Unidos.

28. El Gobierno de los Estados Unidos, en su respuesta al Grupo de Trabajo, reconoce que el detenido se encuentra bajo la custodia de la fuerza multinacional en el Iraq, con arreglo a un acuerdo concertado con el Ministerio de Justicia del Iraq, aunque el Sr. Saddam Hussein está bajo la autoridad de un tribunal iraquí.

29. El Grupo de Trabajo concluye que hasta el 1º de julio de 2004 el Sr. Saddam Hussein estuvo detenido bajo la responsabilidad exclusiva de los miembros de la Coalición como Potencia ocupante o, más precisamente, bajo la responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos. Desde entonces, y como el Tribunal Penal Supremo del Iraq es un tribunal del Estado soberano del Iraq, la prisión preventiva de una persona acusada ante el tribunal es responsabilidad del Iraq. Teniendo en cuenta que Saddam Hussein se encuentra bajo la custodia física de las autoridades de los Estados Unidos, toda posible conclusión respecto del carácter arbitrario de su privación de libertad puede suponer la responsabilidad internacional de ese Gobierno.

30. En el período de detención posterior al 30 de junio de 2004, Saddam Hussein compareció ante el Tribunal Penal Supremo del Iraq para su primera audiencia el 1º de julio de 2004. La audiencia tuvo lugar en un lugar secreto y el acusado no contó con asistencia letrada. Se le informó de los cargos que se le imputaban. Ya que no fue asistido por un letrado, se negó a firmar los autos procesales. En consecuencia, cualquiera que fuera la condición bajo la cual estuvo detenido antes del 1º de julio de 2004, posteriormente fue acusado en un proceso penal, y como tal tenía derecho a la protección del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Puesto que tanto los Estados Unidos como el Iraq han ratificado el Pacto, los artículos 9 3) y 14 del Pacto son aplicables a su detención.

31. Aunque ni el Gobierno del Iraq ni el de los Estados Unidos han dado respuestas detalladas a las alegaciones relativas a las características del proceso y las violaciones que afectan al derecho a la defensa, invocadas por la fuente, el Grupo de Trabajo reunió y tuvo acceso a información relativa al Tribunal Penal Supremo del Iraq y su reglamento.

32. Este tribunal fue establecido por el Consejo de Gobierno del Iraq el 10 de diciembre de 2003 y en los primeros días de agosto de 2004 la Asamblea Nacional de Transición del Iraq modificó el estatuto que la regulaba. El Grupo de Trabajo desconoce los criterios utilizados por el Gobierno del Iraq para nombrar a los jueces que integran este tribunal. Sin embargo, el presunto retiro o la sustitución de varios jueces es motivo de preocupación. El clima en que se

han llevado a cabo los preparativos del juicio, que puede de hecho afectar negativamente la independencia y la imparcialidad del tribunal, o al menos dar la impresión de que el tribunal no cumple el requisito de independencia e imparcialidad, también preocupa al Grupo de Trabajo.

33. El asesinato de los abogados defensores, la actitud amenazante del público contra algunos de los acusados, motivada por daños sufridos durante el régimen anterior, podrían ejercer una presión indebida sobre el tribunal. Más específicamente, el hecho de que la pena capital haya sido recientemente restablecida y que no se permita apelar contra una condena y sentencia, lo que contraviene lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, puede poner en duda el requisito de imparcialidad del proceso.

34. En su informe anual (2005) a la Asamblea General, Leandro Despouy, Relator Especial sobre la independencia de los jueces y abogados, expresó su preocupación respecto del proceso judicial que se está llevando a cabo ante el Tribunal Especial iraquí:

"A pesar del empeño y de los esfuerzos personales desplegados por los jueces y de la cooperación prestada por varios países en el establecimiento del tribunal, le preocupa que la presión ejercida sobre los jueces y la situación de inseguridad imperante en el Iraq puedan socavar su independencia. Además, el propio tribunal tiene sus deficiencias, algunas de las cuales derivan de la manera en que fue establecido, en particular del hecho de que su jurisdicción está limitada a personas concretas y a un plazo concreto; es decir que el tribunal puede juzgar únicamente a ciudadanos iraquíes por actos cometidos antes del 1º de mayo de 2003, fecha en que empezó la ocupación. La facultad del tribunal de imponer la pena de muerte demuestra en qué medida contraviene las normas internacionales de derechos humanos. Puesto que fue establecido durante una ocupación y a que fue financiado principalmente por los Estados Unidos, su legitimidad ha sido ampliamente cuestionada y, en consecuencia, su credibilidad ha quedado dañada. El Relator Especial insta a las autoridades iraquíes a que siga el ejemplo de otros países con sistemas judiciales deficientes y a que pida a las Naciones Unidas que establezca un tribunal independiente que cumpla las normas internacionales de derechos humanos."⁸

35. El Grupo de Trabajo comparte esa preocupación. También le preocupa el procedimiento penal en el caso de Saddam Hussein, sobre todo el derecho a asistencia letrada. Al parecer, Saddam sólo puede reunirse con sus abogados defensores en presencia de oficiales de los Estados Unidos. No está claro si puede reunirse con sus abogados con la frecuencia que exige un caso tan complicado. El 19 de octubre de 2005, en la audiencia, la defensa y algunos de los acusados plantearon los tres problemas siguientes:

- Que la defensa no había tenido tiempo suficiente para estudiar el expediente definitivo y preparar el caso;
- Que los abogados defensores no habían tenido suficiente acceso a los acusados;
- Que había motivos de preocupación con respecto a la legitimidad y competencia del tribunal.

⁸ Véase A/60/321, pág. 15.

36. También se informó al Grupo de Trabajo que había discrepancias entre el antiguo Código de Procedimiento Penal del Iraq y el reglamento del Tribunal Penal Supremo del Iraq sobre algunos importantes aspectos, y no estaba claro cuál ley debía prevalecer.

37. Puesto que los vicios de procedimiento que representan una violación del derecho a un juicio con las debidas garantías pueden, en principio, corregirse en las etapas subsiguientes del proceso penal, el Grupo de Trabajo consideraría prematuro por el momento adoptar una posición a este respecto. El Grupo de Trabajo es plenamente consciente de que el procedimiento judicial en curso en el Iraq tiene por objeto someter a la justicia a Saddam Hussein y a otros altos dirigentes del antiguo régimen iraquí por los graves delitos que presuntamente cometieron contra el pueblo iraquí y algunos países limítrofes. Los delitos de los que se les acusa abarcan, pero no se limitan, al genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.

38. Como uno de los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (anteriormente Comisión de Derechos Humanos), el Grupo de Trabajo se ha comprometido firmemente a respetar el principio de que toda violación de los derechos humanos, haya sido cometida por políticos o por otros, debe ser investigada y reparada, de ser necesario sometiendo a los responsables a la justicia. No obstante, cualquier procedimiento destinado a reparar graves violaciones de los derechos humanos, como los que el Grupo de Trabajo ha acogido con beneplácito, deben respetar escrupulosamente las reglas y normas elaboradas y aceptadas por la comunidad internacional de respetar los derechos de toda persona acusada de un delito penal. La violación de los derechos del acusado puede fácilmente redundar en consecuencias negativas. Esto es cierto especialmente en este caso; cualquier falta de respeto de los derechos de los dirigentes del antiguo régimen en los procedimientos penales contra ellos puede socavar la credibilidad del sistema de justicia del nuevo régimen democrático del Iraq.

39. El Grupo de Trabajo considera que, en las presentes circunstancias, la forma apropiada de garantizar que la detención de Saddam Hussein no constituya una privación arbitraria de su libertad sería velando por que su juicio se realizara ante un tribunal independiente e imparcial y en estricta conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

40. Teniendo en cuenta lo ya señalado, la opinión del Grupo de Trabajo es que:

- a) No adoptará una posición respecto de la presunta arbitrariedad de la privación de libertad de Saddam Hussein durante el período del conflicto armado internacional;
- b) Seguirá con atención el desarrollo del proceso y pedirá más información tanto a los Gobiernos interesados como a la fuente. Mientras tanto, y en relación con el apartado c) del párrafo 17 de sus métodos de trabajo, decide mantener el caso pendiente hasta que reciba más información.

Aprobada el 30 de noviembre de 2005.

OPINIÓN N° 47/2005 (YEMEN)

Comunicación dirigida al Gobierno el 9 de agosto de 2005

Relativa al Sr. Walid Muhammad Shahir Muhammad al-Qadasi, Sr. Salah Nasser Salim 'Ali y Sr. Muhammad Faraj Ahmed Bashmilah

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su reconocimiento al Gobierno por haber facilitado oportunamente la información solicitada.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 38/2005.)
4. Habida cuenta de las alegaciones formuladas, el Grupo de Trabajo acoge favorablemente la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo transmitió a la fuente la respuesta proporcionada por el Gobierno. El Grupo de Trabajo considera que se encuentra en posición de emitir una opinión sobre los hechos y circunstancias de los casos, en el contexto de las alegaciones formuladas y de las respuestas del Gobierno a las mismas así como de las observaciones de la fuente.
5. La fuente informa de que el Sr. Walid Muhammad Shahir Muhammad al-Qadasi, ciudadano del Yemen, fue arrestado en la República Islámica del Irán a fines de 2001. Se le mantuvo detenido allí durante unos tres meses antes de ser entregado, junto con otros detenidos extranjeros, a las autoridades en el Afganistán, que a su vez lo entregaron a la custodia de los Estados Unidos de América. Estuvo encarcelado en una prisión en Kabul donde permaneció con los ojos vendados, fue interrogado, amenazado de muerte y acusado de pertenecer a Al-Qaida. Walid Muhammad Shahir Muhammad al-Qadasi y otros detenidos estuvieron recluidos en celdas subterráneas, diez de ellos en una celda que medía aproximadamente dos por tres metros y fueron constantemente expuestos a música a alto volumen. Después de pasar tres meses detenido en Kabul fue transferido a un centro de detención de las fuerzas militares de los Estados Unidos en la base aérea de Baghram, en las afueras de Kabul. Después de pasar un mes allí, Walid Muhammad Shahir Muhammad al-Qadasi fue trasladado a la base militar de los Estados Unidos en Guantánamo (Cuba).
6. Walid Muhammad Shahir Muhammad al-Qadasi fue transferido de Guantánamo al Yemen a comienzos de abril de 2004. A su llegada, fue detenido en la prisión de seguridad política en Sana'a. Se le denegó el acceso a un abogado y no compareció ante un tribunal. Durante su detención, Walid Muhammad Shahir Muhammad al-Qadasi recibió la visita de representantes de la fuente a mediados de abril de 2004. El personal de la prisión informó a la fuente que Walid Muhammad Shahir Muhammad al-Qadasi se encontraba bajo investigación y que sería puesto en libertad tan pronto concluyera la investigación. Posteriormente fue transferido a la prisión de Ta'iz donde un abogado de la ONG de los Estados Unidos Centro para los Derechos Constitucionales lo entrevistó el 21 de junio de 2005. Actualmente sigue detenido en ese centro penitenciario. No se le ha acusado de ningún delito penal ni se le ha dado la oportunidad de impugnar la legalidad de su detención. El jefe del Departamento de Seguridad Política en Sana'a

informó a la fuente que Walid Muhammad Shahir Muhammad al-Qadasi y otros detenidos que habían regresado de Guantánamo se encontraban allí a solicitud de las autoridades de los Estados Unidos y que permanecerían detenidos en el Yemen en espera de que esas autoridades transmitieran sus expedientes para realizar la investigación.

7. Con respecto al Sr. Salah Nasser Salim 'Ali, la fuente informa de que se trata de un ciudadano yemenita de 27 años que vivía en Yakarta hasta el 19 de agosto de 2003. Ese día fue detenido en Yakarta por agentes de la policía indonesia y conducido a un centro de inmigración. Después de cuatro días de detención, durante los cuales se venció su pasaporte, se comunicó a Salah Nasser Salim 'Ali que sería deportado al Yemen vía Jordania. Sin embargo, cuando llegó al aeropuerto de Ammán fue conducido a un centro de detención del servicio de inteligencia jordano donde fue interrogado acerca de una estancia pasada en el Afganistán y fue torturado repetidamente durante cuatro días.

8. En cuanto al Sr. Muhammad Faraj Ahmed Bashmilah, de 37 años de edad, la fuente informa de que es un ciudadano yemenita que también vivía en Indonesia. En octubre de 2003, viajó a Jordania con su esposa. Al llegar al aeropuerto de Ammán, las autoridades de inmigración jordanas incautaron su pasaporte. Tres días más tarde, el 19 de octubre de 2003, fue arrestado por el Da'irat al-Mukhabarat al-'Amah de Jordania (Departamento General de Inteligencia) donde permaneció bajo custodia durante cuatro días. Durante ese período, habría sido repetidamente sometido a tortura.

9. La fuente señala además que después de su detención en Jordania, Salah Nasser Salim 'Ali y Muhammad Farah Ahmed Bashmilah fueron trasladados a un centro de detención bajo el control de los Estados Unidos. Fueron trasladados a ese centro de detención con los ojos vendados en un vuelo que duró varias horas y detenidos en instalaciones subterráneas, por lo que no pueden determinar la ubicación del centro de detención. Sin embargo, tanto las fuerzas encargadas de trasladarlos al centro de detención como las personas encargadas del propio centro de detención eran de los Estados Unidos. Posteriormente, se les trasladó, también con los ojos vendados, por avión y helicóptero, a otro centro de detención bajo el control de los Estados Unidos. Por lo tanto, tampoco pueden determinar la ubicación de esas instalaciones. En ambos lugares, los dos hombres fueron interrogados acerca de sus actividades en el Afganistán y en Indonesia y acerca de su relación con otras personas sospechosas de actividades terroristas.

10. De conformidad con la fuente, Salah Nasser Salim 'Ali y Muhammad Farah Ahmed Bashmilah permanecieron en custodia de los Estados Unidos durante 20 y 18 meses, respectivamente. Durante este período, permanecieron en celdas solitarias y en régimen de incomunicación, sin contacto con otras personas, aparte de guardias penitenciarios, interrogadores e intérpretes. Estaban expuestos a música occidental ininterrumpidamente las 24 horas del día. En la segunda instalación recibieron libros, incluido el Corán, y vídeos, y tuvieron la oportunidad de hacer ejercicio. Salah Nasser Salim 'Ali recibió la visita de un médico dos veces por mes.

11. El 5 de mayo de 2005, o cerca de esta fecha, sin que mediara explicación, Muhammad Farah Ahmed Bashmilah y Salah Nasser Salim 'Ali fueron trasladados al Yemen donde fueron recluidos en la prisión central de Adén. Posteriormente, se les trasladó por poco

tiempo a Sana'a y luego nuevamente a Adén. Actualmente se encuentran detenidos en la instalación de seguridad política de Fateh en Adén, donde han recibido visitas de sus familiares.

12. La fuente afirma que ni Muhammad Farah Ahmed Bashmilah ni Salah Nasser Salim 'Ali han sido inculcados o juzgados por ningún delito ni se les ha informado de los motivos de la continuación de su detención. Representantes de las autoridades yemenitas han informado a la fuente de que su detención se debe a que su traslado de la detención de los Estados Unidos al Yemen tenía como condición que se les mantuviera detenidos en el Yemen.

13. De conformidad con la fuente, la detención de Walid Muhammad Shahir Muhammad al-Qadasi, Muhammad Farah Ahmed Bashmilah y Salah Nasser Salim 'Ali carece de fundamento legal y, en consecuencia, es arbitraria. En particular, estas tres personas fueron puestas en libertad tras haber permanecido bajo custodia de los Estados Unidos sin que se formularan cargos en su contra y nunca se les acusó de ningún delito penal en el Yemen donde estuvieron detenidas por 18 meses (Walid Muhammad Shahir Muhammad al-Qadasi) y por tres meses (Muhammad Farah Ahmed Bashmilah y Salah Nasser Salim 'Ali), respectivamente. Las autoridades yemenitas no han emitido ninguna decisión en relación con su detención o declaración sobre los fundamentos de ésta. No se les ha informado de ningún cargo contra ellos ni se les ha proporcionado asistencia letrada, no han ejercido el derecho de impugnar la legalidad de su detención ni se ha celebrado ninguna audiencia en relación con su caso.

14. La fuente añade que la detención de Walid Muhammad Shahir Muhammad al-Qadasi, Muhammad Farah Ahmed Bashmilah y Salah Nasser Salim 'Ali contraviene asimismo la legislación interna yemenita ya que, según la fuente, los sospechosos tienen derecho a ver a un juez o fiscal dentro del plazo de 24 horas después de la detención, el derecho a impugnar la legalidad de su detención y el derecho a recibir asistencia letrada inmediata. Además, la legislación yemenita prevé que la detención no se permite salvo por actos punibles con arreglo a la ley.

15. En su respuesta a estas alegaciones, el Gobierno confirma que Walid Muhammad Shahir Muhammad al-Qadasi, Muhammad Farah Ahmed Bashmilah y Salah Nasser Salim 'Ali fueron entregados al Yemen por los Estados Unidos. Permanecen detenidos en una instalación de la policía de seguridad por su presunta participación en actividades terroristas relacionadas con Al-Qaida. El Gobierno del Yemen añade que las autoridades competentes todavía están investigando el caso en espera de que las autoridades de los Estados Unidos envíen los expedientes a fin de transmitirlos al fiscal.

16. En respuesta a las observaciones del Gobierno, la fuente informa de que, hasta el 8 de noviembre de 2005, los tres hombres seguían detenidos, mientras que el Gobierno continúa alegando que está esperando que las autoridades de los Estados Unidos le hagan llegar los expedientes relativos a sus casos.

17. El Grupo de Trabajo, basándose en la información proporcionada por la fuente y el Gobierno, que coinciden, está en condiciones de emitir una opinión.

18. El Gobierno declara que Al-Qadasi, Bashmilah y Salim fueron entregados al Yemen por los Estados Unidos. Está esperando recibir los expedientes de las autoridades de los Estados Unidos a fin de transmitirlos al fiscal. Esto demuestra claramente que las autoridades yemenitas no tienen actualmente ningún expediente sobre ellos.

19. El Grupo de Trabajo observa con preocupación que los traslados de que fueron objeto estas tres personas antes de su detención en el Yemen ocurrieron al margen de todo procedimiento legal, como la extradición, y que no permitió el acceso de estas personas a asistencia letrada o a un órgano judicial para impugnar los traslados.

20. El Gobierno del Yemen no ha formulado ningún cargo contra estos tres hombres. Éstos no han sido informados de ninguna acusación contra ellos ni se les ha sometido a ninguna autoridad judicial. No se ha aplicado ningún procedimiento jurídico para acusarlos. Su privación de libertad, como tal, carece de todo fundamento jurídico.

21. Habida cuenta de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de los Sres. Walid Muhammad Shahir Muhammad al-Qadasi, Muhammad Farah Ahmed Bashmilah y Salah Nasser Salim 'Ali es arbitraria porque contraviene el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a la categoría I de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

22. Por consiguiente, y después de emitir esa opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno:

Que ponga en libertad a las tres personas antes mencionadas o que de otro modo las someta a una autoridad judicial competente a fin de que en estos casos se respeten las normas y principios establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 30 de noviembre de 2005.

OPINIÓN N° 48/2005 (NAMIBIA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 15 de octubre de 2004

Relativa al John Samboma; Charles Samboma (presunto Comandante del Ejército de Liberación de Caprivi); Richard Libano Misuha; Oscar Muyuka Puteho; Richard John Samati; Moises Limbo Mushwena; Thaddeus Siyoka Ndala; Martin Siano Tubaundule; Oscar Nyambe Puteho; Charles Mafenyeho Mushakwa; Fred Maemelo Ziezo; Andreas Mulupa y Osbert Mwenyi Likanyi

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su reconocimiento al Gobierno de Namibia por haberle facilitado la información necesaria.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 38/2005.)
4. Habida cuenta de las alegaciones formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta del Gobierno a la fuente y recibió sus observaciones.
5. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y circunstancias del caso, en el contexto de las alegaciones formuladas y de la respuesta del Gobierno a éstas, así como las observaciones de la fuente.
6. La fuente informó al Grupo de Trabajo de que las 13 personas antes mencionadas, todas detenidas en la prisión de Grootfontein, situada a 500 km al norte de Windhoek, eran parte de un grupo de 120 personas arrestadas por su presunta participación en la violencia secesionista dirigida por el Ejército de Liberación de Caprivi, que atacó Katima Mulilo, en la región nororiental de Caprivi, el 2 de agosto de 1999. Fueron entregadas a Namibia por las autoridades de Botswana y Zambia entre agosto de 1999 y diciembre de 2002. Las mantuvieron detenidas en secreto durante seis meses en la base militar de Grootfontein antes de que comparecieran ante un tribunal. Posteriormente, fueron acusados de alta traición, asesinato y otros delitos en relación con el levantamiento.
7. Fueron puestos en libertad el 23 de febrero de 2004 por una orden del juez Elton Hoff del Tribunal Superior de Grootfontein. El juez dictaminó que su tribunal no tenía jurisdicción para procesar a esas personas porque las circunstancias en que habían sido detenidas eran irregulares debido a que las 13 personas fueron detenidas en los territorios de Botswana y Zambia y sometidos de manera irregular al tribunal.
8. De conformidad con el juez Hoff, las autoridades de Namibia no habían sido meramente testigos pasivos cuando las autoridades de Botswana y Zambia entregaron a las 13 personas a Namibia. El juez Hoff concluyó que esas personas habían sido entregadas a Namibia mediante un proceso de extradición encubierto como la deportación de inmigrantes supuestamente ilegales de otros países. En este proceso irregular, las leyes de extradición de Botswana y Zambia no habían sido respetadas. De conformidad con la fuente, un tribunal de Namibia no puede asumir

la jurisdicción sobre personas que afirman haber sido trasladadas ilegalmente del extranjero para ser inculpadas y sometidas a juicio. No se respetó el debido procedimiento de extradición cuando esas personas fueron repatriadas a Namibia de países con los que Namibia tiene acuerdos de extradición vigentes. En consecuencia, se había violado la legislación internacional.

9. Sin embargo, apenas unos pocos minutos después de su liberación, estas personas fueron arrestadas nuevamente y acusadas de cometer delitos comunes, como el asalto, la posesión ilegal de colmillos de elefante y el robo de llaves de automóvil. Debido a la falta de pruebas, fueron liberadas al día siguiente pero fueron detenidas nuevamente el 25 de febrero de 2004 y acusadas de los mismos delitos por los que anteriormente se había considerado imposible su procesamiento debido a su detención irregular y a la violación de las normas de extradición en virtud del derecho internacional.

10. La fuente alega que las autoridades interpretaron a su antojo la Constitución y las leyes de Namibia para sus propios fines. Los cinco años de prisión preventiva contravienen las normas internacionales por las siguientes razones:

- No se siguieron los debidos procedimientos de extradición;
- Las personas detenidas fueron acusadas nuevamente de los mismos delitos por los cuales el tribunal había ya dictaminado que no podían ser procesados;
- Su detención en el extranjero y su extradición a Namibia fueron irregulares;
- Las pruebas presentadas eran contradictorias.

11. En su respuesta, el Gobierno señaló que el respeto del Gobierno de Namibia por el constitucionalismo, el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos es bien conocido en todo el mundo. En consecuencia, no es correcto afirmar que las autoridades interpretaron a su antojo la Constitución y las leyes de Namibia para sus propios fines. Los hechos determinados por el Tribunal Superior de Grootfontein (Tribunal Supremo en el país del caso) echaron por tierra las alegaciones de los autores de la comunicación. Dado que este tribunal superior es de primera instancia, es posible que el caso sea considerado por el Tribunal Supremo. De conformidad con el fallo del Tribunal Supremo, el progreso de los procedimientos sobre el fondo se vio entorpecido por una serie de solicitudes interlocutorias.

12. El Gobierno añade que el juicio se reanudó en febrero de 2003 en Grootfontein. En mayo de 2004, el proceso judicial se suspendió debido a un accidente de automóvil fatal. Un miembro del equipo de fiscales murió y otros dos quedaron gravemente heridos cuando viajaban de Windhoek a Grootfontein. El 17 de mayo de 2005, el fiscal pidió al tribunal que se trasladara a Windhoek y que permitiera que un nuevo equipo de fiscales se preparara para el juicio. El tribunal debe emitir un fallo sobre la solicitud de aplazamiento presentada por el fiscal.

13. El Gobierno también informó que el 17 de mayo de 2005 los acusados formularon una objeción en el sentido de que, puesto que no eran namibios sino caprivios, un tribunal namibio no tenía jurisdicción para procesarlos por traición. En consecuencia, perdieron su representación legal. De conformidad con el Gobierno, el tribunal debe también emitir un fallo a este respecto.

14. La fuente formula observaciones sobre la respuesta del Gobierno y alega lo siguiente.
15. Algunos de los sospechosos de alta traición han sido física y psicológicamente torturados por oficiales de policía y han quedado mutilados y con cicatrices permanentes. Esas personas han presentado demandas civiles contra los responsables pero los procesos están aún pendientes.
16. Los hijos de los detenidos han sido expulsados de sus escuelas y no pueden recibir educación porque no tienen asistencia financiera de sus padres. Esta situación ha continuado por más de seis años. Además, la fuente afirma también que todos los efectos personales que dejaron en manos de los oficiales de policía cuando fueron arrestados se han perdido y que no han recibido compensación por esas pérdidas. También se afirma que los familiares de los detenidos, cuando los visitan en prisión o durante los procedimientos judiciales, son sometidos a registros arbitrarios y a tratos inhumanos.
17. La fuente afirma además que el Gobierno inició una serie de aplazamientos por parte del equipo de fiscales, incluidas tácticas para demorar el proceso, que han dado lugar a un empeoramiento de su actual situación. Su detención también ha empeorado debido a la inadecuada alimentación que reciben, que ha tenido como consecuencia que algunas personas han sufrido enfermedades.
18. Finalmente, la fuente menciona que los oficiales de policía han obligado a sus amigos y familiares del campamento de refugiados de Dukne en Botswana a prestar testimonio contra ellos mientras esas personas están siendo repatriadas de forma voluntaria.
19. Los peticionarios, presuntos miembros del Ejército de Liberación de Caprivi, fueron acusados de alta traición, asesinato y otros delitos en relación con el ataque contra Katima Mulilo en agosto de 1999. Ellos se consideran caprivios y no namibios, como afirmaron ante el tribunal para impugnar su jurisdicción.
20. Pese a que el tribunal de primera instancia sostuvo que ellos habían sido trasladados a Namibia de forma irregular, su fallo fue impugnado por el fiscal namibio en un recurso ante el Tribunal Supremo, que falló en contra, porque el progreso de los procedimientos sobre el fondo fue entorpecido por una serie de solicitudes interlocutorias de los acusados.
21. El Grupo de Trabajo no tiene el mandato para sustituir a los tribunales nacionales o decidir si los peticionarios son culpables o inocentes. Sólo puede verificar si las garantías relativas a un juicio imparcial con arreglo a las normas internacionales que se aplican al Estado interesado se han respetado en el caso que se examina.
22. En lo que respecta al derecho a ser procesados sin demoras indebidas, el Grupo de Trabajo recuerda que cuando se deniega la libertad bajo fianza debido a que los inculpados han sido acusados de cometer graves delitos, como en el caso que se examina, éstos deben ser procesados dentro de un plazo razonable. La excesiva duración de la detención preventiva dio lugar a la violación de los artículos 9 3) y 14 3) c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el que Namibia es Parte. La carga de la prueba para justificar que un caso es particularmente complejo recae sobre el Gobierno.

23. El Grupo de Trabajo observa que el Gobierno no refuta la alegación de la fuente, que los acusados han estado detenidos por unos seis años sin que se les haya juzgado sobre el fondo de los cargos contra ellos. El Gobierno reconoce que el juicio fue reanudado en febrero de 2003 y que desde entonces se ha aplazado porque en mayo de 2004 un abogado de la acusación murió y otros dos quedaron gravemente heridos en un accidente de automóvil.

24. El Grupo de Trabajo considera que ese argumento es muy poco sólido para justificar la demora de más de un año y medio para reanudar el juicio de los acusados, que han permanecido detenidos por más de seis años en espera de juicio, especialmente cuando la fuente alega que el Gobierno inició una serie de aplazamientos por parte de la acusación, inclusive mediante tácticas de demora. El Grupo de Trabajo opina que el derecho a ser juzgado sin demoras indebidas obliga a los Estados a organizar sus mecanismos judiciales de manera que se asegure un juicio efectivo y rápido.

25. Teniendo en cuenta lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de John Samboma, Charles Samboma (presunto Comandante del Ejército de Liberación de Caprivi), Richard Libano Misuha, Oscar Muyuka Puteho, Richard John Samati, Moises Limbo Mushwena, Thaddeus Siyoka Ndala, Martin Siano Tubaundule, Oscar Nyambe Puteho, Charles Mafenyeho Mushakwa, Fred Maemelo Ziezo, Andreas Mulupa y Osbert Mwenyi Likanyi es arbitraria ya que contraviene el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a la categoría III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

26. Por consiguiente, de conformidad con la opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de las personas antes mencionadas.

Aprobada el 30 de noviembre de 2005.

OPINIÓN N° 1/2006 (UZBEKISTÁN)

Comunicación dirigida al Gobierno el 18 de octubre de 2005

Relativa a la Sra. Elena Urlaeva

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo toma nota con reconocimiento de la información transmitida por el Gobierno de Uzbekistán en relación con el caso en cuestión dentro del plazo de 90 días contados a partir del envío de la carta por el Grupo de Trabajo.
3. El Grupo de Trabajo observa además que el Gobierno ha informado al Grupo de que la persona mencionada ya no está detenida. La respuesta del Gobierno fue transmitida a la fuente, que no presentó ninguna observación.
4. Habiendo examinado la información disponible y sin prejuzgar el carácter de la detención, el Grupo de Trabajo decide archivar el caso de la Sra. Elena Urlaeva con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 17 a) de sus métodos de trabajo.

Aprobada el 9 de mayo de 2006.

OPINIÓN N° 2/2006 (EGIPTO)

Comunicación dirigida al Gobierno el 30 de enero de 2006

Relativa al Sr. Metwalli Ibrahim Metwalli

El Estado es Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo toma nota con reconocimiento de la información transmitida por el Gobierno de Egipto en relación con el caso en cuestión dentro del plazo de 90 días contados a partir del envío de la carta por el Grupo de Trabajo.
3. El Grupo de Trabajo observa que el Gobierno le ha informado de que la persona antes mencionada ya no está detenida. Este hecho también ha sido confirmado por la fuente que presentó la comunicación.
4. Habiendo examinado la información disponible y sin prejuzgar el carácter de la detención, el Grupo de Trabajo decide archivar el caso del Sr. Metwalli Ibrahim Metwalli con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 17 a) de sus métodos de trabajo.

Aprobada el 9 de mayo de 2006.

**OPINIÓN N° 3/2006 (REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA
E IRLANDA DEL NORTE)**

Comunicación dirigida al Gobierno el 10 de mayo de 2005

Relativa al Sr. Tosin Fred Adegboji

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su reconocimiento al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por haberle hecho llegar la información necesaria.
3. El Gobierno, en su respuesta, que no ha sido refutada por la fuente, confirma que el Sr. Tosin Fred Adegboji, un inmigrante, ya no se encuentra detenido y que en junio de 2005 se le concedió una autorización indefinida para entrar en el Reino Unido.
4. Habiendo examinado la información disponible y sin prejuzgar el carácter de la detención, el Grupo de Trabajo decide archivar el caso con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 17 a) de sus métodos de trabajo.

Aprobada el 9 de mayo de 2006.

OPINIÓN N° 4/2006 (MYANMAR)

Comunicación dirigida al Gobierno el 23 de enero de 2006

Relativa a la Sra. Su Su Nway

El Estado no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 38/2005.)
3. El Grupo de Trabajo acoge con agrado la cooperación del Gobierno que ha facilitado la información necesaria. El Grupo de Trabajo considera que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y circunstancias del caso.
4. Las alegaciones de la fuente pueden resumirse como sigue: la Sra. Su Su Nway es una ciudadana de Myanmar de 34 años de edad, residente de la aldea de Htan Manaing, localidad de Kawmoo, División de Yangon. Ella es miembro de las juventudes de la Liga Nacional para la Democracia, organización de oposición. Se informó de que en enero de 2005, ella demandó a las autoridades locales por sus prácticas de trabajo forzoso. Éste fue un caso histórico en Myanmar ya que fue la primera vez que un caso como éste se llevó ante la justicia y fue ganado por el demandante.

a) Las autoridades locales de la aldea de Htan Maniang empezaron de inmediato a hostigar intensamente a Su Su Nway, incluso lanzándole pullas en público, en un intento de hacerla abandonar la aldea. A finales de enero de 2005, le imputaron cargos penales acusándola de lesionar la reputación de las autoridades y proferir insultos contra ellas, con arreglo a los artículos 506 y 294 b) del Código Penal de Myanmar. Ella se declaró inocente.

Su Su Nway fue arrestada el 13 de octubre de 2005, el día en que empezó su juicio. Los habitantes de la aldea que trataban de prestar testimonio a favor de ella fueron objeto de intimidación por parte de las autoridades locales que declararon que aquellos que tuvieran la intención de prestar testimonio tenían que hacer una visita a la estación de policía antes de comparecer. Un hombre fue detenido por 24 horas por tratar de apoyar a Su Su Nway. La fuente afirma que Su Su Nway no fue informada oportunamente de los cargos que se le imputaban y que, por lo tanto, no pudo preparar eficazmente su defensa. Se declaró inocente de los cargos pero los secretarios judiciales presentaron una declaración de culpabilidad en su nombre. Durante el juicio el juez de la localidad, juez Mya Mya, fue sustituido por el juez Htay Htay Win de la localidad Henzada. No se han dado razones para explicar el cambio. La acusada también fue objeto de hostigamiento y pullas por parte de las autoridades durante el juicio. Su Su Nway, que sufre de una afección cardíaca crónica, se resbaló y se cayó durante el juicio y se lesionó, pero la enfermera local que le prestó asistencia fue intimidada por las autoridades y no pudo continuar tratando a Su Su Nway.

b) Al final, Su Su Nway fue declarada culpable de lesionar la reputación de las autoridades de la aldea y de proferir insultos contra ellas, con arreglo a los mismos artículos del Código Penal. Fue condenada a 18 meses de prisión. En el momento en que se presentó la

comunicación (25 de octubre de 2005) una apelación contra ese fallo seguía pendiente ante el Tribunal Supremo.

c) Su Su Nway se encuentra actualmente detenida en la prisión de Insein, División de Yangon. Se le han denegado los medicamentos desde que empezó su detención. Según se informa, fue hospitalizada del 4 al 7 de enero de 2006. También se afirma que sufre de anemia.

5. En su respuesta, el Gobierno confirmó la alegación actual de la fuente. Informó al Grupo de Trabajo de que el recurso presentado por la Sra. Su Su Nway había sido desestimado por el Tribunal Supremo.

6. El Grupo de Trabajo estima convincente la alegación de la fuente de que el proceso penal iniciado contra la Sra. Su Su Nway fue motivado por el hecho de que ella presentó una demanda contra las autoridades locales por su práctica de trabajo forzoso, lo que queda claro por las fechas: la demanda judicial contra las autoridades fue presentada en enero de 2005, el proceso penal contra la Sra. Su Su Nway fue iniciado tres meses después de que ella ganó el caso. Además, los delitos penales de los que se le acusa, a saber, lesionar la reputación de las autoridades e insultos contra ellas, constituye, ya que no hay ningún argumento convincente a contrario, un indicio de la intención del Gobierno de limitar indebidamente la libertad de opinión y de expresión de aquellos que se tratan a tomar medidas en contra de las autoridades del Estado. Por lo tanto, su detención es incompatible con la libertad de opinión y de expresión. Asimismo, los graves vicios de procedimiento a que hace referencia la fuente, que no han sido refutados por el Gobierno, confieren un carácter injusto al proceso contra ella. Estos vicios de procedimiento se resumen como sigue: intimidación de los testigos en favor de la acusada, el hecho de que se hizo constar su declaración de culpabilidad cuando en realidad ella se declaró inocente, la sustitución del juez durante el juicio, y el hecho de que no se le informó oportunamente sobre los cargos que se le imputaban.

7. Teniendo en cuenta lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La detención de la Sra. Su Su Nway es arbitraria y contraviene los artículos 9, 10 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y corresponde a las categorías II y III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

8. Por consiguiente, de conformidad con esta opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de la Sra. Su Su Nway, conforme a las normas y principios establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que considere la posibilidad de firmar y ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 9 de mayo de 2006.

OPINIÓN N° 5/2006 (IRAQ Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 25 de octubre de 2005

Relativa al Sr. Majeed Hameed

Ambos Estados han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo toma nota de que el Gobierno de los Estados Unidos de América y la fuente le han informado de que la persona citada ya no permanece detenida.
3. Habiendo examinado la información disponible y sin pronunciarse sobre el carácter de la detención, el Grupo de Trabajo decide archivar el caso del Sr. Majeed Hameed a tenor de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 17 de sus métodos de trabajo.

Aprobada el 11 de mayo de 2006.

OPINIÓN N° 6/2006 (JAPÓN)

Comunicación dirigida al Gobierno el 27 de julio de 2005

Relativa al Sr. Kyaw Htin Aung

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo toma nota con agradecimiento de la información proporcionada por el Gobierno del Japón con respecto al caso en cuestión.
3. El Grupo de Trabajo toma nota asimismo de que el Gobierno interesado le ha informado de que la persona citada ya no permanece detenida.
4. La respuesta del Gobierno fue transmitida a la fuente, que no comunicó observación alguna.
5. Habiendo examinado la información de que dispone y sin pronunciarse sobre el carácter de la detención, el Grupo de Trabajo decide archivar el caso del Sr. Kyaw Htin Aung de conformidad con el apartado a) del párrafo 17 de sus métodos de trabajo.

Aprobada el 11 de mayo de 2006.

OPINIÓN N° 7/2006 (YEMEN)

Comunicación dirigida al Gobierno el 17 de noviembre de 2005

Relativa al Sr. Muhammad Abdullah Salah al-Assad

El Estado ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo toma nota con agradecimiento de la información facilitada por el Gobierno del Yemen con respecto al caso en cuestión en el plazo de 90 días desde la transmisión de la carta del Grupo de Trabajo.
3. El Grupo de Trabajo toma nota asimismo de que la fuente le ha informado de que la persona citada ya no está detenida.
4. Tras haber examinado la información disponible y sin pronunciarse sobre el carácter de la detención, el Grupo de Trabajo decide archivar el caso del Sr. Muhammad Abdullah Salah al-Assad a tenor de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 17 de sus métodos de trabajo.

Aprobada el 11 de mayo de 2006.

OPINIÓN N° 8/2006 (JAMAHIRIYA ÁRABE LIBIA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 19 de septiembre de 2005

Relativa al Sr. Abdel Razak al-Mansuri

El Estado ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo toma nota con agradecimiento de la información presentada por el Gobierno de la Jamahiriya Árabe Libia en relación con el caso considerado.
3. El Grupo de Trabajo toma nota asimismo de que según la información del Gobierno la persona citada ya no está detenida.
4. Esta información se puso en conocimiento de la fuente, que confirmó la liberación del Sr. Al-Mansuri. No obstante, expresó el deseo de que, a pesar de la puesta en libertad del Sr. Al-Mansuri el Grupo de Trabajo siguiera examinando la comunicación, teniendo presente el daño causado por la privación de libertad.
5. Con arreglo a su mandato, el objetivo principal del Grupo de Trabajo es obtener la liberación de las personas detenidas, especialmente cuando se logra gracias a la cooperación del Grupo de Trabajo con el Gobierno.
6. Según este criterio, tras haber examinado toda la información que le ha sido sometida, y sin pronunciarse sobre el carácter arbitrario o no de la detención, el Grupo de Trabajo, remitiéndose al apartado a) del párrafo 17 de sus métodos de trabajo, decide archivar el caso.

Aprobada el 11 de mayo de 2006.

OPINIÓN N° 9/2006 (ARABIA SAUDITA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 25 de enero de 2006

Relativa al Sr. Mustapha Muhammed Mubarak Saad al-Jubairi y al Sr. Faysal Muhammed Mubarak al-Jubairi

El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya respondido a pesar de que había solicitado una prórroga del plazo de 90 días y el Grupo se la había concedido.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 38/2005.)
4. Habida cuenta de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo habría agradecido la cooperación del Gobierno, pero éste no facilitó información. No obstante, el Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión acerca de los hechos y circunstancias de los casos, especialmente dado que el Gobierno no ha contestado los hechos y las denuncias que figuran en la comunicación.
5. Este caso trata de las siguientes personas: el Sr. Mustapha Muhammed Mubarak Saad al-Jubairi, nacido en 1973, con documento de identidad N° 1032144386 expedido el 12 de octubre de 1989, residente en Riad, en Al Nassim Al Gharbi, y su hermano, el Sr. Faysal Muhammed Mubarak al-Jubairi, nacido en 1970, con documento de identidad N° 1035579380 expedido el 16 de agosto de 1987, también residente en Riad.
6. Se comunicó que estos dos hombres, funcionarios ambos del Servicio de Pasaportes de la Arabia Saudita, fueron detenidos el 15 de junio de 2004 por agentes del Ministerio del Interior en la sede central del Ministerio en Riad sin que les presentaran la correspondiente orden de detención. Les habían ordenado ir a Riad desde la provincia de Al Asir para ver al Príncipe Mohammed B. Naif. En vez de esto, fueron detenidos. Posteriormente se practicó un registro en sus domicilios sin presentar orden de registro.
7. A continuación los hermanos al-Jubairi fueron conducidos a Jeddah, donde permanecieron en celdas de aislamiento incomunicados durante ocho meses y fueron objeto de malos tratos. Sus familiares no fueron informados de su detención ni autorizados a visitarlos.
8. Posteriormente ambos fueron trasladados a Riad donde permanecen detenidos en la cárcel de Al Alichah.
9. El 18 de noviembre de 2004 el Sr. Mustapha Muhammed Mubarak Saad al-Jubairi fue sometido a torturas y malos tratos y amenazado con que se iba a detener a su hermana y a otros miembros de su familia. Desde ese día su salud ha sufrido un grave deterioro.
10. No se han presentado cargos contra ninguno de los dos. No han sido autorizados a nombrar un abogado a pesar de haberlo solicitado reiteradamente. No han sido conducidos ante un juez y no han podido impugnar la legalidad de su detención.

11. Tras examinar la información recibida y ante la falta de respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo considera que los hermanos al-Jubairi fueron detenidos sin la correspondiente orden el 15 de junio de 2004. Desde entonces siguen presos sin que se hayan presentado cargos contra ellos, sin haber comparecido ante una autoridad judicial y privados de la asistencia de un abogado.

12. A la luz de lo expuesto, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Mustapha Muhammed Mubarak Saad al-Jubairi y Faysal Muhammed Mubarak al-Jubairi es arbitraria, ya que contraviene a los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y corresponde a la categoría I de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

13. Habiendo emitido esta opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación, conforme a las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Aprobada el 11 de mayo de 2006.

OPINIÓN N° 10/2006 (ARGELIA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 29 de septiembre de 2005

Relativa a Salaheddine Bennia, Mohamed Harizi, Amar Medriss y Mohamed Ayoun

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haberle facilitado oportunamente la información necesaria.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 38/2005.)
4. Habida cuenta de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta del Gobierno a la fuente, lo cual facilitó al Grupo de Trabajo sus observaciones. El Grupo de Trabajo considera que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y circunstancias del caso, teniendo en cuenta las denuncias formuladas, la respuesta dada por el Gobierno y las observaciones de la fuente.
4. Según la información recibida, el Sr. Salaheddine Bennia, argelino nacido el 24 de febrero de 1974 y domiciliado en 20 avenue Atallah El Naoui Hussein Dey, fue detenido el 31 de diciembre de 2002 en su domicilio por miembros del Departamento de Información y Seguridad (DRS). Ordenó su detención el juez de instrucción de la quinta sala del Tribunal de Argel.
 - a) Según la fuente, el Sr. Bennia permaneció más de dos años detenido en secreto, privado de contacto con su familia o con un abogado. Estuvo recluido sin fundamento legal en un centro de detención ilegal, a saber, en un cuartel militar, el cuartel Antar de Hidra.
 - b) La fuente añade que para justificar la detención en secreto se dictó *a posteriori* una simple medida administrativa que consiste en una orden de confinamiento firmada por el Ministro del Interior de fecha 28 de junio de 2003, es decir, cerca de seis meses después de la detención. En la orden no se especifica el lugar de confinamiento.
 - c) El juez de instrucción no dispuso la apertura de la instrucción (Instrucción N° 07/2005; Fiscalía N° 124/05) en virtud del artículo 87 *bis* 3 y *bis* 4 del Código Penal (terrorismo) hasta el 29 de enero de 2005. El Sr. Bennia fue trasladado a la prisión de Serkadji. Se quejó de que en el período de detención en secreto lo habían torturado y le habían dicho esperar la hipotética llegada de los servicios de información estadounidenses para interrogarlo.
 - d) El Sr. Mohamed Harizi, argelino nacido el 1° de febrero de 1974, domiciliado en el N° 47, rue Amari Mehdiya Tiaret y director de una compañía de seguros privada, fue detenido el 15 de diciembre de 2002 a las 23.30 horas en su domicilio por miembros del DRS. Al día siguiente su familia presentó una denuncia por secuestro.

e) El Sr. Harizi permaneció 2 años y 45 días detenido en secreto, privado de contacto con su familia o con un abogado. Estuvo recluido sin fundamento legal alguno en lugares de detención ilegales (cuarteles militares), primero en el sector militar de Tiaret y después en el cuartel Antar de Hidra. El Sr. Harizi todavía no ha sido juzgado y durante el tiempo transcurrido desde que fue arrestado no ha podido examinarse la legalidad de la detención.

f) La fuente añade que para justificar la detención en secreto se dictó *a posteriori* una simple medida administrativa: al igual que en el caso del Sr. Bennia, se trata de una orden de confinamiento firmada por el Ministro del Interior de fecha 5 de enero de 2003, en la que tampoco se indica el lugar de confinamiento. El 29 de enero de 2005 se ordenó la apertura de la instrucción por delito de terrorismo (artículo 87 *bis* 3 y 87 *bis* 4 del Código Penal).

g) El Sr. Harizi se quejó de que mientras estuvo detenido en secreto lo habían torturado durante cinco días y le habían dicho esperar la hipotética llegada de agentes de los servicios de información estadounidenses para interrogarlo.

h) El Sr. Amar Medriss, argelino nacido el 23 de diciembre de 1974, comerciante, domiciliado en 5 rue Idir Toumi, Ben Aknoun, Argel, fue detenido el 1º de septiembre de 1999 en su domicilio por agentes de la policía judicial de Debih Cherif.

i) La fuente informó de que en 2000, mientras se estaba llevando a cabo la instrucción en Argel por pertenencia a un grupo armado, se había abierto sumario en el tribunal de Bir Mourad Raïs en relación con la misma causa. La policía judicial indicó entonces que la causa ya se estaba instruyendo en el Tribunal Penal de Argel. El juez de instrucción habría debido así inhibirse y remitir la causa al juez de Argel. En cambio, el tribunal de Bir Mourad Raïs dejó de lado el sumario durante varios meses. Mientras tanto, el 27 de marzo de 2002, el Sr. Medriss fue condenado a tres años de prisión por el Tribunal de Argel, y habría debido salir en libertad en octubre de 2002. Entonces, el juez de Bir Mourad Raïs volvió a abrir la causa y lo juzgó de nuevo por los mismos hechos y basándose en las mismas actuaciones. El 4 de abril de 2005 el Sr. Medriss fue condenado por segunda vez por los mismos hechos a 15 años de prisión.

j) La fuente añade que el tribunal de Bir Mourad Raïs dictó sobreseimiento a favor de las demás personas implicadas en la misma causa, que habían sido condenadas en Argel.

k) El Sr. Mohamed Ayoune, argelino nacido el 19 de diciembre de 1979, comerciante, domiciliado en Bach Djerrah, fue detenido el 1º de noviembre de 2002. Estaba acusado de haber transportado en su coche a la Sra. Hamma Leila, presuntamente esposa de un miembro de una organización terrorista. El 10 de agosto de 2004, por auto de la sala de acusación se resolvió trasladar la causa referente a un delito menos grave (omisión de denuncia de un delincuente) a un tribunal correccional. Sin embargo, el fiscal interpuso recurso contra dicho auto. Desde entonces la causa está pendiente ante el Tribunal Supremo.

l) Según la fuente, el Sr. Ayoune está detenido sin juicio desde hace 34 meses. Con arreglo al Código de Procedimiento Penal, la prisión preventiva no puede durar más de 24 meses. Su solicitud de libertad provisional ha sido rechazada. La Sra. Hamma Leila ha quedado en libertad provisional.

m) Durante su detención en el cuartel de Ben Aknoun, al parecer el Sr. Ayoune sufrió torturas que le causaron una fractura del brazo izquierdo y tuvo que ser operado.

n) La fuente considera que la detención de los Sres. Bennia, Harizi, Medriss y Ayoune es arbitraria porque no se respetaron sus derechos fundamentales a un proceso justo y equitativo reconocidos, en particular, en los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5. En su respuesta el Gobierno indicaba que:

a) Los Sres. Bennia Salaheddine y Harizi Mohamed fueron acusados de pertenencia a una organización terrorista activa en el extranjero por la Fiscalía de la República que encomendó el caso al juez de instrucción de la quinta sala del Tribunal de Argel. El 29 de enero de 2005 se ordenó su ingreso en prisión.

b) El Sr. Medriss Omar, contrariamente a lo expuesto en la comunicación, no fue juzgado en dos procesos distintos por los mismos hechos.

c) En realidad, en la primera causa, el Sr. Medriss Omar fue acusado por la Fiscalía de Sidi M'hamed, de Argel, de pertenencia a una organización terrorista, robos con agravantes y tenencia de armas prohibidas.

d) Tras ser trasladada esta causa al Tribunal Penal de Argel, el Sr. Medriss Omar fue condenado el 29 de febrero de 2004 a tres años de prisión, sentencia recurrida por el ministerio público y el inculpado. Actualmente la causa está pendiente ante el Tribunal Supremo.

e) En la segunda causa, el Sr. Medriss Omar fue acusado por la Fiscalía de Bir Mourad Raïs de complicidad de asesinato en la persona de O. Mohamed Saïd.

f) Tras ser trasladada la causa al Tribunal Penal de Argel, el Sr. Medriss Omar fue condenado el 4 de abril de 2005 a 15 años de prisión, decisión contra la que interpuso recurso de casación.

g) Como ya se ha indicado, se trata de dos causas distintas en relación con hechos y cargos diferentes y víctimas distintas.

h) El Sr. Ayoun Mohamed fue acusado por el Fiscal de la República de pertenencia a una organización terrorista.

i) Una vez concluido el sumario, el juez de instrucción trasladó la causa a la sala de acusación.

j) Tras establecer el carácter delictivo de los hechos, la sala de acusación dictó el 18 de agosto de 2004 un auto de traslado de la causa al tribunal correccional.

k) La Fiscalía General interpuso un recurso de casación contra dicha decisión. La causa sigue pendiente ante el Tribunal Supremo.

l) En cuanto a la prisión preventiva, contrariamente a lo expuesto en la comunicación, puede durar hasta 48 meses en los casos más graves de terrorismo.

m) Por último, cabe subrayar que los Sres. Bennia Salaheddine, Harizi Mohamed y Ayouné Mohamed se han beneficiado de lo dispuesto en la Orden de aplicación de la Carta para la paz y la reconciliación nacional y han sido puestos en libertad.

6. En sus observaciones la fuente ha confirmado que los Sres. Benni Salaheddine, Harizi Mohamed y Ayouné Mohamed habían sido puestos en libertad. Respecto del caso del Sr. Medriss, la fuente sigue afirmando que fue declarado culpable y condenado dos veces por los mismos delitos.

7. El Grupo de Trabajo concluye que, puesto que desde entonces los Sres. Bennia, Harizi y Ayouné han sido puestos en libertad de conformidad con la Carta para la paz y la reconciliación nacional, es aplicable el apartado a) del párrafo 17 de los métodos de trabajo del Grupo.

8. En cuanto al caso del Sr. Medriss, el Grupo de Trabajo ha observado que, según el Gobierno, el Sr. Medriss fue y sigue imputado en dos procesos distintos (uno por acciones relacionadas con actividades terroristas y otro por conspiración para cometer asesinatos). Fue declarado culpable en ambos casos, y las causas siguen pendientes debido a la apelación y al recurso de casación registrados para cada una de ellas. El Grupo de Trabajo observa que, aunque según la fuente el Sr. Medriss haya sido juzgado y condenado dos veces por el mismo delito, esta alegación no está suficientemente fundada para contradecir el argumento del Gobierno, según el cual los dos procesos en los que el Sr. Medriss ha sido declarado culpable se refieren a hechos diferentes.

9. A la luz de los hechos expuestos anteriormente, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

- En cuanto a la comunicación en nombre de los Sres. Bennia, Harizi y Ayouné, se archiva el caso;
- En cuanto a la comunicación en nombre del Sr. Medriss, su privación de libertad no es arbitraria.

Aprobada el 11 de mayo de 2006.

OPINIÓN N° 11/2006 (CHINA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 26 de octubre de 2005

Relativa al Sr. Zheng Zhihong

El Estado ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero no lo ha ratificado.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno de China por haberle facilitado puntualmente la información solicitada.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 38/2005.)
4. En vista de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo agradece la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta facilitada por el Gobierno a la fuente y recibió sus observaciones.
5. El Grupo de Trabajo considera que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y circunstancias del caso, en el contexto de las denuncias formuladas, la respuesta del Gobierno y las observaciones de la fuente.
6. El Sr. Zheng Zhihong, ciudadano de China nacido el 14 de octubre de 1957, era directivo de la Huanggang City Salt Company de la provincia de Hubei. Vivía en la residencia de la empresa en la ciudad de Huanggang.
7. En un momento no indicado antes del año 2000, Zheng Zhihong se hizo miembro practicante de Falun Gong. En 2000 acudió a Beijing a reclamar el derecho de practicar Falun Gong. Las fuerzas de seguridad lo condujeron de vuelta a la ciudad de Huanggang. Permaneció preso en el centro de detención N° 1 de la ciudad de Huanggang durante un mes. En 2001 la policía lo arrestó en su unidad de trabajo sin orden de detención y sin cargos y lo retuvo 15 días en el centro de detención N° 2.
8. El 9 de marzo de 2004 falleció el Sr. Zheng Zhong, padre del Sr. Zheng Zhihong y también miembro practicante de Falun Gong. El 11 de marzo de 2004 la Oficina de Comercio Exterior de la ciudad de Huanggang celebró un servicio conmemorativo al aire libre en honor de su antiguo directivo Zheng Zhong. Asistieron al mismo algunos funcionarios de la oficina y miembros practicantes de Falun Gong. El Sr. Zheng Zhihong pronunció un panegírico en el que afirmó que su padre había recobrado la salud al practicar Falun Gong; que la policía había vigilado y perseguido a su padre desde 2002 y que lo había obligado a exiliarse; que su unidad de trabajo le había suspendido de sueldo y que había fallecido bajo una presión tremenda y en condiciones de vida precarias debido a la pérdida de sus ingresos y a la persecución. Estas denuncias también fueron publicadas en Internet.
9. El 20 de mayo de 2004 un grupo de agentes de policía dirigidos por el jefe político del Departamento de policía del distrito de Huangzhou aprehendió al Sr. Zheng Zhihong en su apartamento. Lo encarcelaron en el centro de detención N° 1. A su detención siguieron otras

medidas de represalia contra quienes habían participado en el servicio conmemorativo del 11 de marzo de 2004. El Jefe de la Oficina de Comercio Exterior de la ciudad de Huanggang fue trasladado y alrededor de ocho miembros practicantes de Falun Gong que habían asistido al servicio fueron detenidos.

10. En junio de 2004 se dictó la orden de detención oficial. En noviembre de 2004 la policía acusó a Zheng Zhihong de "provocación" y "utilización de sectas supersticiosas o sociedades secretas u organizaciones religiosas extrañas... en detrimento del cumplimiento de la ley"⁹. El 23 de diciembre de 2004 el tribunal de distrito de Huangzhou juzgó a Zheng Zhihong y lo condenó a una pena de cinco años de prisión.

11. Zheng Zhihong apeló de la sentencia el 29 de diciembre de 2004. Su abogado alegaba que su cliente se había limitado a seguir la costumbre china tradicional de devoción filial pronunciando un panegírico en el servicio conmemorativo por su padre y que había hablado con sinceridad, de manera que ello no podía calificarse de "provocación". Más bien, el Gobierno perseguía a Zheng Zhihong porque su padre había sido miembro practicante de Falun Gong, porque al servicio habían asistido miembros practicantes de Falun Gong y porque habían pedido justicia. El tribunal popular intermedio de Huanggang rechazó el recurso de apelación el 28 de febrero de 2005. El tribunal citó la sección 1 del artículo 300 de la Ley penal de China y la sección 4 del artículo 1 de la Explicación de los métodos específicos de aplicación de la ley en casos de personas que organizan cultos con fines delictivos. Zheng Zhihong está preso en la prisión de Qinduankou en la provincia de Hubei.

12. La respuesta del Gobierno es la siguiente: Zheng Zhihong, también conocido como Sr. Zheng Hong, es un varón de etnia han nacido el 14 de octubre de 1957 en la ciudad de Huanggang, distrito de Huangzhou en la provincia de Hubei. Fue directivo de la Huanggang City Salt Company. En marzo de 2000 fue condenado por las autoridades de seguridad pública de Hubei a un mes de prisión por haber acudido a Beijing para causar disturbios y alterar el orden público. En diciembre de 2000 las autoridades de la seguridad pública de Hubei, de acuerdo con la ley, ordenaron su detención administrativa 15 días, por haber vuelto a alterar el orden público. El 11 de marzo de 2004 utilizó la Oficina de Comercio Exterior de Huanggang para celebrar un servicio en memoria de su padre, dando una enorme publicidad a Falun Gong, vilipendiando al Gobierno por haber sometido a su padre a represión política debido a que era miembro practicante de Falun Gong y formulando malintencionadamente observaciones calumniosas en el sentido de que la Oficina de Comercio Exterior había retirado el sueldo y las prestaciones a su padre. Influenciados por este discurso incendiario, los miembros de Falun Gong siguieron el féretro por las calles con ánimo de manifestarse, creando un considerable desorden público.

a) Las autoridades de seguridad pública, obrando de conformidad con la ley, investigaron estos hechos delictivos (utilización de un culto para organizar una marcha y alteración del orden público) y se incautaron de más de 200 folletos y de 44 discos compactos de Falun Gong en la vivienda de Zheng. El 20 de mayo de 2004 las autoridades de seguridad pública ordenaron la prisión preventiva de Zheng por presunta utilización de un culto en detrimento del cumplimiento de la ley; el 29 de junio la fiscalía de distrito de Huangzhou ordenó

⁹ Texto no disponible.

su detención y el 16 de noviembre el fiscal inició una acción penal en el tribunal de distrito. Éste, actuando de acuerdo con la ley, estableció un grupo colegiado que vio la causa. El fiscal, el acusado y su letrado participaron en la vista. Durante el proceso, el fiscal dio lectura a la acusación, los testigos prestaron declaración y el abogado ejerció la defensa; el proceso se desarrolló en público y de acuerdo con la ley. El tribunal determinó que el acusado Zheng Zhihong había incumplido la legislación nacional, sabiendo que el culto de Falun Gong estaba prohibido por el Estado, y que había incitado a la alteración del orden público e infringido lo dispuesto en la legislación nacional y la normativa oficial; sus actos eran constitutivos de delito a tenor del párrafo 1 del artículo 300 de la Ley penal de la República Popular China y del párrafo 4 del artículo 1 de la interpretación por el Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía Suprema Popular de las cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en casos de organización y utilización de cultos con fines delictivos, y también constituían el delito de utilización de un culto en detrimento del cumplimiento de la ley. Fue condenado a cinco años de prisión, pero Zheng no aceptó el veredicto e interpuso recurso de apelación. El tribunal popular intermedio de Huanggang vio la causa, rechazó el recurso y confirmó la sentencia original. Zheng está cumpliendo su pena en la cárcel de Qinduankou en Wuhan, en la provincia de Hubei.

b) En sus observaciones aclaratorias, el Gobierno afirma que: Falun Gong, que el Gobierno de China ha prohibido por ley, utiliza fraudulentamente nombres y terminología budistas, taoístas y cristianos para confeccionar una herejía que siembra la confusión en la mente del pueblo y propaga falacias como la noción de una "explosión mundial" y la idea de que los enfermos no pueden tomar medicamentos. En nombre de la religión, engaña [a la gente] y amasa dinero, daña vidas, pone en peligro a la sociedad, atropella los derechos humanos, causa a muchas personas la obsesión de lesionarse o suicidarse, y deja a numerosas familias llorando a parientes; esto supone una amenaza tremenda para la sociedad china. El culto sigue realizando actividades tan perjudiciales como destruir emisoras de radio y televisión, cortar cables de fibra óptica, interrumpir las señales de televisión y acosar por teléfono a quienes no están de acuerdo con ellos. Todos los países se enfrentan con cultos, como la Rama de los Davidianos en los Estados Unidos de América y Aum Shinrikyo en el Japón, con arreglo a la ley.

c) El Gobierno dice además que China es un país regido por el imperio de la ley. El poder judicial de China examina las causas respetando estrictamente la legislación, como la Ley penal y la Ley de procedimiento penal de la República Popular China. La legislación de China estipula que cualquier acto que implique la organización o utilización de cultos para socavar la aplicación de la ley es punible por ley. Zheng Zhihong sufrió las consecuencias jurídicas porque propagó un culto y lo utilizó para socavar la estabilidad social; los hechos relativos a su delito eran claros, las pruebas concluyentes y sus actos y las secuelas que entrañaron constituyen elementos del delito de utilización de un culto en detrimento del cumplimiento de la ley, según se define claramente en la legislación pertinente. Las autoridades judiciales de China actuaron en perfecta conformidad con la ley: en la investigación del delito de Zheng, su detención, la vista de la causa y el procedimiento judicial respetaron las garantías procesales, tomaron debidamente nota de las pruebas y defendieron los intereses legítimos del acusado, permitiéndole ejercer plenamente su derecho a la defensa y a ser oído. Las alegaciones en el sentido de que "la detención de Zheng Zhihong es arbitraria porque el tribunal que lo condenó actuó siguiendo instrucciones de la administración de seguridad", de que "la Oficina 610 había decidido que Zheng sería condenado a cinco años de prisión antes del comienzo del juicio" y de que "la policía entregó al tribunal una nota que decía "actúe con

severidad en este caso", escrita por el Vicegobernador de la provincia de Hubei" no corresponden con los hechos.

13. En su respuesta a las observaciones del Gobierno, la fuente afirma que en la carta original de apelación del Sr. Zheng se había expuesto su caso con claridad. La respuesta del Gobierno, de hecho, corrobora los aspectos factuales del caso. Lo que el Gobierno trató de utilizar a su favor son sus típicas alegaciones de connotación política. Una alegación fundamental era que el Sr. Zheng "había aprovechado el funeral de su padre celebrado en la Oficina de Comercio Exterior de la Ciudad de Huanggang para hacer publicidad injustificada de Falun Gong y atacar al Gobierno por la persecución política de su padre debido a que practicaba Falun Gong". "Otros miembros de Falun Gong se soliviantaron influidos por su lenguaje provocador". Esta afirmación muestra por sí misma que el Sr. Zheng se limitó a pronunciar un discurso. Inculpar al Sr. Zheng ante el Grupo de Trabajo por su discurso constituye una muestra descarada, aunque quizá involuntaria, de que el Gobierno ignora absolutamente el derecho a la libertad de expresión. En la respuesta del Gobierno de China tampoco se explicó por qué se había permitido al Sr. Zheng, como se dice, "atacar al Gobierno" en un funeral patrocinado por la Oficina de Comercio Exterior, un organismo oficial. En realidad, el Sr. Zheng fue invitado a pronunciar un panegírico en honor de su padre fallecido.

a) Otra afirmación del Gobierno es que "el Sr. Zheng incitó a decenas de miembros de Falun Gong a seguir el féretro para hacer una manifestación y alteró gravemente el orden social". Esto simplemente muestra cuán arbitrario es el Gobierno para fabricar cargos: que seguir al féretro pueda interpretarse como una manifestación y calificarse de alteración del orden social.

b) La tercera alegación es el hallazgo de "más de 200 folletos y 44 CD de Falun Gong". De nuevo el Gobierno de China muestra sin recato al Grupo de Trabajo que no respeta la libertad de prensa.

c) En resumen, el Gobierno de China ofrece al Grupo de Trabajo una admisión completa de la manera en que infringe arbitrariamente las libertades fundamentales garantizadas por la Declaración Universal de Derechos Humanos.

14. El Grupo de Trabajo toma nota de que el Gobierno esencialmente está de acuerdo con los hechos expuestos por la fuente. El Sr. Zheng Zhihong expresó sus creencias y opiniones como miembro de Falun Gong en un panegírico que pronunció, con arreglo al protocolo oficial, en el funeral de su padre el 11 de marzo de 2004. Posteriormente, el Sr. Zheng Zhihong participó con otras personas en una manifestación pacífica de protesta contra la actitud del Gobierno con respecto a Falun Gong. Por último, el Sr. Zheng Zhihong tenía en su domicilio folletos y discos compactos acerca de la asociación Falun Gong.

15. La detención del Sr. Zheng Zhihong por razón de esos hechos es incompatible con su derecho a expresar libremente, de manera pacífica, sus creencias religiosas y sus opiniones políticas y con su derecho a manifestarse pacíficamente.

16. El Grupo de Trabajo, en anteriores opiniones y con ocasión de sus visitas a China, ya expresó su preocupación por el trato a que son sometidos los miembros de la asociación Falun Gong. No considera justificado que el Gobierno mantenga en vigor leyes penales que impiden el ejercicio del derecho a la libertad de asociación, expresión y manifestación de ciudadanos que ejercen pacíficamente actividades en el marco de esa asociación.

17. A la luz de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Zheng Zhihong es arbitraria, ya que contraviene a los artículos 18, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y corresponde a la categoría II de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

18. Habiendo emitido esta opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación conforme a las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que adopte asimismo las medidas necesarias para ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 11 de mayo de 2006.

OPINIÓN N° 12/2006 (ARABIA SAUDITA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 26 de enero de 2006

Relativa al Sr. Abdurahman Nacer Abdullah al Dahmane al-Chehri y el Sr. Abdelghani Saad Muhamad al-Nahi al-Chehri

El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya respondido en el plazo de 90 días.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 38/2005.)
4. Habida cuenta de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo hubiera acogido con satisfacción la cooperación del Gobierno. A falta de información del Gobierno, el Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y circunstancias de los casos considerados, especialmente teniendo en cuenta que los hechos y denuncias que figuran en la comunicación no han sido refutados por el Gobierno.
5. El Sr. Abdurahman Nacer Abdullah al-Dahmane al-Chehri (en adelante "Abdurahman al-Chehri"), ciudadano del Reino de la Arabia Saudita de 21 años de edad (documento de identidad N° 1072917427), es un estudiante universitario residente habitual de Riad.
6. Según la información recibida, el 23 de noviembre de 2003 miembros de los servicios de inteligencia detuvieron a Abdurahman al-Chehri, supuestamente para interrogarlo acerca de ciertas amistades suyas. Sigue preso desde entonces, actualmente en la cárcel de Jeddah. No se le ha imputado oficialmente ningún delito, no se le ha informado de la duración de la orden de prisión provisional, no ha sido conducido ante un funcionario judicial, no se le ha permitido nombrar a un abogado que lo represente ni se le ha ofrecido ninguna otra posibilidad de impugnar la legalidad de su detención.
7. El Sr. Abdelghani Saad Muhamad al-Nahi al-Chehri (en adelante "Abdelghani al-Chehri"), ciudadano del Reino de la Arabia Saudita nacido el 30 de octubre de 1979 (documento de identidad N° 1029492541), es un funcionario público que reside habitualmente en Nassim Al-Gharbi, en Riad.
8. El 17 de junio de 2004 miembros de los servicios de inteligencia detuvieron a Abdelghani al-Chehri, supuestamente para interrogarlo acerca de su cuñado, Youssef al-Chehri, al parecer preso de los Estados Unidos en el centro de detención de la bahía de Guantánamo. Tras su detención fue torturado y sometido a malos tratos durante varias semanas en un centro secreto. Desde entonces su estado de salud se ha deteriorado gravemente. No ha sido acusado oficialmente de ningún delito, no ha sido informado de la duración de la orden de prisión provisional, no ha sido conducido ante un funcionario judicial, no se le ha permitido nombrar a un abogado que lo represente ni se le ha facilitado otra posibilidad de impugnar la legalidad de su detención. Abdelghani al-Chehri permanece detenido en la cárcel Al-Aicha de Riad.

9. La fuente sostiene que la detención de Abdurahman al-Chehri y de Abdelghani al-Chehri es arbitraria. Alega que carece de fundamento legal. Los hombres no han sido informados de los cargos que se les imputan; se les ha denegado la posibilidad de acceder a un abogado y no han sido conducidos ante un juez en los 26 y 19 meses transcurridos, respectivamente, desde su detención. Las autoridades hasta el momento no han presentado decisión alguna que justifique la detención y encarcelamiento de esas personas.

10. A falta de respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo considera que las alegaciones de la fuente son convincentes. La detención de Abdurahman y Abdelghani al-Chehri tenía por único objeto interrogarlos. Abdelghani fue además objeto de malos tratos y amenazas.

11. A estas dos personas se les ha negado la posibilidad de consultar con un abogado y siguen detenidas sin haber sido imputadas ni haber comparecido ante una autoridad judicial.

12. A la luz de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Abdelghani Saad Muhamad al-Nahi al-Chehri y Abdurahman Nacer Abdullah al-Dahmane al Chehri es arbitraria, ya que contraviene los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y corresponde a la categoría I de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

13. Habiendo emitido esta opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación conforme a las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que tome las iniciativas pertinentes para ser Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 11 de mayo de 2006.

**OPINIÓN N° 13/2006 (REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA
E IRLANDA DEL NORTE)**

Comunicación dirigida al Gobierno el 4 de octubre de 2005

Relativa al Sr. Paul Ikobonga Lopo

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto de párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haberle facilitado la información solicitada.
3. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
4. El Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que le facilitó la información solicitada acerca de las denuncias de la fuente. La respuesta del Gobierno fue transmitida a la fuente, que formuló observaciones al respecto.
5. El Sr. Paul Ikobonga Lopo (llamado anteriormente "Lopo Ikobonga Emongo Mbuya Madu") es ciudadano de la República Democrática del Congo nacido el 25 de octubre de 1956. Tiene 12 hijos, varios de ellos menores, todos afincados en el Reino Unido con permisos de residencia de duración ilimitada.
6. El Sr. Lopo entró en el Reino Unido de manera ilegal el 8 de agosto de 1988 por Dover utilizando una tarjeta de identidad francesa a nombre de Mbuya Madu que no le pertenecía. Solicitó asilo en el Reino Unido el mismo día. El 8 de febrero de 1989 la Sra. Ntalongeno Ikobonga, también ciudadana de la República Democrática del Congo presentó una solicitud de asilo en el Reino Unido y el Sr. Lopo fue inscrito como cónyuge a su cargo con el nombre de Weshti Ikobonga. El 7 de julio de 1989 se le concedió asilo y fue autorizada a permanecer en el Reino Unido hasta el 7 de julio de 1993. El Sr. Lopo (con el nombre de Weshti Ikobonga) obtuvo asilo con ella.
7. El 26 de marzo de 1989 el Sr. Lopo fue descubierto cuando trataba de facilitar la entrada ilegal en el Reino Unido de dos nacionales del Congo mediante pasaportes falsos. El 25 de noviembre de 1991 el Sr. Lopo fue declarado culpable de cinco cargos de apropiación fraudulenta. El tribunal le impuso una pena de dos años de prisión y recomendó su expulsión del país. Sin embargo, las autoridades no procedieron a la expulsión. El 1° de junio de 1994 el Sr. Lopo fue declarado de nuevo culpable de un delito contra la propiedad y se le impuso una pena de 40 horas de servicio comunitario. Volvió a ser condenado el 23 de junio de 1994, esta vez por conducir sin licencia de conductor y sin seguro.
8. Por carta de fecha de 13 de noviembre de 1995, el Departamento de Inmigración y Nacionalidad informó al Sr. Lopo de que se había denegado su solicitud de estatuto de refugiado. Sin embargo, se le concedió un permiso excepcional de permanencia en el Reino Unido durante un año. El 23 de diciembre de 1996 el Departamento concedió al Sr. Lopo y a su familia un permiso excepcional para quedarse en el país hasta el 13 de noviembre de 1999.

9. El 22 de mayo de 1998 el Sr. Lopo fue declarado culpable de conducir en estado de embriaguez y de agredir a un agente de policía y condenado a seis meses de prisión. El 20 de agosto de 1999 el Sr. Lopo fue descubierto cuando trataba de facilitar la entrada ilegal de cinco personas en el Reino Unido.

10. El 17 de octubre de 2001 el Sr. Lopo presentó una solicitud de permiso de residencia indefinida.

11. El 10 de julio de 2004 el Sr. Lopo llegó al aeropuerto londinense de Heathrow con dos niños, un hijo suyo y la hija de un primo. Fue detenido y acusado de tratar de engañar a las autoridades con respecto a la identidad de los niños. El 12 de julio de 2004 fue declarado culpable de los cargos de utilización de documento falso, de ayuda a la entrada ilegal de personas y de obtención fraudulenta de autorización. El 27 de agosto de 2004 fue condenado a 15 meses de prisión. El tribunal recomendó que fuera expulsado tras cumplir la pena.

12. En esta ocasión el Gobierno decidió seguir la recomendación y dictar la correspondiente orden de expulsión y el 9 de noviembre de 2004 se notificó al Sr. Lopo la decisión de que sería objeto de una orden de expulsión. El 25 de noviembre de 2004 éste presentó un recurso contra la decisión.

13. Después de cumplir la pena de prisión, el 4 de marzo de 2005 el Sr. Lopo fue detenido por el Servicio de Inmigración en virtud de la Ley de inmigración de 1971, al ser objeto de un procedimiento de expulsión iniciado a raíz de su condena por delitos graves. El 19 de abril de 2005 se celebró la vista de su recurso contra la orden de expulsión. El 25 de abril de 2005 el juez de inmigración designado rechazó el recurso. En su decisión, el juez de inmigración sopesó, por un lado, la alegación del Sr. Lopo de que no debía ser expulsado ya que sus hijos vivían en el Reino Unido y necesitaban que siguiera orientándolos y, por otro, sus antecedentes penales, y llegó a la conclusión de que la expulsión del Sr. Lopo también se justificaba desde el punto de vista de los derechos humanos. Al decidir, el juez expresó dudas acerca de si los 16 hijos eran todos en realidad del Sr. Lopo, hecho que el Ministerio del Interior nunca había cuestionado.

14. El 28 de abril de 2005 el Sr. Lopo presentó una solicitud de reconsideración de la decisión ante el Tribunal de Asilo e Inmigración. Basó su solicitud en dos motivos: a) que si era expulsado a la República Democrática del Congo correría el riesgo de ser perseguido, asesinado, torturado y detenido arbitrariamente porque había sido soldado y desertor; y b) que, tras haber residido más de 16 años en el Reino Unido y teniendo familia numerosa radicada en el Reino Unido, a tenor del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos su derecho a que se respetase su vida familiar primaba sobre cualquier motivo de expulsión, ya que no había sido condenado por ningún delito violento.

15. El 6 de mayo de 2005 el Sr. Lopo solicitó la libertad condicional bajo fianza, aduciendo que tenía en el Reino Unido domicilio, vínculos familiares y comunitarios sólidos y que no había indicios de que las autoridades de inmigración fueran a resolver rápidamente la cuestión de si debía ser expulsado.

16. La fuente aduce que la detención prolongada del Sr. Paul Ikobonga Lopo es arbitraria porque ya ha cumplido íntegramente todas las penas de prisión que le fueron impuestas por los

delitos de que fue declarado culpable. Actualmente sigue detenido en espera de ser expulsado, pero no hay perspectivas de que la expulsión vaya a llevarse a cabo en un plazo razonable. La fuente observa que las negociaciones entre el Reino Unido y la República Democrática del Congo acerca de un memorando de entendimiento sobre la expulsión de ciudadanos congoleños están en curso desde hace años sin éxito. La fuente añade que muchos casos de ciudadanos de la República Democrática del Congo que están esperando ser expulsados del Reino Unido indican que los obstáculos prácticos que impiden el retorno involuntario a la República Democrática del Congo son insuperables. No hay indicios de que la situación vaya a cambiar en un futuro previsible. La fuente expone que la jurisprudencia de los tribunales del Reino Unido establece claramente que la detención con fines de expulsión no debe mantenerse si no resulta realista proceder a la expulsión en un plazo razonable.

17. El Gobierno, en su respuesta, dice que el Sr. Lopo no fue detenido arbitrariamente. Señala que empleó al menos 17 alias diferentes en sus tratos con las autoridades de inmigración británicas. El Gobierno insiste en que el Sr. Lopo entró en el Reino Unido de manera ilegal el 8 de agosto de 1988, utilizando un documento de identidad francés y solicitando asilo a nombre de "Mbuya Madu"; el 8 de febrero de 1989 su esposa presentó otra solicitud de asilo para ella con el Sr. Lopo como persona a cargo con el nombre de "Wetshi Ikobonga". El 26 de marzo de 1989, usando la identidad de "Mbuya Madu Nana Okitungu", trató de facilitar la entrada ilegal de dos ciudadanos del Zaire que viajaban con pasaportes falsos y se le denegó la entrada en el Reino Unido. Fue expulsado el mismo día.

18. El Gobierno dice que el 7 de julio de 1989 se reconoció el estatuto de refugiada a la esposa del Sr. Lopo. Él obtuvo, con la identidad de "Wetshi Ikobonga", autorización para permanecer en el Reino Unido hasta el 7 de julio de 1993, en calidad de persona a cargo. El 11 de enero de 1990 el Sr. Lopo solicitó asilo con el nombre de "Ndinga Lopo". El 1º de mayo de 1990 el Sr. Lopo dijo que quería retirar su solicitud de asilo a nombre de Mbuya Madu, pero posteriormente, el 15 de agosto, indicó que quería seguir solicitando asilo en el Reino Unido.

19. El Gobierno señala que el 25 de noviembre de 1991 el Sr. Lopo fue declarado culpable de cinco cargos de "apropiación fraudulenta". El tribunal lo condenó a dos años de prisión y recomendó su expulsión. No se puso en práctica la recomendación del tribunal. Cuando cumplió su condena fue detenido, y posteriormente puesto en libertad bajo fianza. El 1º de junio de 1994 fue declarado culpable de "tentativa de apropiación fraudulenta" y condenado a cumplir 40 horas de servicio comunitario y se le impuso una multa. El 23 de junio de 1994 fue condenado por "posesión de documentación oficial falsa", "uso de documentación falsa", "conducir sin licencia de conductor ni seguro", se le impuso una multa y se le inhabilitó para conducir durante seis meses.

20. El Gobierno informa que el 13 de noviembre de 1995 el Sr. Lopo y su familia obtuvieron una autorización para permanecer en el Reino Unido a título excepcional, independientemente de las normas de inmigración, durante 12 meses, que fue prorrogada hasta el 13 de noviembre de 1999. El 22 de mayo el Sr. Lopo fue condenado por conducir en estado de embriaguez y agredir a un agente de policía. Se le impuso una pena de tres meses de prisión y se le inhabilitó para conducir durante tres años.

21. El Gobierno sigue enumerando los distintos delitos que fue cometiendo el Sr. Lopo, como los de facilitar entradas ilegales, utilizar documentación falsa y obtener fraudulentamente autorización (12 de julio de 2004), que le valieron una condena de 15 meses de prisión y una recomendación de expulsión dictadas por el tribunal; y los de conducir en estado de alcoholemia, agresión simple, destrucción o daño de bienes, incumplimiento de la obligación de presentarse ante el tribunal en la fecha fijada al concedérsele la libertad bajo fianza (12 de agosto de 2004), que le valieron una condena a cuatro meses de prisión. Entre tanto, la esposa y los hijos del Sr. Lopo, de quienes, según declaró en 1999, estaba separado solicitaron ese año permiso de residencia indefinida en el Reino Unido y lo obtuvieron el 4 de agosto de 2004.

22. El 1º de octubre de 2004 se denegó al Sr. Lopo la autorización de entrar en el Reino Unido y en noviembre de 2004 se le notificó la decisión de que sería objeto de una orden de expulsión. Presentó un recurso contra esa decisión, que fue rechazado el 25 de abril de 2005. El 4 de marzo de 2005 el Sr. Lopo terminó de cumplir su pena de prisión y quedó detenido por el Servicio de Inmigración. El 6 de septiembre de 2005 su solicitud de examen por el Tribunal Superior fue rechazada, con lo que se agotaron todos los recursos de apelación disponibles. El 14 de septiembre de 2005 se dictó una orden de expulsión a nombre del Sr. Lopo y se tomaron disposiciones para expulsarlo el 24 de octubre de 2005. Éstas se suspendieron tras descubrirse que el Sr. Lopo había presentado una última solicitud a la Comisión de Revisión de Casos Penales, que requiere la comparecencia del interesado.

23. El Gobierno dice que el Sr. Lopo retiró varias solicitudes de libertad bajo fianza y que el juez le denegó otras por haber incumplido en el pasado las condiciones de la fianza y por sus malos antecedentes en materia de inmigración.

24. El Gobierno afirma que la expulsión del Sr. Lopo no es una perspectiva irreal y que habría sido expulsado a la República Democrática del Congo en octubre de 2005 si no hubiera presentado una última solicitud por su causa penal, cuya tramitación debe acelerarse, y una vez finalizada será expulsado utilizando su pasaporte nacional válido. Dado que la Comisión de Revisión de Casos Penales ha dictado la decisión provisional de no remitir la condena del Sr. Lopo al tribunal de apelación, su expulsión es inminente.

25. El Gobierno afirma por último que el Sr. Lopo entró en el Reino Unido varias veces con distintas identidades y que volvió voluntariamente a la República Democrática del Congo, que ha dado prueba de una total falta de respeto por las leyes de inmigración y la normativa penal del Reino Unido al emplear para ello 17 alias conocidos. Su detención ha sido reexaminada periódicamente y se ha mantenido en razón de sus pésimos antecedentes en materia de inmigración, su anterior incumplimiento de las condiciones de excarcelación, su utilización de fraude verbal y documental para obtener la autorización de entrar y permanecer en el Reino Unido o evitar la expulsión, sus entradas ilegales y tentativas de entrada ilegal en el Reino Unido y la seria probabilidad de que no cumpliera ninguna de las condiciones para su puesta en libertad si se pusiera fin a su detención.

26. La fuente, en su respuesta al Gobierno, dice que el Sr. Lopo sólo utilizó tres alias y que los demás formaban parte del mismo nombre compuesto. Admite las alegaciones del Gobierno acerca de sus delitos pero señala que ya ha pagado por ellos. Dice que se le denegaron al menos diez solicitudes de libertad bajo fianza. Afirma que estuvo en Brazzaville y no en la República

Democrática del Congo. Dice que para cuando la respuesta de la fuente llegue al Grupo de Trabajo quizá ya haya sido expulsado.

27. El Grupo de Trabajo considera que está en condiciones de emitir una opinión basándose en las declaraciones formuladas por el Gobierno y la fuente. Ambos concuerdan en cuanto a los delitos cometidos por el Sr. Lopo, en que el tribunal formuló la recomendación de expulsarlo una vez cumplida su pena y en que desde que terminó de cumplirla en marzo de 2005 el Servicio de Inmigración lo ha mantenido en detención administrativa hasta que sea expulsado. Tampoco se niega que el Sr. Lopo ejerció múltiples recursos contra la expulsión mientras permanecía detenido sin concedérsele la libertad bajo fianza debido a sus malos antecedentes penales y en materia de inmigración.

28. El Grupo de Trabajo, cuyo mandato no le permite examinar el procedimiento que conduce a la expulsión, sólo puede analizar el carácter de la privación de libertad de la persona en cuestión. En este sentido, el Grupo de Trabajo se preocupa de que la detención de los solicitantes de asilo o las personas en situación irregular a efectos de expulsión se ajuste a la norma de duración razonable, según se indicó en anteriores informes (E/CN.4/2003/8/Add.2).

29. La cuestión es si el Sr. Lopo gozó, mientras estuvo detenido, de las disposiciones relativas a un juicio justo, que incluyen que el período de detención sea razonable. El Grupo de Trabajo toma nota de que el Sr. Lopo siguió procedimientos administrativos y judiciales en los que pudo impugnar su detención. Pudo utilizar todos los recursos disponibles para no ser expulsado y no fue puesto en libertad por no haber respetado las condiciones de la libertad bajo fianza que debía cumplir.

30. Dada la duración de los diversos procedimientos entablados, el Grupo de Trabajo considera que la detención no fue indefinida ni se prolongó más de lo razonable. Al haberse pospuesto ya una fecha de expulsión debido al recurso presentado por el Sr. Lopo, que requería su permanencia en el país, y considerando, según reconoce la fuente, que se estableció un nuevo plazo para su expulsión al finalizar el procedimiento de apelación, parece efectivamente que se ha fijado un límite al período de detención.

31. Dicho esto, el Grupo de Trabajo estima que en este caso concreto el período de detención debido a las circunstancias citadas, no constituye una violación de las normas internacionales relativas a un juicio justo que confiera carácter arbitrario a la privación de libertad.

32. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La detención del Sr. Paul Ikobonga Lopo no es arbitraria.

Aprobada el 11 de mayo de 2006.

OPINIÓN N° 14/2006 (REPÚBLICA ISLÁMICA DEL IRÁN)

Comunicación dirigida al Gobierno el 7 de octubre de 2005

Relativa a la Sra. Kobra Rahmanpour

El Estado Parte ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 38/2005.)
3. El Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno de la República Islámica del Irán, que le facilitó la información solicitada sobre las alegaciones de la fuente. La respuesta del Gobierno se transmitió a la fuente, la cual formuló comentarios.
4. Según la información recibida, la Sra. Kobra Rahmanpour, de 22 años, residente de Shahre Rey, cerca de Teherán, fue detenida el 5 de noviembre de 2000; se halla encarcelada en el pabellón de los condenados a muerte en la cárcel de Evin (Teherán), a la espera de su ejecución judicial.
 - a) La Sra. Kobra Rahmanpour nació y creció en el seno de una familia muy pobre y tuvo que abandonar sus estudios. Su padre es anciano y uno de sus hermanos es discapacitado. Para ayudar a la familia a sobrevivir se casó con un hombre de más edad que su propio padre y 40 años mayor que ella. Se dice que sufrió reiteradamente malos tratos y abusos en la casa de su marido. El día del último incidente antes de ser detenida, su suegra, la Sra. Farokh-shoa Sabet, al parecer la agredió con un cuchillo de cocina. La Sra. Rahmanpour declaró que entonces había matado a la suegra en un acto de legítima defensa.
 - b) La Sra. Rahmanpour fue detenida en el domicilio de su marido y su suegra, poco después del incidente, por agentes de la comisaría de Niavaran provistos de una orden de detención. Fue acusada de homicidio intencional y encarcelada a la espera de juicio.
 - c) La fuente sostiene que la Sra. Rahmanpour fue interrogada en ausencia de un abogado defensor. Antes de que pudiera contar con representación letrada fue coaccionada para que confesara el homicidio de su suegra. Durante la entera fase de la instrucción no pudo ser asistida por un abogado defensor.
 - d) El juicio de la Sra. Kobra Rahmanpour comenzó el 21 de agosto de 2001 ante la Sala 1608 del Tribunal de lo Penal de Teherán y duró cinco sesiones, de las cuales sólo la primera fue pública y las otras cuatro se celebraron a puerta cerrada. La fuente afirma que la Sra. Rahmanpour fue declarada culpable de homicidio premeditado y condenada a muerte a pesar de que el abogado defensor alegó demencia temporal y demostró que en varias ocasiones había sido objeto de abusos mentales, físicos y sexuales, violación, difamación y fraude por parte del marido, el Sr. Alireza Niakaniyan. La Sra. Rahmanpour constantemente era víctima de humillaciones por su marido, su suegra y otros miembros de la familia. En una ocasión el marido fue detenido y encarcelado por abusos físicos y sexuales contra ella. El abogado también demostró que la Sra. Rahmanpour sufría una grave depresión en el período en que tuvo lugar el incidente.

e) Según se informó, el abogado de la Sra. Rahmanpour interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Supremo para que anulara el veredicto de culpabilidad. A pesar del hecho de que la Sra. Rahmanpour siempre se declaró no culpable y nunca se retractó de su declaración de haber actuado en legítima defensa contra su suegra que la agredía, el Tribunal Supremo rechazó esa declaración y confirmó el veredicto el 22 de agosto de 2002.

f) El castigo impuesto a la Sra. Rahmanpour podía haberse conmutado en pena de prisión si ésta obtenía el indulto de los herederos de la víctima, pero no fue así. La Sra. Rahmanpour permanece recluida en el pabellón de los condenados a muerte desde que el Tribunal Supremo confirmó el veredicto. Su ejecución se ha aplazado varias veces. Al parecer estas demoras en la ejecución se deben a que su ex marido y la familia de éste no han podido presentar los documentos probatorios de su relación con la víctima y posiblemente también a la falta del material necesario para llevar a cabo la ejecución.

g) La fecha de la ejecución de la Sra. Kobra Rahmanpour se fijó por primera vez para el 10 de noviembre de 2003, y posteriormente para el 31 de diciembre de 2003 y el 28 de febrero de 2004, antes de que la decisión se sometiese a un consejo de arbitraje en vista de la posibilidad de obtener que los herederos de la víctima aceptaran una indemnización o el pago de dinero de sangre (*dhiye*) en lugar de una retribución en especie (*qesas-e nafs*). En julio de 2005 los herederos de la víctima ratificaron su decisión de no indultar a la Sra. Kobra Rahmanpour y de no aceptar el dinero de sangre. Entonces se decidió que la ejecución se llevaría a cabo el 15 de abril de 2005, pero también esa vez se aplazó. Los esfuerzos de intercesión de personalidades públicas y de altos funcionarios no han disuadido a la familia de la víctima de desear la ejecución, que ahora puede tener lugar en cualquier momento.

h) La fuente considera que la detención de la Sra. Kobra Rahmanpour es arbitraria porque no se respetaron sus derechos fundamentales. La Sra. Rahmanpour fue detenida por agentes de la policía a petición de la familia de la víctima después de la muerte de ésta. No pudo tener acceso a un abogado en las horas inmediatas a la detención ni tampoco durante la entera fase de la instrucción, lo cual coadyuvó a que las autoridades ejercieran coacción sobre ella para que se autoincriminara. No pudo impugnar la legalidad de su detención antes del juicio ni obtener la libertad bajo fianza.

i) La fuente añade que no se observó el derecho de la Sra. Rahmanpour a un juicio equitativo, porque el juicio no cumplió con las normas internacionales. A ese respecto, se debe mencionar que no hubo presunción de inocencia y que no se respetó el derecho a no declarar contra uno mismo. La Sra. Rahmanpour no se benefició de una audiencia pública. La fuente considera que el tribunal que la condenó no era independiente ni imparcial y que no se le reconoció plenamente el derecho a defenderse a sí misma. Añade que el recurso de apelación no constituyó verdaderamente un recurso.

5. El Gobierno indica en su respuesta que la Sra. Kobra Rahmanpour fue acusada de asesinato en primer grado en la persona de su suegra y tras un proceso penal con las debidas garantías ante un tribunal competente, en el que contó plenamente con la asistencia de un abogado defensor de su elección, fue condenada a la pena de muerte. La pena fue confirmada por el Tribunal Supremo; sin embargo, no se ejecutó por órdenes directas del Presidente de la Magistratura a efectos de que se estudiasen nuevas consideraciones, entre otras, las consultas entre la acusada y los herederos de la víctima. El Presidente de la Magistratura remitió la causa

al Consejo de Arbitraje a fin de que pudiese determinar el consentimiento de los herederos de la víctima por medio de los mecanismos pertinentes. Las diversas reuniones entre la Magistratura y los herederos de la víctima hasta la fecha no han llevado a una conclusión satisfactoria. Continúan los esfuerzos de arbitraje y la condena sigue suspendida pese a que el Tribunal Supremo la confirmó hace ya casi un año.

a) La protección de los derechos del autor de un delito no debe impedir al sistema de justicia proteger los derechos de la víctima, que, en este caso, ha sido privada de su derecho más esencial entre todos, el derecho a la vida. En el párrafo 2 de la resolución 1994/45 de la Comisión de Derechos Humanos, titulada "La cuestión de la integración de los derechos de la mujer en los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y la eliminación de la violencia contra la mujer", la Comisión hace suyo el apartado c) del artículo 4 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, que reza "... castigar los actos de violencia contra la mujer y adoptar medidas apropiadas y eficaces respecto de los actos de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares ".

b) De conformidad con el artículo 7 de las "Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte", contenidas en la resolución 1984/50 del Consejo Económico y Social, la Sra. Rahmanpour tiene derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena. Lo ha hecho, como se ha señalado, y la Magistratura de la República Islámica del Irán, conforme al artículo 8 de las mismas salvaguardias, se ha abstenido de ejecutar la pena "mientras estén pendientes algún procedimiento de apelación u otros procedimientos de recurso o relacionados con el indulto o la conmutación de la pena".

6. La denuncia presentada con respecto al caso de la Sra. Rahmanpour se basa en dos alegaciones. En primer lugar, se sostiene que el proceso penal no fue imparcial y, en segundo lugar, se arguye que la calificación de los hechos por los que la Sra. Rahmanpour fue juzgada no fue correcta según la legislación iraní aplicable.

7. El Grupo de Trabajo destaca antes que nada que, si bien su mandato consiste en examinar si la Sra. Rahmanpour se benefició de un juicio equitativo en el contexto de su detención, su competencia no se extiende a valorar si la pena capital dictada contra ella se ajusta a la legislación interna aplicable. Por lo tanto, el único aspecto del caso de la Sra. Rahmanpour que entra en el ámbito de competencias del Grupo de Trabajo es el de determinar si el procedimiento penal de que fue objeto es compatible con las normas internacionales pertinentes.

8. Por consiguiente, en los párrafos siguientes el Grupo de Trabajo se concentrará en los aspectos de las debidas garantías en el procedimiento penal contra la Sra. Rahmanpour.

9. La principal objeción de la fuente al procedimiento es que la Sra. Rahmanpour, una vez detenida, fue interrogada en ausencia de un abogado defensor; más concretamente, que fue coaccionada para que confesara el homicidio de su suegra antes de poder tener contacto con un letrado. En resumen, se sostiene que durante toda la fase de la instrucción no pudo recurrir a la asistencia de un abogado defensor.

10. Por el contrario, el Gobierno señaló, sin dar más detalles al respecto, que la Sra. Rahmanpour "contó plenamente con la asistencia de un abogado defensor de su elección".

11. El Grupo de trabajo observa que la contradicción entre ambas alegaciones es sólo aparente. La declaración del Gobierno se entenderá obviamente en el sentido de que la acusada contó con la asistencia del abogado defensor durante todo el juicio. El Gobierno no confirmó ni refutó que antes del inicio del juicio la Sra. Rahmanpour careciera de representación letrada.

12. Esta interpretación de la declaración del Gobierno se apoya en la propia experiencia del Grupo de Trabajo adquirida en su visita a la República Islámica del Irán en 2003. Durante esa visita las autoridades explicaron a la delegación que la legislación iraní no exige la participación de abogados defensores desde el comienzo de la instrucción. Ello también se aplica a la instrucción de las causas por delitos punibles con la pena capital. En vista de que el Grupo de Trabajo consideraba que en ese aspecto la legislación nacional discrepaba con la legislación y la práctica internacional, formuló la siguiente recomendación en su informe sobre la visita (E/CN.2/2004/3/Add.2): "Se debe prever la presencia activa del abogado, independientemente de la naturaleza del caso, desde el momento de la detención o, como mínimo, durante la etapa de la instrucción, durante todo el juicio y en el ejercicio de los recursos". Por todas estas razones, la declaración del Gobierno puede interpretarse en el sentido de que no impugna la alegación de la fuente de que la Sra. Rahmanpour no pudo tener acceso a los servicios de un abogado defensor durante el período transcurrido desde que fue detenida hasta que comenzó el juicio.

13. La falta de representación letrada en la instrucción de un delito punible con la pena capital puede poner en grave peligro un valor humano supremo: la vida del acusado. El Grupo de Trabajo considera que en el presente caso la falta de abogado en la etapa inicial de la instrucción es tan perjudicial para el interés de la justicia en general y de la persona acusada en particular que confiere carácter injusto al procedimiento penal.

14. Sobre la base de esta consideración el Grupo de Trabajo concluye que:

La privación de libertad de la Sra. Rahmanpour es arbitraria, ya que infringe el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a la categoría III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

15. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de la República Islámica del Irán que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de la Sra. Kobra Rahmanpour. En las circunstancias específicas de este caso y teniendo presente que la Sra. Rahmanpour se encuentra en el pabellón de los condenados a muerte desde hace mucho tiempo, lo más apropiado sería eximirla de la ejecución de la pena capital. El Grupo de Trabajo estima que tan generosa medida sería muy bien acogida y sumamente apreciada por la comunidad internacional.

Aprobada el 11 de mayo de 2006.

OPINIÓN N° 15/2006 (REPÚBLICA ÁRABE SIRIA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 19 de enero de 2006

Relativa al Sr. Ryad Hamoud Al-Darrar

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su reconocimiento al Gobierno de la República Árabe Siria por haberle transmitido la información solicitada.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 38/2005.)
4. Habida cuenta de las alegaciones formuladas, el Grupo de Trabajo acoge favorablemente la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo transmitió a la fuente la respuesta proporcionada por el Gobierno. Sin embargo, ésta no le ha comunicado hasta la fecha sus observaciones. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y circunstancias del caso, en el contexto de las alegaciones formuladas y de la respuesta dada por el Gobierno.
5. El Sr. Ryad Hamoud Al-Darrar, nacido en 1954 en Deir Ezzor, casado y padre de cinco hijos, profesor de literatura árabe y miembro del Foro Nacional por el Diálogo Democrático, fue aprehendido el 4 de junio de 2005 en su domicilio por miembros del Organismo de Seguridad Política. Se afirma que lo detuvieron sin orden judicial en que se especificaran claramente los cargos que se le imputaban. A pesar de su mal estado de salud, pasó los primeros 25 días de detención incomunicado en celda de aislamiento. Posteriormente fue trasladado a la Sección N° 2 (política) de la cárcel de 'Adhra, cerca de Damasco.
6. Se alega que el Sr. Al-Darrar necesita con urgencia una medicación adecuada y atención médica especializada. Sufre de una forma grave de diabetes que requiere tratamiento permanente con insulina. Se sostiene que en la cárcel su estado de salud podría deteriorarse aún más.
7. Según la información recibida, el 20 de mayo de 2005 el Sr. Al-Darrar presidió una reunión pública en Deir Ezzor de más de 200 miembros del Foro Nacional por el Diálogo Democrático. Después de esa reunión escribió una comunicación al décimo Congreso local del partido gubernamental, en la que pedía una reforma constitucional, el establecimiento de una democracia pluripartidista, el fin del estado de emergencia y varias reformas políticas, entre las cuales el regreso de los exiliados y la puesta en libertad de los presos políticos. El 3 de junio de 2005 el Sr. Al-Darrar denunció el fallecimiento en la cárcel del preso Mohamed Mashouq Al-Khiznaoui, y pidió una investigación exhaustiva de esa muerte. La fuente sostiene que éstas fueron las razones de su detención.
8. El 4 de diciembre de 2005 el Sr. Al-Darrar compareció en la primera audiencia ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado (Mahkamat Amn Al Dawla Al Ulya), ante el cual fue acusado de haber infringido los artículos 285, 286 y 287 del Código Penal, relativos a delitos

políticos, principalmente pertenencia a una organización política no autorizada y perturbación de la concordia de la nación. La siguiente sesión del juicio se previó para el 15 de enero de 2006.

9. La fuente alega que sus abogados no fueron autorizados a visitarlo. Sus familiares fueron autorizados a visitarlo una sola vez y únicamente con carácter excepcional. Sus abogados se quejaron de que, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 275 del Código de Procedimiento Penal, no tuvieron acceso al escrito de cargos y otros documentos relacionados con la causa.

10. Según la fuente, se trata de un caso de detención arbitraria por motivos políticos. El Sr. Al-Darrar se encuentra detenido por el único motivo de haber expresado sus convicciones de conciencia y de haber ejercido sus derechos a la libertad de expresión y asociación. El proceso judicial de este acusado ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado está gravemente viciado e incumple seriamente las normas internacionales de imparcialidad. El Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, que fue creado en el marco de la legislación de emergencia de 1963, no está obligado por las normas del Código de Procedimiento Penal de Siria. Los magistrados, especialmente el presidente del tribunal, tienen amplios poderes discrecionales. Además, el derecho de los acusados a tener defensor es restringido. Por último, los veredictos de este tribunal no son apelables.

11. La fuente recuerda que en abril de 2001 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por los procesos que se tramitan ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado. Señaló que esos procesos eran "incompatibles con las disposiciones de los párrafos 1, 3 y 5 del artículo 14" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; que el tribunal desestimaba denuncias de tortura, incluso en casos flagrantes, y que no se podía recurrir contra sus decisiones (CCPR/CO/71/SYR/Add.1, párr. 16).

12. La fuente considera además que el tribunal ha sido concebido como institución del estado de emergencia. Depende únicamente del poder ejecutivo del Gobierno; no pertenece al sistema ordinario de justicia penal y responde únicamente ante el Ministro del Interior. Sus facultades se limitan a la sala del juicio y no puede cerciorarse de que los acusados absueltos sean efectivamente puestos en libertad.

13. En su respuesta, el Gobierno dice que el Sr. Al-Darrar ha sido acusado de pertenecer a una organización secreta no autorizada, difundir informaciones falsas y perturbar la concordia de la nación, delitos tipificados en los artículos 225, 226 y 328 del Código Penal. La vista de su proceso tendrá lugar el 5 de marzo de 2006.

14. El Grupo de Trabajo toma nota de que el Gobierno no refuta que se hayan formulado cargos penales contra el Sr. Al-Darrar porque organizó una reunión pública, publicó una comunicación y denunció una muerte ocurrida en la cárcel. Esas actividades se desarrollaron sin ninguna violencia y constituyen derechos protegidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

15. Los hechos descritos muestran que el Sr. Al-Darrar sostenía una opinión e impartía información, lo cual es un derecho que le asiste en virtud del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Organizar una reunión pública sin violencia es un derecho que le asiste en virtud del artículo 20, que consagra el derecho a la libertad de reunión pacífica. El Sr. Al-Darrar se encuentra detenido por el único motivo de ejercer estos derechos.

16. Además, no se refuta que el Sr. Al-Darrar fuera detenido sin orden judicial y mantenido incomunicado los primeros 25 días de detención, que sus abogados no fueran autorizados a ponerse en contacto con él y que no se les entregaran los autos pertinentes de la causa, ni que el Sr. Al-Darrar no se beneficiara de un juicio equitativo e imparcial, como pone de manifiesto la descripción del proceso ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado.

17. A la luz de cuanto antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad del Sr. Ryad Hamoud Al-Darrar es arbitraria, ya que infringe los artículos 9, 10, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14, 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a las categorías II y III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

18. Habiendo emitido esta opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Ryad Hamoud Al-Darrar, conforme a las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Aprobada el 12 de mayo de 2006.

OPINIÓN N° 16/2006 (REPÚBLICA ÁRABE SIRIA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 26 de octubre de 2005

Relativa a los Sres. Muhammed Osama Sayes, Ahmet Muhammad Ibrahim, 'Abd al-Rahman al-Musa, Nabil al-Marabh y Muhammad Fa'iq Mustafa

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su reconocimiento al Gobierno de la República Árabe Siria por haberle transmitido la información solicitada.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 38/2005.)
4. Habida cuenta de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. El Grupo transmitió la respuesta facilitada por el Gobierno a la fuente y recibió sus observaciones.
5. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y circunstancias de los casos, en el contexto de las denuncias formuladas y la correspondiente respuesta del Gobierno, así como de las observaciones de la fuente.
6. Los casos relativos a las cinco personas mencionadas se comunicaron al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria como sigue.
7. El Sr. Muhammed Osama Sayes, ciudadano sirio de 30 años, fue expulsado del Reino Unido a la República Árabe Siria en mayo de 2005 vía el aeropuerto Schiphol de Amsterdam, después de que las autoridades del Reino Unido rechazaran su solicitud de asilo político. Se informa de que es miembro de la Hermandad Musulmana, organización proscrita. Fue detenido al llegar a Damasco y trasladado a la Sección de Seguridad Política en esa ciudad poco después, pero no ha sido acusado de ningún delito. Se desconoce el lugar en que actualmente se encuentra detenido y nadie lo ha visto desde hace cuatro meses. Se teme que pueda sufrir torturas.
8. El Sr. Ahmet Muhammad Ibrahim, de cerca de 21 años, nacional de Siria, se halla detenido desde que fue expulsado de Turquía a la República Árabe Siria el 25 de marzo de 2005. Había sido arrestado por las fuerzas de seguridad de Turquía en las proximidades de la frontera con Siria el 22 de agosto de 2004 y encarcelado por presunta pertenencia a la organización armada curda Kongra Gel (conocida anteriormente como el PKK). Se afirma que aunque el 24 de marzo de 2005 un tribunal turco lo absolvió de todos los cargos, fue entregado a las autoridades sirias y acto seguido encarcelado en Qamishli, en el noreste del país. En la República Árabe Siria al parecer estuvo detenido en varios centros bajo el control de diferentes secciones de la seguridad. Supuestamente se encuentra desde hace tres meses en la prisión de Tadmur, en el desierto de Homs, a aproximadamente 250 km al noreste de Damasco.
9. Según la información facilitada por la fuente, el Sr. Ahmet Muhammad Ibrahim ha sido sometido a tortura, en particular con cables eléctricos, golpes y el método del "neumático",

tortura que consiste en colgar a la víctima de un neumático y golpearla con palos y cables. Se afirma que su estado de salud mental es muy deficiente. Se cree que Ahmet Muhammad Ibrahim está acusado de pertenecer a un grupo de oposición curdo.

10. El Sr. 'Abd al-Rahman al-Musa, nacional sirio de 41 años, gerente de una tienda de alimentación, se encuentra detenido en Siria sin cargos desde enero de 2005. Vivía en los Estados Unidos desde 1991. En Houston, Texas, contrajo matrimonio con una ciudadana norteamericana y tuvo dos hijos. En marzo de 2004 se rechazó su solicitud de asilo y fue encarcelado hasta que se dictó orden de expulsarlo del país. Fue expulsado por las autoridades de los Estados Unidos el 19 de enero de 2005 vía el aeropuerto Schiphol de Amsterdam, a pesar de su anterior pertenencia a la proscrita organización Hermandad Musulmana. Al principio quedó recluido en el Centro de Detención de Seguridad Política de Hama, en el oeste de Siria, antes de ser trasladado a otro lugar de detención. Se sostiene que desde abril de 2005 no le permiten ponerse en contacto con su familia o un abogado y que está incomunicado.

11. La fuente también menciona la posibilidad de que el Sr. 'Abd al-Rahman al-Musa sea juzgado por cargos desconocidos ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, tribunal no obligado por las normas del Código de Procedimiento Penal, que actúa fuera del sistema normal de justicia y está bajo el control del poder ejecutivo del Gobierno. Se sostiene que los acusados ante este tribunal sólo pueden acceder a un abogado por pocos minutos antes o después de las sesiones del juicio y que es un tribunal que carece de independencia e imparcialidad. Contra sus decisiones no cabe recurso de apelación. Sus facultades al parecer se limitan a la sala del juicio y no se extienden al control o supervisión de la conducta de las fuerzas de seguridad o los procedimientos de la instrucción.

12. El Sr. Nabil Al-Marabh, nacional sirio de 39 años nacido en Kuwait, fue expulsado a la República Árabe Siria por las autoridades estadounidenses en mayo de 2004. Inicialmente fue detenido y encarcelado como testigo material tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington y posteriormente fue expulsado en cuanto extranjero en situación ilegal. Se afirma que quedó detenido en Siria pero que de hecho estuvo "desaparecido" desde fines de mayo de 2004 hasta agosto de 2005, después de que se presentó al servicio militar. Al parecer fue detenido por dos funcionarios del servicio de inteligencia sirio en la unidad médica del centro del servicio militar en Damasco y no se supo nada más de él durante más de un año.

13. La fuente también menciona que a los familiares que trataron de averiguar su paradero se les dijo que no molestaran. Más tarde, fue autorizado a recibir visitas mensuales de su familia. Supuestamente será juzgado ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, pero no se sabe por cuáles cargos. Según se informa, que en la actualidad está recluido en la cárcel de 'Adra, fuera de Damasco, y habría sido sometido a tortura y malos tratos.

14. El Sr. Muhammad Fa'iq Mustafa, nacional de Bulgaria y de la República Árabe Siria de cerca de 42 años, está detenido sin cargos desde el 22 de noviembre de 2002, cuando fue expulsado de Bulgaria, donde residía desde 1981, primero estudiando y después ejerciendo la medicina. Su pasaporte búlgaro le fue confiscado, según parece sin explicaciones. Está recluido actualmente en la cárcel de Sednaya, en las afueras de Damasco. Se denuncia que fue sometido a torturas y malos tratos durante el período inicial de los tres años de detención sin cargos. Podría ser juzgado por un tribunal militar de campaña, que no permite la representación letrada

de los acusados. Se denuncia que los juicios ante el Tribunal Militar de Campaña no son imparciales. Se cree que fue acusado formalmente y que fue condenado después de tres audiencias ante el Tribunal Militar de Campaña. La fuente supone que ha sido condenado, aunque no se le ha informado de ningún cargo ni ninguna sentencia.

15. La fuente además afirma que las sesiones ante el Tribunal Militar de Campaña son breves y sólo consisten en una o dos audiencias, y casi siempre tienen lugar dentro de una prisión. Supuestamente los acusados son trasladados al lugar de las audiencias en general sólo para declararse culpables o, si no, para responder a los cargos que se les imputan. Se sostiene que en algunos casos los presos políticos han sido juzgados sin tener una audiencia. En otros casos los acusados han sido condenados tras haber asistido a audiencias ante el Tribunal Militar de Campaña sin ser conscientes de que se trataba de audiencias ante un tribunal militar. Otros se han enterado de su condena por mera casualidad, a veces meses o años después del juicio. La fuente afirma asimismo que las confesiones extraídas bajo coacción se utilizan sistemáticamente como prueba ante estos tribunales. Las denuncias de malos tratos o torturas de los acusados casi nunca se investigan.

16. Según la fuente, las personas en cuestión no han sido acusadas formalmente de ningún delito reconocible del derecho penal y no han podido tener juicios equitativos y sin dilaciones. Su detención es por consiguiente arbitraria.

17. En su respuesta el Gobierno facilitó la siguiente información:

a) Con respecto al Sr. Muhammed Osama Sayes, se declara que en 1981 salió de la República Árabe Siria con su familia para reunirse en Jordania con su padre, miembro de un grupo terrorista que ya había huido de Siria en 1980. Según el Gobierno, en 1990 Muhammed Osama Sayes se convirtió él mismo en miembro de un grupo terrorista y fue adiestrado en el uso de armas ligeras. En 2000 abandonó Jordania y se trasladó al Reino Unido, país donde al llegar pidió asilo político por la supuesta razón de que como miembro de un grupo terrorista podía imponérsele la pena de muerte si era expulsado a Siria. En 2005 las autoridades del Reino Unido rechazaron su solicitud de asilo político y lo expulsaron a la República Árabe Siria vía Ámsterdam. El 5 de mayo de 2005 fue detenido en el aeropuerto de Damasco, después de que las autoridades de los Países Bajos también rechazaran su solicitud de asilo político. El Gobierno afirmó que la investigación de este caso se hallaba concluida y que el acusado sería juzgado ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado.

b) Con respecto al Sr. Ahmet Muhammad Ibrahim, el Gobierno señaló que había huido de la República Árabe Siria el 14 de agosto de 2002 tras haberse evadido del ejército y penetrado ilegalmente en Turquía; fue detenido por las autoridades turcas y encarcelado bajo la acusación de apoyar al Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Permaneció encarcelado hasta el 25 de marzo de 2005; el 6 de junio fue transferido a las autoridades de inmigración de Siria, que lo mantienen detenido por haber huido del país.

c) En cuanto al Sr. 'Abd al-Rahman al-Musa, el Gobierno indicó que desde 1980 es miembro de la Hermandad Musulmana, organización proscrita en la República Árabe Siria. De las investigaciones practicadas en su caso resulta que daba alojamiento a subversivos en su domicilio en Hama y que fue adiestrado en los campamentos de la Hermandad en el Iraq para manipular diferentes categorías de armas. Desde Jordania viajó a los Estados Unidos, donde

permaneció hasta que las autoridades de ese país lo expulsaron a la República Árabe Siria el 19 de enero de 2005. Entonces fue detenido y llevado ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado.

d) En relación con el Sr. Nabil al-Marabh, en su respuesta el Gobierno señala que falsificó pasaportes y utilizó documentos falsos y un sello falso con el nombre de la Embajada de Siria en Washington. Añade que también cometió actos perjudiciales para las relaciones de Siria con otro Estado y difundió informaciones falsas con miras a empañar la reputación del Estado, y que por esa razón se halla actualmente detenido.

e) Con respecto al Dr. Muhammad Fa'iq Mustafa, el Gobierno confirmó que había regresado a la República Árabe Siria el 22 de noviembre de 2002 tras ser expulsado por las autoridades de Bulgaria. Durante el interrogatorio a que fue sometido se determinó que era miembro de la Hermandad Musulmana, organización proscrita en Siria. El Gobierno añade que fue juzgado por un tribunal militar y condenado a 12 años de trabajos forzados en virtud de la sentencia N° 1 de 25 de enero de 2004.

18. En sus comentarios a la respuesta del Gobierno la fuente reitera sus alegaciones y facilita los siguientes nuevos datos.

19. Según la fuente, desde que fue expulsado de los Estados Unidos el 19 de enero de 2005 'Abd al-Rahman al-Musa está detenido sin cargos, incomunicado y sin poder ver a un abogado. El 5 de noviembre de 2005 se presentó su causa ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, pero los cargos que se le imputaban eran poco claros. En lo que se refiere a Nabil al-Marabh, la fuente añade a las anteriores alegaciones que no le consta que éste haya falsificado un pasaporte y que sólo supo este particular por la comunicación del Gobierno; tampoco le consta que se le hayan imputado cargos formalmente. La fuente afirma que Nabil al-Marabh compareció ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado en octubre de 2005 bajo la acusación de "subversión", sin tener abogado.

20. Con respecto a Muhammed Osama Sayes, la fuente alega que éste compareció ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado el 4 de diciembre de 2005 y una vez más el 15 de enero de 2006. Sin embargo, no está en condiciones de averiguar si tuvo representación letrada, a lo que añade que, según informes, está acusado de pertenecer a la Hermandad Musulmana, difundir falsa información contra el Estado (al parecer, por el hecho de solicitar asilo en el extranjero) y poseer un pasaporte falso. La vista de su causa inicialmente se aplazó hasta el 12 de marzo y supuestamente la próxima sesión tendrá lugar el 7 de mayo de 2006. La fuente reitera que tras su expulsión, Muhammed Osama Sayes estuvo incomunicado varios meses, pero se informó de que en enero de 2006 había recibido al menos una visita de familiares.

21. La fuente también dice que Muhammad Fa'iq Mustafa fue excarcelado de la prisión de Sydnaya el 3 de noviembre de 2005, al ser uno de los 190 presos políticos puestos en libertad en virtud de una amnistía presidencial en conmemoración de la fiesta musulmana de Eid al-Fitr. Había estado detenido sin ser acusado, supuestamente había sido torturado y había sido juzgado por el Tribunal Militar de Campaña sin conocer los cargos que se le imputaban ni la sentencia dictada. Según la fuente, 101 de los presos puestos en libertad en virtud de la amnistía presidencial habían sido detenidos por supuestos vínculos con la organización proscrita Hermandad Musulmana.

22. Según la información transmitida por la fuente, Ahmet Muhammad Ibrahim también fue excarcelado de la prisión de Sednaya, el 22 de enero de 2006. Tras su expulsión había sido mantenido en diversos lugares de detención. Fue acusado de pertenecer a un grupo de oposición kurdo y compareció ante el Tribunal Militar de Campaña; sin embargo, el juez al parecer decidió que la débil salud mental del acusado no permitía celebrar el juicio. Según la fuente, Ahmet Muhammad Ibrahim ha perdido mucho peso y sufre depresión. Durante el primer mes de detención fue torturado en la sección Far'Filistin del Servicio de Inteligencia Militar en Damasco.

23. La fuente expresa su preocupación por varios nacionales sirios que se encuentran detenidos sin haber sido acusados ni juzgados tras su expulsión a Siria y añade que las personas devueltas al país a la fuerza corren el riesgo de ser sometidas a torturas y otras formas de malos tratos. En ese sentido manifiesta su preocupación por los tres hombres que fueron devueltos forzosamente a la República Árabe Siria desde el Reino Unido y los Estados Unidos, dos de ellos vía los Países Bajos, y que siguen detenidos. La fuente estima que es probable que sigan existiendo casos similares de regreso forzoso, detención, encarcelamiento y juicio ante tribunales militares y especiales en ausencia sistemática de las debidas garantías procesales. La fuente insiste en que por esta razón es fundamental que el Grupo de Trabajo emita una opinión sobre la legalidad de la detención en todos estos casos, independientemente de la puesta en libertad de Muhammad Fa'iq Mustafa y Ahmet Muhammad Ibrahim.

24. El Grupo de Trabajo se felicita de la excarcelación de dos de las personas mencionadas: el Dr. Muhammad Fa'iq Mustafa, puesto en libertad en virtud de una amnistía presidencial el 3 de noviembre de 2005, tras haber sido condenado por el Tribunal Militar de Campaña a 12 años de prisión, y el Sr. Ahmet Muhammad Ibrahim, puesto en libertad el 22 de enero de 2006 porque, según la fuente, su salud mental no permitía la celebración del juicio. El Sr. Ahmet Muhammad Ibrahim supuestamente fue sometido a torturas durante el período en que estuvo detenido. Los otros tres siguen detenidos a la espera de su juicio ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado.

25. Dada la gravedad de las presuntas violaciones que el Gobierno no consideró en su respuesta, el Grupo de Trabajo decide emitir su opinión sobre la cuestión de si la privación de libertad en los citados casos fue arbitraria, a pesar de la puesta en libertad de las dos personas mencionadas, de conformidad con el apartado a) del párrafo 17 de sus métodos de trabajo.

26. El Grupo de Trabajo observa que las cinco personas en cuestión fueron detenidas en el aeropuerto de Damasco tras ser expulsadas a la República Árabe Siria de diferentes países. En su respuesta el Gobierno facilitó información pormenorizada sobre la situación de esas personas antes de ser detenidas por las autoridades sirias, pero se limitó a señalar lacónicamente los cargos y procedimientos en virtud de los cuales tres de esas personas comparecieron ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado y dos, puestas en libertad posteriormente, ante el Tribunal Militar de Campaña.

27. El Grupo de Trabajo también observa que el Gobierno no facilita información para refutar la gravísima denuncia de no observancia del derecho a un juicio equitativo que formula la fuente, en particular que los cinco hombres fueran mantenidos incomunicados durante un período prolongado, sin tener contacto con su familia ni con un abogado, sin conocer los cargos que se les imputaban y supuestamente sometidos a torturas y malos tratos. La fuente también denunció

la falta de equidad de los procesos celebrados ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado y el Tribunal Militar de Campaña y el hecho de que las confesiones extraídas bajo coacción se utilizan sistemáticamente como material probatorio en esos tribunales. El Grupo de Trabajo señala que el Gobierno tampoco formuló observaciones sobre estas denuncias.

28. El Grupo de Trabajo ya ha expresado su seria preocupación por el incumplimiento por parte de estos tribunales de las normas internacionales sobre el derecho a un juicio imparcial (Opinión N° 21/2000). Por ejemplo, los abogados no tienen acceso a sus clientes antes del juicio, los procesos se inician antes de que los representantes letrados puedan estudiar los expedientes y con frecuencia se deniega a los abogados el derecho a hablar en nombre de sus clientes. Los abogados necesitan tener autorización escrita del presidente del tribunal para poder ver a sus clientes en la cárcel. Además, las personas condenadas por el Tribunal Supremo de Seguridad de Estado y el Tribunal Militar de Campaña no tienen derecho a recurrir contra su condena. En sus observaciones finales tras el examen del segundo informe periódico presentado por la República Árabe Siria en virtud del artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPR/CO/71/SYR), el Comité de Derechos Humanos declara que los procesos que tramita el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado son incompatibles con las disposiciones de los párrafos 1, 3 y 5 del artículo 14 del Pacto. Así, la gravedad de la violación del derecho a un juicio equitativo es tal que confiere carácter arbitrario a la privación de libertad de las cinco personas mencionadas.

29. Dadas las circunstancias, el Grupo de Trabajo quisiera destacar que los países que devuelven a la fuerza a personas que corren peligro de ser sometidas a tortura u otros malos tratos y/o de ser juzgadas sin que se respeten las debidas garantías procesales incumplen sus obligaciones dimanantes del derecho internacional, en particular la Convención Internacional contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

30. Teniendo en cuenta cuanto antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

a) La privación de libertad de Ahmet Muhammad Ibrahim desde el 25 de marzo de 2005 hasta su excarcelación el 3 de noviembre de 2005 y de Muhammad Fa'iq Mustafa, desde el 22 de noviembre de 2002 hasta su excarcelación el 22 de enero de 2006, fue arbitraria, ya que conculcó los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en que la República Árabe Siria es Parte y corresponde a la categoría III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

b) La privación de libertad de Muhammed Osama Sayes, Nabil al-Marabh y 'Abd al-Rahman al-Musa, que siguen encarcelados, es arbitraria, ya que quebranta los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en que la República Árabe Siria es Parte, y corresponde a la categoría III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

31. Habiendo emitido esta opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de las tres personas que siguen privadas de su libertad y ajustarla a lo dispuesto en las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 12 de mayo de 2006.

OPINIÓN N° 17/2006 (LÍBANO)

Comunicación dirigida al Gobierno el 3 de mayo de 2005

Relativa al Sr. Nehmet Naïm El Haj

El Estado es Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su reconocimiento al Gobierno por la información oportunamente presentada.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 38/2005.)
4. Habida cuenta de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. La respuesta del Gobierno se transmitió a la fuente, la cual formuló observaciones. El Grupo de Trabajo estima estar en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y circunstancias de los casos en cuestión, teniendo en cuenta las alegaciones formuladas y la respuesta proporcionada por el Gobierno al respecto.
5. Según la información recibida, el Sr. Nehmeh Naïm El Haj, nacido en 1963, de nacionalidad libanesa, decorador de interiores, domiciliado en el barrio Al Basatine de Ain Saadeh (Líbano) y encarcelado actualmente en la prisión central de Roumié (Líbano), fue aprehendido el 25 de noviembre de 1998 en la frontera libanosiria por los servicios de inteligencia sirios sin la correspondiente orden de detención. Éstos lo mantuvieron detenido en secreto un mes en un centro de interrogatorio sirio ilegal situado en Anjar, en la región de la Bekaa (Líbano). Durante ese período su familia no fue informada ni de su detención ni del lugar donde se encontraba; el Sr. El Haj tampoco pudo beneficiarse de la asistencia de un abogado. Según la información recibida, el Sr. El Haj fue sometido a torturas durante los interrogatorios practicado por los servicios de inteligencia sirios. Un mes después de su detención fue entregado a las autoridades libanesas en Zahleh, trasladado a Jounieh y finalmente encarcelado en la prisión de Roumié, donde se encuentra desde entonces.
6. El Sr. El Haj fue acusado del homicidio de dos personas en el Líbano y no fue juzgado sino hasta julio de 2004. Las autoridades libanesas no lo interrogaron sobre los homicidios que se le imputaban. El 1° de julio de 2004 el Sr. El Haj fue condenado a muerte por el Tribunal de Baabda. Según la fuente, su condena se basa únicamente en las investigaciones desarrolladas por los servicios de inteligencia sirios. El Sr. El Haj actualmente se halla a la espera de que se decida el recurso de casación.
7. La fuente menciona que entre el momento de la detención y el proceso del Sr. El Haj transcurrieron cerca de seis años. Además, la condena se basó únicamente en las investigaciones practicadas por los servicios de inteligencia sirios durante el primer mes de detención. La fuente precisa que esos servicios no estaban habilitados para desarrollar la investigación ni recoger pruebas y que durante ese período fue sometido a torturas.
8. La fuente indica asimismo que los familiares de las dos víctimas por cuyo homicidio fue acusado y condenado el Sr. El Haj renunciaron a su denuncia contra éste después de que el

abogado del Sr. El Haj les explicara la situación. Pese al hecho de que las partes civiles renunciaran a la denuncia, el Sr. El Haj fue condenado a muerte.

9. El Gobierno del Líbano indica en su respuesta que, según los documentos y actas oficiales del proceso del Sr. El Haj, éste efectivamente fue aprehendido el 22 de noviembre de 1998 por los servicios de inteligencia sirios en Siria, país al que había huido porque era buscado por las autoridades libanesas por el homicidio de dos trabajadores sirios. Además, el juez de instrucción había librado orden de captura contra él. Fue interrogado por los servicios de inteligencia sirios en el centro de interrogatorios de Anjar sin que se informase a las autoridades libanesas, a las que posteriormente fue entregado en Zahleh, el 25 de noviembre de 1998. El 26 de noviembre de 1998 fue confiado a las autoridades judiciales de Jounieh, que eran competentes *ratione loci* y que, a su vez, lo trasladaron el mismo día a la Fiscalía ante el Tribunal de Casación en Monte Líbano. En la misma fecha fue puesto a disposición del juez de instrucción, quién decidió aplicarle la orden de captura dictada contra él en rebeldía el 18 de noviembre de 1998.

10. El Gobierno informa de que el Sr. El Haj reconoció ante el juez de instrucción, 35 días después de haber cometido los homicidios, que había elaborado un plan para drogar y estrangular a los dos trabajadores sirios y quemar sus cuerpos. Resulta además que el interrogatorio del Sr. El Haj por los servicios de inteligencia sirios sólo duró tres días según todas las actas del sumario. En efecto, fue detenido por las autoridades sirias el 22 de noviembre de 1998 y entregado en la aldea Zahleh el 25 de noviembre de 1998. Como las autoridades sirias lo aprehendieron sin que las autoridades libanesas se lo pidiesen ni participasen en la detención, éstas no pueden confirmar ni refutar las afirmaciones del interesado sobre las torturas que dice haber sufrido. En consecuencia, lo que sucedió antes de que fuese entregado a las autoridades libanesas no concierne al Líbano. Por lo demás, el Tribunal Penal no mencionó en los motivos de su sentencia el acta de la investigación efectuada por los servicios de inteligencia sirios. Cabe señalar también que fue el Sr. El Haj quien decidió huir a Siria a pesar de que sus víctimas fuesen de nacionalidad siria.

11. Además, la investigación preliminar efectuada por las autoridades libanesas no duró más de 48 horas a partir del momento en que el Sr. El Haj fue entregado en Zahleh el 25 de noviembre de 1998, de su traslado a Jounieh y desde ahí a la Fiscalía General ante el Tribunal de Casación en Monte Líbano que, a su vez, lo puso a disposición del juez de instrucción el 26 de noviembre de 1998. Esas 48 horas constituyen el plazo legal previsto en el artículo 48 del Código de Procedimiento Penal. El juez de instrucción tomó declaración al Sr. El Haj el 26 de noviembre de 1998. El juez de instrucción no es un militar que trabaja en un cuartel sino un funcionario civil cuya oficina se encuentra en el Palacio de Justicia. Como el acusado tiene derecho a solicitar la asistencia de un abogado antes de ser oído, el juez de instrucción le propuso esa asistencia, pero él aceptó ser interrogado en ausencia de un abogado y firmó un documento en ese sentido. En ningún caso el Sr. El Haj fue sometido a torturas, malos tratos o presiones psicológicas ante el juez de instrucción. Reconoció claramente el delito que se le imputaba y sus declaraciones concordaron en todos los aspectos con la versión dada por su cómplice, Sami Rebeh, que había hecho su confesión ante el juez de instrucción sin que lo hubieran interrogado las autoridades sirias. El Sr. El Haj reconoció personalmente ante el Tribunal Penal que nunca había sufrido vejaciones en la oficina del juez de instrucción o en los locales de la policía y afirmó que había sido torturado únicamente por la policía siria.

12. El Gobierno indica además que el Sr. El Haj fue juzgado por homicidio voluntario premeditado en virtud de los párrafos 1, 4 y 8 del artículo 549 del Código Penal, delito punible con la pena de muerte. El fallo fue dictado por el Tribunal Penal integrado por tres jueces eminentes conocidos por su alta competencia, su integridad y su experiencia. Los procesos ante este tribunal se desarrollan en público y en presencia de abogados, lo que garantiza a los acusados un procedimiento justo e imparcial. El Gobierno precisa que, en lo que respecta a la afirmación de que las partes querellantes renunciaron a promover el proceso penal contra los acusados, esta medida no tiene efectos en la acción pública y no se aplica sino a los derechos personales, es decir a las acciones por daños y perjuicios. Por lo que se refiere al recurso de apelación interpuesto por el Sr. El Haj, el Tribunal de Casación lo declaró inadmisibile el 11 de abril de 2005 en virtud del artículo 396 del Código de Procedimiento Penal, que dispone que toda condena a la pena de muerte es susceptible de apelación en cuanto al fondo y a la forma, lo que da al Tribunal de Casación la posibilidad de reexaminar la causa. El lugar de detención del Sr. El Haj es una cárcel que se rige por las disposiciones del Decreto N° 14310 de 11 de febrero de 1949 y sus enmiendas relativas a la organización carcelaria. Estas disposiciones fijan las modalidades de aplicación de las leyes y reglamentos que se refieren a los detenidos, definen las obligaciones y atribuciones de los directores penitenciarios, contienen las normas que rigen la administración de los presos en las cárceles y su transferencia ante los tribunales y prevén la presentación de informes periódicos sobre las condiciones de detención a las autoridades competentes.

13. El Gobierno señala que el Tribunal Penal determinó, tras examinar en audiencia pública los elementos de prueba, los indicios y los hechos de la causa, que el Sr. El Haj había cometido un crimen horrible cuyas víctimas eran dos trabajadores inocentes, que fue juzgado por un tribunal penal ordinario independiente en el marco de las normas jurídicas en vigor en el Líbano que se aplican a todos los ciudadanos sin distinción y son acordes a las normas y principios internacionales vigentes en la materia, y que cumple actualmente una pena de prisión en un lugar de detención cuyo régimen se rige por la ley, en condiciones humanas y en el marco de normas razonables de seguridad y buena gestión de los lugares de detención enunciadas en el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.

14. El Gobierno añade que, en lo que respecta a la denuncia de que el Sr. El Haj fue arrestado arbitrariamente y sufrió violaciones de las garantías jurídicas por parte de los servicios de seguridad durante su detención antes del juicio, se trata sólo de afirmaciones tendenciosas de personas sospechosas que no vacilan en proferir acusaciones sin aducir la mínima prueba con miras a empañar la imagen de las autoridades libanesas. El Fiscal General ante el Tribunal de Casación, que es la más alta autoridad del ministerio público, supervisa personalmente todos los servicios de policía judicial y vela por la aplicación de las disposiciones penales a fin de garantizar la protección de los ciudadanos contra toda medida arbitraria o injusticia.

15. La fuente responde a las argumentaciones del Gobierno afirmando que, contrariamente a lo que éste afirma en su respuesta, el Sr. El Haj se encuentra detenido oficialmente en el Líbano desde el 25 de noviembre de 1998, cuando fue entregado a las autoridades libanesas por los servicios de inteligencia sirios. La fuente considera que cuando el Gobierno dice en su respuesta que el Sr. El Haj "fue interrogado por los servicios de inteligencia sirios en el centro de interrogatorio de Anjar sin que se informase a las autoridades libanesas", esto significa que el

Gobierno se basa en las informaciones de los servicios de inteligencia sirios para afirmar que esa detención duró sólo tres días.

16. La fuente señala además que la detención del Sr. El Haj por los servicios de inteligencia sirios fue ilegal, porque el lugar de detención en sí no era un lugar de detención oficial y las personas que lo aprehendieron e interrogaron no estaban habilitadas para esa función, y porque dicha privación de libertad se desarrolló sin que se informase a la justicia libanesa, lo que significa que durante el período en que el Sr. El Haj estuvo detenido en secreto quedó sustraído a la protección de las leyes aplicables.

17. La fuente señala contradicciones en la respuesta del Gobierno del Líbano cuando éste, por un lado, afirma que el Sr. El Haj "fue aprehendido por los servicios de inteligencia sirios en virtud de una orden de captura dictada en rebeldía por el juez de instrucción" y, por otro, declara que "su detención por las autoridades sirias tuvo lugar sin que mediara una solicitud oficial de las autoridades libanesas y sin supervisión por éstas". La fuente estima que la detención se efectuó sin que se respetara el procedimiento previsto por la ley.

18. La fuente precisa que el Gobierno afirma "que no le concierne la detención en poder de los servicios de inteligencia sirios" no obstante esa misma detención fuese avalada por la justicia del Líbano, puesto que ésta aceptó el hecho de que la detención del Sr. El Haj se hubiese practicado en condiciones contrarias al procedimiento previsto por la ley.

19. La fuente concluye observando que la condena del Sr. El Haj se basa en las confesiones presuntamente firmadas bajo tortura en manos de los servicios de inteligencia sirios. El Gobierno del Líbano manifestó que no le era posible confirmar o desmentir las alegaciones sobre torturas infligidas al Sr. El Haj, puesto que el juez de instrucción no incorporó en el sumario el interrogatorio efectuado por los servicios de inteligencia. Ahora bien, la fuente precisa que el abogado del Sr. El Haj, el Sr. Elias Bou Ghosn, indicó que en el sumario figuraba el acta del interrogatorio redactada por los servicios de inteligencia sirios, con fecha 24 de noviembre de 1998. La fuente contradice asimismo la afirmación del Gobierno que indica que el Sr. El Haj fue interrogado por un juez civil en una cárcel civil y que aceptó ser interrogado sin la presencia de un abogado y firmó un acta en ese sentido, mientras que el Sr. El Haj se queja de haber sufrido torturas durante un mes antes de ser entregado a las autoridades libanesas, de haber sido puesto inmediatamente a disposición del juez de instrucción libanés y de sólo haber firmado documentos sin haberlos leído, bajo la presión psicológica de ese juez.

20. El Grupo de Trabajo observa que el Gobierno del Líbano no ha desmentido ni confirmado que el Sr. El Haj fuera aprehendido en la frontera libanosiria, que estuviera detenido y sometido a torturas durante un mes en un centro de interrogatorio y que su confesión se obtuviera bajo tortura. El Gobierno reconoce que el interrogatorio del Sr. El Haj por el juez de instrucción se desarrolló sin la asistencia de un abogado, que el juez de instrucción al parecer mencionó en acta que le propuso al Sr. El Haj que solicitara la asistencia de un abogado y que éste aceptó responder sin dicha asistencia.

21. El Grupo de Trabajo considera que en el caso de acusaciones que conllevan la pena de muerte, la presencia de un abogado no es sólo un derecho al que el acusado puede renunciar, sino una exigencia que se impone al interés de la justicia. El Grupo de Trabajo recuerda que el apartado d) del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en que el

Líbano es Parte, dispone que toda persona acusada de un delito tiene derecho a ser asistida por un defensor de su elección, a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo.

22. Habida cuenta de las circunstancias del caso en cuestión, el Grupo de Trabajo estima que la violación del apartado d) del artículo 14 del Pacto reviste tal gravedad que confiere carácter arbitrario a la detención y condena del Sr. El Haj.

23. A la luz de cuanto antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de libertad del Sr. Naïm El Haj es arbitraria porque quebranta las disposiciones del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a la categoría III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

24. Habiendo emitido esta opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Naïm El Haj, conforme a las normas y principios enunciados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dadas las circunstancias particulares de este caso, la solución más adecuada sería obtener que el Sr. Naïm El Haj sea eximido de la pena capital.

25. El Grupo de Trabajo considera que tan generosa solución sería particularmente bien acogida y ampliamente apreciada por la comunidad internacional.

Aprobada el 12 de mayo de 2006.

OPINIÓN N° 18/2006 (JAMAHIRIYA ÁRABE LIBIA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 30 de septiembre de 2005

Relativa a los Sres. Fardj Al Marchaï, Salah Eddine al-Aoudjili, Khaled Chebli, Idris al-Maqsabi, Djamel Aquila Abdullah al-Abdli, Rejeb Salem al-Raqai y Assaad Mohamed Salem Assahar

El Estado ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno de la Jamahiriya Árabe Libia no haya respondido en el plazo de 90 días.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N°38/2005).
4. A la luz de las alegaciones formuladas, al Grupo de Trabajo le habría agradado tener la cooperación del Gobierno. Sin haber recibido información alguna de éste, el Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y las circunstancias de los casos, en especial debido a que el Gobierno no ha impugnado los hechos y las alegaciones contenidos en la comunicación.
5. Según la información recibida, Fardj al-Marchaï, Salah Eddine al-Aoudjili, Khaled Chebli, Idris al-Maqsabi, Djamel Aquila Abdullah al-Abdli, Rejeb Salem al-Raqai y Assaad Mohamed Salem Assahar fueron detenidos el 6 de octubre de 2004, junto con otros empleados de la Arab Gulf Petroleum Corporation. Se alega que estas personas fueron sometidas a brutalidad policial durante su detención por agentes vestidos de paisano que no presentaron un mandato de arresto ni explicaron los motivos o causas de su arresto.
6. Estas personas fueron retenidas en la sede de las fuerzas de Seguridad Interna en Benghazi antes de ser trasladadas a Trípoli donde fueron internadas en régimen de incomunicación por estas fuerzas más de un mes. También se denuncia que durante su detención en aislamiento todas las personas citadas fueron objeto de actos de tortura y malos tratos. Luego fueron trasladadas a la prisión de Ain Zara en Trípoli, donde están encarceladas.
7. De acuerdo con otras personas arrestadas al mismo tiempo y puestas en libertad más adelante, las siete personas mencionadas fueron arrestadas y encarceladas porque se habrían comunicado por Internet con personas en otros países. También se alega que desde su arresto estas personas no han podido tener acceso a un abogado ni ver a sus parientes o su familia.
8. Según la fuente, la detención de estas personas constituye violación del derecho interno, principalmente de los artículos 26, 30, 33, 37, 115, 122, 123, 124 y 175 del Código de Procedimiento Penal, así como del artículo 53 de la Ley N° 47 de 1975. También constituye violación del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que la Jamahiriya Árabe Libia ha ratificado, y del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, aprobado por la Asamblea General en su resolución 43/173 de 9 de diciembre de 1988.

9. De conformidad con sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo transmitió estas alegaciones al Gobierno el 30 de septiembre de 2005 y nuevamente el 4 de abril de 2006, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta.

10. A la luz de la información proporcionada por la fuente que el Gobierno no ha puesto en entredicho, el Grupo de Trabajo emite la opinión siguiente:

La privación de libertad de Fardj al-Marchaï, Salah Eddine al-Aoudjili, Khaled Chebli, Idris al-Maqsabi, Djamel Aquila Abdullah al-Abdli, Rejeb Salem al-Raqāï y Assaad Mohamed Salem Assahar es arbitraria porque han estado recluidos más de un año sin que se les comunique cargo alguno, sin comparecer ante un tribunal competente y sin haber podido refutar la legitimidad de su detención. Como no se indicó ningún fundamento jurídico para su detención, su privación de libertad corresponde a la categoría I de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

11. En consonancia con la opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de conformidad con las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 12 de mayo de 2006.

OPINIÓN N° 19/2006 (REPÚBLICA ISLÁMICA DEL IRÁN)

Comunicación dirigida al Gobierno el 9 de febrero de 2006

Relativa al Sr. Arash Sigarchi

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su reconocimiento al Gobierno de la República Islámica del Irán por haber enviado la información solicitada.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 38/2005).
4. El Grupo de Trabajo celebra la cooperación del Gobierno, que le presentó información sobre los hechos relativos a las alegaciones de la fuente. La respuesta del Gobierno fue puesta en conocimiento de la fuente.
5. El Sr. Arash Sigarchi es ciudadano de la República Islámica del Irán, nació en 1978 y ejerce la profesión de periodista. Es el antiguo jefe de redacción del diario *Gilan Emroz* y, a partir de 2002, el autor de varios *blog*. En sus *blog*, denunció la presión de las autoridades sobre los periodistas en línea y los autores de *blog* detenidos en el año 2004 como represalia por su participación en publicaciones reformistas.
6. El 9 de junio de 2005, el Tribunal de Apelación en Rashat condenó a Arash Sigarchi a tres años de prisión por ser culpable de "insultos al Líder Supremo" y "propaganda contra el régimen", delitos sancionables con arreglo a los artículos 500 y 514 del Código Penal.
7. Arash Sigarchi no se enteró de este fallo hasta el 22 de enero de 2006. El 26 de enero de 2006, fue al Tribunal de Apelación en Rashat para pedir una copia del fallo a fin de interponer recurso ante el Tribunal Supremo. En el tribunal de apelación, sin embargo, fue arrestado y desde entonces está recluso en la prisión central de Rashat.
8. Según el Gobierno, el Sr. Arash Sigarchi ha sido acusado de "perturbar el orden público e incitar a disturbios", "difundir información falsa en los medios locales", "blasfemia contra el Fundador de la República Islámica del Irán y el Líder Supremo" y "espionaje". Más tarde fue condenado a 14 años de prisión. Interpuso recurso y fue puesto en libertad bajo fianza el 18 de marzo de 2004 hasta que el tribunal de apelación examinara la causa. Este tribunal revisó la causa y conmutó la sentencia a tres años de prisión. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia y él está cumpliendo su condena. Hasta el momento, ha obtenido licencia para salir de la cárcel muchas veces.
9. El Gobierno no puso en duda la alegación de que el Sr. Sigarchi, como periodista y autor de varios *blog*, fue procesado por defender a otros periodistas y autores de *blog* detenidos en 2004 por publicar sus propias opiniones. El Gobierno tampoco refutó la alegación del Sr. Sigarchi de que la detención de los periodistas y autores de *blog* fue una medida de represalia por su participación en actividades reformistas a fin de intimidarlos y disuadir a los periodistas de publicar críticas al Gobierno. Además, el Gobierno no explicó de qué modo las actividades

del Sr. Sigarchi podían haber constituido espionaje, blasfemia contra el fundador de la República Islámica del Irán o difusión de información falsa. En ausencia de todo argumento contundente de la necesidad de su condena y detención en función de los derechos y la reputación de terceros, o para la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas, el Grupo de Trabajo sólo puede dictaminar que fue sancionado por la expresión de su opinión.

10. A la luz de lo precedente, el Grupo de Trabajo emite la opinión siguiente:

La privación de libertad del Sr. Arash Sigarchi es arbitraria por ser contraria al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y corresponde a la categoría II de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

11. En consonancia con la opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Sigarchi.

Aprobada el 30 de agosto de 2006.

OPINIÓN N° 20/2006 (GABÓN)

Comunicación dirigida al Gobierno el 18 de enero de 2006

Relativa al Sr. Robert Sobek

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo tomó nota con reconocimiento de la información transmitida por el Gobierno sobre el caso presentado.
3. El Grupo de Trabajo tomó nota asimismo de que el Gobierno ha informado al Grupo de que la persona mencionada ya no está detenida. Este hecho fue confirmado igualmente por la fuente de la comunicación.
4. Por consiguiente y sin pronunciarse sobre la cuestión de si la detención del Sr. Robert Sobek fue arbitraria o no, el Grupo de Trabajo decide, de conformidad con el párrafo 17 a) de sus métodos de trabajo, archivar el caso.

Aprobada el 31 de agosto de 2006.

OPINIÓN N° 21/2006 (REPÚBLICA ÁRABE SIRIA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 22 de septiembre de 2005

Relativa a los Sres. Muhamad Ra'dun y Ali al-Abdullah

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo toma nota con reconocimiento de la información transmitida por el Gobierno de la República Árabe Siria respecto a los casos en cuestión.
3. El Grupo de Trabajo también toma nota de que el Gobierno ha informado al Grupo de que las personas citadas fueron puestas en libertad. Esta información fue confirmada por la fuente de la comunicación.
4. Habiendo examinado la información disponible y sin pronunciarse sobre la cuestión de si la detención fue arbitraria o no, el Grupo de Trabajo decide, de conformidad con el párrafo 17 a) de sus métodos de trabajo, archivar el caso de los Sres. Muhamad Ra'dun y Ali al-Abdullah.

Aprobada el 31 de agosto de 2006.

OPINIÓN N° 22/2006 (CAMERÚN)

Comunicación dirigida al Gobierno el 23 de enero de 2006

Relativa a los Sres. François Ayissi, Emeran Eric Zanga, Didier Ndebi, Pascal Atangana Obama, Alim Mongoche, Marc Lambert Lamba, Christian Angoula, Blaise Yankeu Yankam Tchatchoua, Stéphane Serge Noubaga, Balla Adamou Yerima, Raymond Mbassi Tsimi

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo expresó su reconocimiento al Gobierno por haber transmitido la información solicitada oportunamente.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 38/2005)
4. Habida cuenta de las alegaciones formuladas, el Grupo de Trabajo celebra la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta del Gobierno a la fuente que le ha comunicado sus observaciones. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de pronunciarse sobre los hechos y las circunstancias de los casos en cuestión, habida cuenta de las alegaciones formuladas y de la respuesta del Gobierno al respecto, así como de las observaciones de la fuente.
5. La comunicación se refiere a las 11 personas siguientes:
 - a) El Sr. François Ayissi, nacido en 1976, de nacionalidad camerunesa, hotelero;
 - b) El Sr. Emeran Eric Zanga, nacido en 1986, de nacionalidad camerunesa, hotelero;
 - c) El Sr. Didier Ndebi, nacido en 1986, de nacionalidad camerunesa, estudiante;
 - d) El Sr. Pascal Atangana Obama, nacido en 1956, de nacionalidad camerunesa, sastre;
 - e) El Sr. Alim Mongoche, nacido en 1976, de nacionalidad camerunesa, sastre;
 - f) El Sr. Marc Lambert Lamba, nacido en 1974, de nacionalidad camerunesa, informático;
 - g) El Sr. Christian Angoula, nacido en 1988, de nacionalidad camerunesa, bailarín;
 - h) El Sr. Blaise Yankeu Yankam Tchatchoua, nacido en 1980, de nacionalidad camerunesa, estudiante;
 - i) El Sr. Stéphane Serge Noubaga, nacido en 1983, de nacionalidad camerunesa, hotelero;

- j) El Sr. Balla Adamou Yerima, de nacionalidad camerunesa, sastre;
- k) El Sr. Raymond Mbassi Tsimi, nacido en 1970, de nacionalidad camerunesa.

6. Según la fuente, las 11 personas citadas fueron arrestadas el 1º de junio de 2005 por gendarmes de la Brigada de Nlongka, sin mandato, en el club nocturno Elise en Yaundé. Luego fueron llevadas a la Brigada de Nlongka, donde fueron retenidas hasta el 13 de junio de 2005, fecha de su traslado a la prisión central Kondngui en Yaundé, donde están recluidas.

7. La fuente precisa que las 11 personas citadas fueron arrestadas junto con otras 6 personas (17 en total) en un bar conocido por su clientela homosexual. La detención fue comunicada en la prensa escrita y por las cadenas de televisión locales, que difundieron tomas de la detención. La fuente añade que algunas de las personas detenidas han sido puestas en libertad, pero que las 11 citadas todavía están recluidas.

8. Estas 11 personas fueron acusadas en virtud del artículo 347 *bis* de la Ordenanza Nº 72-16 del Código de 28 de septiembre de 1972 que dispone una pena de seis meses a cinco años de prisión y una multa de 20.000 a 200.000 francos CFA para quien sea culpable de tener relaciones sexuales con alguien del mismo sexo. En septiembre de 2005, su abogado consiguió que fuera trasladado al pabellón de menores el único menor (de 17 años) que había estado recluido junto con los adultos. En el mes de octubre de 2005, su abogado pidió que los 11 prevenidos fueran puestos en libertad, pero su solicitud fue rechazada.

9. La primera vista fue señalada para el 17 de marzo de 2006. Unos días antes del inicio del proceso, el Sr. Emeran Eric Zanga y el Sr. Didier Ndebi fueron liberados, al parecer por falta de pruebas. La fuente añade que al principio de la vista, el ministerio público no estaba bien preparado y no citó testigos. En lugar de desestimar el caso, el juez dispuso que se celebrara otra vista el 21 de abril de 2006.

10. El día de la vista, el ministerio público no aportó ni testigos ni otras pruebas de cargo contra las nueve personas restantes. Por tanto, el juez resolvió que no eran culpables de los hechos imputados.

11. No obstante, en lugar de ser liberadas, fueron devueltas al centro de detención en que permanecieron privadas de libertad. El ministerio público se negó a ordenar su libertad y declaró que los nueve debían ser juzgados otra vez. El 10 de mayo de 2006, la fuente informó al secretario del Grupo de Trabajo de que los Sres. Ndebi y Zanga ya no estaban detenidos.

12. La fuente informó también que el 26 de junio de 2006 todas las personas que estaban recluidas fueron puestas en libertad. Siete habían sido condenadas, pero salieron libres porque habían estado retenidas más tiempo del que debían cumplir.

13. La fuente informó asimismo que, desafortunadamente, el Sr. Alim Mongoche falleció en el hospital una semana después de su excarcelación. La fuente afirma que su defunción guarda una relación directa con las terribles condiciones de detención en que estuvo más de un año.

14. En su respuesta, el Gobierno declaró que las 11 personas fueron puestas en prisión preventiva en el marco del procesamiento iniciado contra ellas por el Tribunal de Primera Instancia de Yaundé - Centro administrativo. Según el Gobierno, la detención se debió a las averiguaciones efectuadas por la gendarmería que revelaron la existencia de indicios graves contra estas personas. El Gobierno también declaró que el delito de homosexualidad está tipificado en la legislación nacional, en el artículo 347 *bis* del Código Penal.

15. De acuerdo con el Gobierno, se hizo comparecer a los inculcados ante el tribunal correspondiente que el 21 de abril de 2006 se declaró incompetente con arreglo a la legislación pertinente. Así, según el Gobierno, el tribunal adoptó esa decisión en virtud de la Ley N° 90/45 de 19 de diciembre de 1990 que dispone que, en el caso de determinados delitos, como el que está previsto en el artículo 347 *bis* del Código Penal, los inculcados deben ser llevados ante la jurisdicción competente para entender en delitos flagrantes. Fue por este motivo que estas personas fueron puestas nuevamente en prisión preventiva el 24 de abril de 2006 antes de comparecer ante el tribunal el 8 de mayo de 2006, después del interrogatorio por delito flagrante.

16. El Gobierno afirmó que la penalización de la homosexualidad no está reñida con el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos ni con el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ya que no se trata de denegar los beneficios de un derecho o de prestaciones a estas personas a causa de su presunta orientación sexual. Se trata de procesamiento por prácticas contrarias a la legislación en vigor y a lo que la sociedad camerunesa considera buenas costumbres.

17. Por último, el Gobierno declaró que, incluso en el caso de que la incriminación no estuviese acorde con el artículo 26 del Pacto, estaría fundada en el párrafo 2 del artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que dispone que el Estado podrá restringir un derecho o una libertad "con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática".

18. Al comentar la respuesta del Gobierno, la fuente invoca la jurisprudencia que el Grupo de Trabajo ha establecido en opiniones precedentes. En efecto, el Grupo de Trabajo ha establecido que la referencia al "sexo" en el párrafo 1 del artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en el párrafo 1 del artículo 2 y en el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, podría considerarse que abarca "la orientación sexual". La fuente se refiere asimismo a los dictámenes del Comité de Derechos Humanos, en particular en el caso *Nicholas Toonen c. Australia* (CCPR/C/50/D/488/1992), en que el Comité decidió que calificar las prácticas homosexuales de infracción penal es incompatible con el artículo 17 del Pacto Internacional. La fuente añade que es inadmisibles la argumentación del Gobierno en el sentido de que los asuntos que atañen a la moral son de la competencia exclusiva de cada Estado. De este modo, se abrirá la puerta a la sustracción al control internacional de un número potencialmente grande de leyes internas que pueden constituir injerencia en la vida privada. Por todas estas razones, la fuente reafirma que la privación de libertad de las 11 personas mencionadas fue arbitraria.

19. Desde que el Comité de Derechos Humanos aprobó su dictamen -en el caso *Toonen c. Australia*- y el Grupo de Trabajo aprobó su Opinión N° 7/2002 (Egipto), el Grupo respeta los lineamientos consignados en ellos. Esto significa que la existencia de leyes que

penalizan los actos homosexuales privados entre adultos, así como la aplicación de sanciones penales a las personas acusadas de esos actos, viola los derechos a la protección de la vida privada y a la no discriminación dispuestos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que la penalización de la homosexualidad en la legislación penal del Camerún no es compatible con los artículos 17 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que el país ha ratificado.

20. El Grupo de Trabajo dictamina que la privación de libertad de las 11 personas mencionadas fue arbitraria, independientemente del hecho de que posteriormente salieron libres.

21. Conforme al párrafo 17 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo estima que el presente caso merece que se pronuncie emitiendo una opinión, aun cuando las personas han sido liberadas. El Grupo resolvió pronunciarse para reafirmar su jurisprudencia sobre una cuestión importante, pero también debido a que una de las personas concernidas por la opinión ha fallecido y que al parecer su muerte se atribuye a las condiciones de su detención arbitraria.

22. A la luz de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emitió la opinión siguiente:

La privación de libertad de François Ayissi, Pascal Atangana Obama, Alim Mongoche, Marc Lambert Lamba, Christian Angoula, Blaise Yankeu Yankam Tchatchoua, Stéphane Serge Noubaga, Balla Adamou Yerima y Raymond Mbassi Tsimi fue arbitraria puesto que contraviene las disposiciones de los artículos 17 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a la categoría II de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

23. El Grupo de Trabajo, habiendo emitido esta opinión, pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación estudiando la posibilidad de modificar la legislación a fin de adaptarla a la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como a las otras normas internacionales pertinentes aceptadas por el Estado en cuestión.

Aprobada el 31 de agosto de 2006.

OPINIÓN N° 23/2006 (QATAR)

(Esta opinión fue sustituida por la Opinión N°32/2006 (Qatar).)

OPINIÓN N° 24/2006 (COLOMBIA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 22 de marzo de 2006

Relativa al Sr. Jhon Jaime Romaña Denis

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo reconoce con aprecio la información transmitida por el Gobierno respecto al caso en cuestión.
3. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta del Gobierno a la fuente de la comunicación, la cual informó al Grupo de Trabajo de que esta persona había sido liberada por vencimiento de plazos.
4. Habiendo examinado toda la información disponible, y sin pronunciarse sobre el carácter arbitrario o no de la detención de esta persona, el Grupo de Trabajo decide, de conformidad con el apartado a) del artículo 17 de sus métodos de trabajo, archivar el caso del Sr. Jhon Jaime Romaña Denis.

Aprobada el 1° de septiembre de 2006.

OPINIÓN N° 25/2006 (RUMANIA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 18 de abril de 2006

Relativa al Sr. Hayssam Omar

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo toma nota con reconocimiento de que el Gobierno interesado le informó de que el Sr. Hayssam Omar ya no está detenido. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta del Gobierno a la fuente, que no refutó la información del Gobierno.
4. Tras el examen de toda la información a su disposición y sin prejuzgar el carácter arbitrario o no de la detención, el Grupo de Trabajo decide, conforme al párrafo 17 a) de sus métodos de trabajo, archivar el caso del Sr. Hayssam Omar.

Aprobada el 31 de agosto de 2006.

OPINIÓN N° 26/2006 (REPÚBLICA ISLÁMICA DEL IRÁN)

Comunicación dirigida al Gobierno el 18 de octubre de 2005

Relativa al Sr. Abdolfattah Soltani

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su reconocimiento al Gobierno de la República Islámica del Irán por haber enviado la información solicitada.
3. (Idéntico al párrafo 3 de la Opinión N° 38/2005.)
4. A la luz de las alegaciones formuladas, el Grupo de Trabajo celebra la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y las circunstancias de los casos, en el contexto de las alegaciones formuladas y la respuesta del Gobierno al respecto.
5. La fuente comunica que el Sr. Abdolfattah Soltani es ciudadano de la República Islámica del Irán y vive en Teherán. Es abogado, miembro de la junta directiva del Colegio de Abogados y cofundador del Centro para Defender los Derechos Humanos, una ONG sin autorización oficial para realizar sus actividades. Antes de su detención, el Sr. Soltani pertenecía al equipo jurídico que defiende al Sr. Akbar Ganji y al que representa a la Sra. Zahra Kazemi, la periodista iraní-canadiense que murió en la prisión de Evin en Teherán en julio de 2003.
6. Se comunicó que el 27 de julio de 2005, el Fiscal General dictó una orden de detener al Sr. Soltani. Cuando las autoridades se presentaron en su domicilio para arrestarlo, él no estaba. Se procedió a registrar la casa y se incautaron documentos y archivos informáticos. Al enterarse de que se había dictado orden de detenerlo, él inició una sentada en el edificio del Colegio de Abogados en Teherán. Fue detenido allí el 30 de julio de 2005.
7. La fuente informa que el Sr. Soltani está encarcelado en la prisión de Evin. Desde la fecha de su detención hasta mediados de septiembre de 2005, estuvo en régimen de incomunicación. Se permitió que recibiera la visita de su mujer el 5 de septiembre de 2005, pero en presencia de un guarda de la prisión. El Sr. Soltani tampoco tiene permitido llamar por teléfono. A partir del 29 de septiembre de 2005, no se había permitido que sus abogados se reunieran con él. Los interrogatorios se llevaban a cabo en la prisión en ausencia de letrado.
8. El caso del Sr. Soltani estaría pendiente de examen en la sala cuarta del Tribunal Revolucionario de Teherán. No se sabe si se han formulado cargos, pero al parecer está acusado de divulgar información secreta y reservada de la inteligencia nacional a personas no autorizadas y a individuos vinculados con embajadas de países extranjeros. Estos cargos se deben a sus actividades como defensor de varias personas acusadas de espionaje en relación con el programa nuclear de la República Islámica del Irán.

9. La fuente alega que la detención de Abdolfattah Soltani es arbitraria. Arguye que el Sr. Soltani ha permanecido prácticamente incomunicado desde su detención y se le ha denegado específicamente el derecho de acceso a sus abogados. En consecuencia, se conculca y se conculcará su derecho a preparar su defensa y a una audiencia imparcial por los cargos formulados en su contra.

10. La fuente también sostiene que los cargos contra el Sr. Soltani responden a su participación como abogado en las causas del Sr. Ganji y de la Sra. Kazemi. Precisa que, el último día de las actuaciones en apelación en la causa de la Sra. Kazemi, el Sr. Soltani planteó en la sala del tribunal que se debe tener al Estado por responsable de su muerte, y que la detención y prisión del Sr. Soltani responden a esa afirmación. La fuente considera que confirma estas alegaciones el hecho de que la Sra. Shirin Ebadi, quien también es defensora del Sr. Ganji y de la Sra. Kazemi, fue acusada públicamente el 30 de julio de 2005 de "tener vínculos sospechosos con extranjeros" por el asistente del fiscal de Teherán.

11. En su respuesta, el Gobierno afirma que el Sr. Soltani ha sido acusado de divulgar inteligencia reservada y de ese modo atentar contra [afectar] la seguridad del Estado, y el tribunal le propuso pagar una fianza y se encuentra en libertad bajo fianza.

12. Según información también recibida por el Grupo de Trabajo, el 2 de junio de 2006 el Sr. Soltani fue declarado culpable de divulgar información reservada, revelar secretos de Estado, tener contacto con dos diplomáticos extranjeros, conceder entrevistas a periodistas con respecto a temas que son secreto de Estado y hacer propaganda contra el régimen nacional, y fue condenado a cinco años de prisión y a interdicción de sus derechos civiles y políticos. Ha interpuesto recurso de apelación y espera la decisión en segunda instancia, y está libre bajo fianza.

13. De conformidad con el párrafo 17 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo considera que este es uno de los casos en que se reserva la facultad de emitir una opinión, no obstante la excarcelación del interesado. El Grupo de Trabajo toma en cuenta la relevancia del caso y el hecho de que el Sr. Abdolfattah Soltani ha sido condenado a cinco años de prisión y está en libertad bajo fianza mientras se resuelve su recurso de apelación.

14. El Grupo de Trabajo toma nota de que, en su respuesta, el Gobierno no refutó que, desde su arresto el 30 de julio de 2005 hasta su libertad bajo fianza en marzo de 2006, el Sr. Soltani permaneciera prácticamente incomunicado y que se le ha denegado el derecho de acceso a sus abogados. El Grupo de Trabajo también observa que el Sr. Soltani ha sido detenido y condenado por los cargos de divulgación de información reservada y revelación de secretos de Estado a diplomáticos y periodistas. El Gobierno no dio indicación alguna del carácter de la presunta inteligencia reservada o del secreto de Estado que un abogado y un activista en pro de los derechos humanos pudieran tener con la obligación de no divulgarlos.

15. En ausencia de todo argumento contundente, el Grupo de Trabajo dictamina que la detención del Sr. Soltani se debió exclusivamente a sus actividades políticas o a favor de los derechos humanos, o ambas cosas, constitutivas del ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión garantizada en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en que la República Islámica del Irán es Parte.

16. El Grupo de Trabajo también toma nota de que el Sr. Soltani fue procesado y sentenciado por un tribunal revolucionario. En su informe (E/CN.4/2004/3/Add.2) sobre su visita a la República Islámica del Irán, el Grupo de Trabajo pone en tela de juicio la legitimidad de los tribunales revolucionarios y expresa preocupación porque no cumplan las normas relativas a un proceso imparcial consagradas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en que la República Islámica del Irán es Parte, y destaca que la jurisprudencia de esos tribunales es sumamente restrictiva de la libertad de opinión y de expresión.

17. En base a lo que antecede, el Grupo de Trabajo estima que:

La detención del Sr. Abdolfattah Soltani del 30 de julio de 2005 al 6 de marzo de 2006 es arbitraria y contraviene los artículos 9, 14 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a las categorías II y III de sus métodos de trabajo.

18. En consecuencia, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Soltani de conformidad con los principios consignados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 1º de septiembre de 2006.

OPINIÓN N° 27/2006 (CHINA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 20 de octubre de 2005

Relativa al Sr. Shi Tao

El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su reconocimiento al Gobierno de China por haber enviado la información solicitada.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 38/2005.)
4. A la luz de las alegaciones formuladas, el Grupo de Trabajo celebra la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y las circunstancias de los casos, en el contexto del examen de las alegaciones formuladas y de la respuesta del Gobierno al respecto.
5. La fuente informa de que el Sr. Shi Tao, nacido el 25 de julio de 1968, de nacionalidad china, es periodista y trabaja en el diario *Dangdai Shang Bao* (*Periódico de negocios contemporáneos*), vive en Taiyuan, provincia de Shanxi, y está detenido en la prisión de Chishan, municipio de Yuanjiang, provincia de Hunan.
6. Según la información recibida, el Sr. Shi Tao fue arrestado el 23 de noviembre de 2004 en la calle, cerca de su domicilio en el pequeño distrito de Jun An Li en la ciudad de Taiyuan, provincia de Shanxi, por agentes no identificados de la oficina de seguridad del Estado del municipio de Changsha (provincia de Hunan) sin un mandato de arresto. El mismo día, la policía registró su apartamento sin un mandato y se llevó su computadora personal y material escrito. Su arresto no fue notificado a su familia. El 25 de noviembre de 2004, la oficina de seguridad del Estado del municipio de Changsha expidió una orden de detención y Shi Tao fue internado oficialmente en el Centro de Detención de la Oficina de Seguridad del Estado de Hunan por sospecha de "divulgar secretos de Estado ilegalmente a [agentes] fuera de las fronteras". El 14 de diciembre de 2004, fue arrestado oficialmente por sospecha de cometer el delito mencionado con la aprobación de la procuraduría popular del municipio de Changsha.
7. La fuente informa que el 11 de marzo de 2005 el Tribunal Popular Intermedio del municipio de Changsha, provincia de Hunan, enjuició a Shi Tao en secreto. Se alega que se impidió que su principal abogado defensor asistiera al juicio porque su licencia había sido suspendida por las autoridades gubernamentales por motivos que no venían al caso. El 27 de abril de 2005, el tribunal pronunció su veredicto y condenó a Shi Tao a diez años de cárcel, seguidos de dos años de interdicción de sus derechos civiles por el delito de "revelar secretos de Estado ilegalmente a [agentes] fuera de las fronteras". La fuente afirma que el delito consistía en enviar a publicaciones por Internet en el extranjero artículos en que hablaba de una comunicación interna que las autoridades habían enviado a su periódico, en que se advertía a los periodistas del peligro de inestabilidad social y posibles incidentes con motivo del 15° aniversario de lo sucedido en la plaza de Tiananmen. Durante el primer proceso, los

funcionarios de la seguridad del Estado habrían confirmado que el mensaje era un "secreto sumamente importante". El fiscal insistió en que enviar artículos al extranjero para que aparezcan en Internet era un delito que merecía la pena de prisión. Shi Tao admitió que había enviado los artículos, pero rebatió que contuviesen nada que tuviera carácter de "secreto muy importante" y declaró que no tenía ninguna intención de poner en peligro la seguridad del Estado. El Tribunal Intermedio del municipio de Changsha habría aceptado las pruebas aportadas por la Oficina de Seguridad del Estado, que se valió de los registros de la correspondencia electrónica suministrados por Yahoo, sin dejar que el acusado y sus abogados impugnaran la licitud de esas pruebas y de los métodos utilizados para obtenerlas.

8. La fuente también informa que el 4 de mayo de 2005 Shi Tao interpuso un recurso ante el Tribunal Popular Superior de la provincia de Hunan, en que habría expuesto sus propios argumentos de descargo. Su abogado defensor durante el segundo proceso, Mo Shaoping, expuso sus argumentos a favor de la inocencia de Shi Tao ante el Tribunal Superior de la provincia el 9 de junio de 2005, pero este tribunal le presentó su veredicto, que se considera definitivo conforme al derecho chino, de que desestimaba la apelación y confirmaba el veredicto del tribunal inferior porque había sido dictado en un panel de revisión a puerta cerrada, convocado por el Tribunal Superior el 2 de junio de 2005, del que no se había informado al abogado defensor ni se le había pedido que asistiera. Tampoco se pidió al acusado que se defendiera él mismo ya que estaba presente. El Tribunal Superior de la provincia de Hunan confirmó la condena a diez años de cárcel en virtud de las mismas pruebas. El abogado de Shi Tao durante el segundo proceso argumentó que sus actos de ninguna manera habían puesto en peligro la seguridad del Estado, pero no se le permitió exponer esos argumentos ante el Tribunal Superior.

9. La fuente también informa que del 23 de noviembre de 2004 al 30 de abril de 2005 no se permitió que Shi Tao viera a nadie (ni siquiera sus abogados), salvo su madre una vez y su mujer una vez. Por otro lado, se le obligó a tomar un entrenamiento antes de ser encarcelado en julio y agosto de 2005, durante el cual se le negaron todas las visitas, incluso de su familia y sus abogados. También se rechazaron las solicitudes reiteradas de sus abogados para ver a su cliente. La fuente informa que el 11 de julio de 2005 los abogados presentaron al Tribunal Superior su opinión jurídica sobre el veredicto final dictado por el Tribunal Superior de la provincia de Hunan. El 21 de agosto de 2005, la madre de Shi Tao, en nombre de él, hizo un llamamiento público al máximo tribunal, el Tribunal Supremo Popular, así como al Tribunal Superior de la provincia, para que revisaran el veredicto final y volvieran a procesarlo. Ninguno de los tribunales ha respondido por ahora a la petición de la madre de una revisión judicial.

10. El Gobierno, en su respuesta, afirma que Shi Tao, egresado de la universidad, trabajaba en el *Modern Business Daily* de la provincia de Hunan y estaba encargado del departamento de redacción, y que en abril de 2004 tenía su propio equipo de Internet en la oficina para enviar por correo electrónico a un sitio web fuera del país material que había copiado de documentos oficiales secretos.

11. Declara que el 31 de enero de 2005 la procuraduría de la ciudad de Changsa en la provincia de Hunan inició las actuaciones contra Shi Tao ante el Tribunal Intermedio de la ciudad de Changsa por el delito de transmitir ilegalmente secretos de Estado a personas en el extranjero. Como el material en cuestión contenía secretos de Estado, el 11 de marzo de 2005 el

Tribunal de la ciudad de Changsa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Procedimiento Penal, resolvió examinar el caso a puerta cerrada.

12. Durante las actuaciones, el tribunal resolvió que el sospechoso a sabiendas había proporcionado inteligencia secreta del Estado en su posesión a una organización fuera del país, lo que generó una situación de gravedad extrema, y que su comportamiento constituyó el delito de transmitir ilícitamente secretos de Estado a personas u organismos extranjeros. Con arreglo al Código Penal, el 30 de abril de 2005 el tribunal condenó a Shi Tao a diez años de prisión, privándolo de sus derechos políticos por dos años.

13. El Gobierno sostiene que durante las actuaciones judiciales, conforme a la ley, Shi Tao designó a Tong Wenzhong, miembro del bufete de abogados Tianyi en Shangai, para que lo defendiera durante el proceso, además de llevar él mismo su defensa, y que el tribunal apoyó plenamente sus derechos y los de su defensor. El Gobierno afirma que, al cabo de las actuaciones en primera instancia, Shi Tao no aceptó el veredicto e interpuso recurso porque el delito que cometió no fue especialmente grave, no tuvo consecuencias serias, él se mostró positivo al admitir su culpabilidad y la sentencia era demasiado severa. El Tribunal Superior de la provincia de Hunan dictó un fallo en segunda instancia que desestimaba el recurso de Shi Tao y confirmaba el veredicto original. El Gobierno afirma que durante las actuaciones en segunda instancia Shi Tao fue defendido por los abogados Mo Shaoping y Ding Xikui, de la firma de abogados Mo Shaoping en Beijing. Con relación a la apelación ante el Tribunal Supremo de la madre en nombre de Shi Tao, a raíz de una investigación este tribunal resolvió, de conformidad con las normas de apelación, que la carta del recurso debía ser remitida al Tribunal Superior de la provincia de Hunan que revisó el caso y decidió que los motivos de la apelación eran infundados y, por tanto, no se abrió expediente.

14. La fuente responde que, como el Gobierno no aportó pruebas de que Shi Tao había revelado secretos de Estado por Internet, realmente había sido castigado por difundir a través de Internet artículos en que se critica al Gobierno.

15. La fuente también aduce que la Ley de secretos de Estado y el artículo 111 del Código Penal son el motivo de un defecto peligroso del sistema jurídico que permite a las autoridades servirse de "la revelación de secretos de Estado" o "la difusión en el extranjero de secretos o inteligencia del Estado" para enjuiciar a las personas por ejercer la libertad de palabra/expresión, y que somete a muchos, especialmente los periodistas/escritores, a un riesgo ilegítimo. Afirma que en el presente caso, a pesar de que la persona que hizo la comunicación en cuestión verbalmente afirmó que había pedido que no se divulgara, de ningún modo concedía al asunto el carácter de secreto de Estado, como argumentan los abogados de Shi Tao.

16. Shi Tao fue privado de un juicio justo porque en el proceso original se impidió que el principal abogado defensor lo representara en las vistas y defendiera a su cliente porque las autoridades encontraron excusas que no venían al caso para suspender la licencia del abogado. El Tribunal Superior de Hunan se negó a ofrecer al acusado Shi Tao y a su segundo defensor la oportunidad de formular sus argumentos de descargo en la sala cuando se revisó la causa sin notificar al abogado. El veredicto final fue pronunciado a puerta cerrada. Tras el veredicto final, se impidió que tuviera acceso a un letrado de su elección ya que se le obligó a someterse a un duro entrenamiento antes de ser encarcelado.

17. El 9 de junio, su abogado defensor pidió que se volvieran a examinar las pruebas, sometiéndolas a la evaluación de peritos, y se aplazara el segundo proceso, pero el Tribunal Superior no contestó. En vez de la reapertura del proceso, revisó el asunto un panel en que no figuraba el abogado defensor de Shi Tao porque el tribunal no le había hecho la notificación. Debido a estas deficiencias e impedimentos, el Tribunal Superior de Hunan violó los derechos de Shi Tao a tener todo lo necesario para interponer recurso y a un juicio justo.

18. El Grupo de Trabajo toma nota, como se indica en la contestación del Gobierno, que Shi Tao está acusado de transmitir ilegalmente secretos de Estado a personas u organismos fuera del país. En sus informes anteriores sobre sus visitas a China, el Grupo de Trabajo ha señalado como motivo de preocupación la penalización de los contactos y el intercambio de información "reservada" con particulares, instituciones u organizaciones en el extranjero, de modo que los actos de las personas que ejercen su libertad de opinión bien podrían ser considerados delito penal (E/CN.4/1998/44/Add.2, párr. 46, y E/CN.4/2005/6/Add.4, párr. 23).

19. Si bien el Gobierno no da los detalles pertinentes al carácter de los secretos de Estado comunicados al extranjero, la información recibida que no ha sido refutada consiste en que la acusación de divulgar secretos de Estado se basó en el envío de artículos a publicaciones extranjeras en línea. El Grupo de Trabajo no está convencido de que esas actividades pudiesen provocar una situación de gravedad extrema como ha afirmado el Gobierno.

20. En ausencia de argumentos contundentes, el Grupo de Trabajo dictamina que el Sr. Shi Tao está detenido por el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión que comprende la libertad de buscar, recibir y comunicar información e ideas por todo medio de difusión, incluso por Internet y sin consideración de fronteras, puesto que la difusión, hasta fuera del territorio, está garantizada en virtud del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

21. El Grupo de Trabajo también está preocupado por los hechos, que el Gobierno no ha refutado, consistentes en que: a) se impidió que el abogado escogido por Shi Tao asistiese al proceso o prestara asistencia a su cliente, que fue procesado en secreto, y b) se impusieron otras restricciones del derecho a la defensa. En sus informes anteriores sobre sus visitas a China, el Grupo de Trabajo ha señalado que, cuando el caso se refiere a cargos de poner en peligro secretos de Estado, los derechos de la defensa se restringen todavía más. En virtud del artículo 96, el derecho de los acusados a estar representados por un letrado de su elección a partir de las primeras horas de la detención y el derecho del abogado a reunirse con su cliente o clienta dependen de la autorización previa de las autoridades encargadas de la investigación. En la práctica, esta disposición parece que da lugar a numerosos abusos, ya porque la noción de secreto de Estado no está definida con la suficiente precisión, ya porque se interpreta de forma demasiado amplia (E/CN.4/2005/6/Add.4, párr. 36).

22. Estas consideraciones, junto con otros elementos relativos a la imposibilidad de impugnar las alegaciones formuladas contra Shi Tao, conferirían en conjunto carácter arbitrario a la privación de libertad a que fue sometido.

23. A la luz de lo precedente, el Grupo de Trabajo emite la opinión siguiente:

La detención del Sr. Shi Tao es arbitraria, por ser contraria a los principios y normas dispuestos en los artículos 9, 10 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y corresponde a las categorías II y III de los métodos de trabajo adoptados por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

24. El Grupo de Trabajo, habiendo emitido esta opinión, pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación conforme a las normas y los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y que adopte las medidas necesarias para ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 1º de septiembre de 2006.

OPINIÓN N° 28/2006 (URUGUAY)

Comunicación dirigida al Gobierno el 22 de septiembre de 2005

Relativa a los Sres. Jorge, José y Dante Peirano Basso

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo agradece la información transmitida por el Gobierno con respecto al caso en cuestión.
3. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta del Gobierno a la fuente de la comunicación, la cual informó al Grupo de Trabajo de que había decidido retirar la comunicación presentada sobre el caso y solicitó que no se la siguiese considerando.
4. Habiendo examinado la solicitud formulada por la fuente, el Grupo de Trabajo decidió no considerar el caso de las personas antes mencionadas y decidió archivarlo definitivamente de conformidad con el apartado d) del párrafo 17 de sus métodos de trabajo.

Aprobada el 1° de septiembre de 2006.

OPINIÓN N° 29/2006 (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 8 de diciembre de 2005

Relativa al caso del Sr. Ibn al-Shaykh al-Libi y otras 25 personas

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno de los Estados Unidos de América no haya proporcionado la información solicitada, a pesar de las reiteradas invitaciones al efecto. El Grupo de Trabajo considera que se encuentra en posición de emitir una opinión sobre los hechos y las circunstancias del caso.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 38/2005.)
4. La fuente presentó al Grupo de Trabajo una lista con los nombres y algunos otros datos de 26 personas que se encuentran detenidas en los Estados Unidos de América o en otros países en el contexto de la llamada "lucha mundial contra el terrorismo". Según la fuente, todas esas personas son sospechosas de participar en actividades relacionadas con el terrorismo de Al-Qaeda u otras organizaciones terroristas. Se afirma también que los mantienen en prisiones secretas (los conocidos como "sitios negros"). Según la fuente, se los priva del disfrute de las salvaguardias obligatorias contra la detención arbitraria y se ponen en peligro sus derechos humanos básicos. La fuente afirma que las autoridades de los Estados Unidos son responsables de las detenciones arbitrarias, independientemente del lugar en que se llevara a cabo la detención, porque todos ellos han sido detenidos o capturados en el marco de la guerra que dirigen los Estados Unidos contra el terrorismo internacional. Muchos de ellos han sido retenidos en centros dirigidos por los servicios secretos de los Estados Unidos, o han sido trasladados, muchas veces mediante vuelos secretos, a centros de detención de países con los que las autoridades de los Estados Unidos cooperan en la lucha contra el terrorismo internacional.
5. Al recibir la comunicación, el Grupo de Trabajo observó que la comunicación en la forma en que se presentó no se ajusta a los requisitos expuestos en el párrafo 10 de sus métodos de trabajo, que dice lo siguiente:

"10. En la medida de lo posible, cada caso será objeto de una presentación específica en que se indique el apellido, el nombre y cualquier otra información que haga posible identificar a la persona detenida y esclarecer su situación jurídica, particularmente:

 - a) La fecha y el lugar del arresto o detención, o de cualquier otra forma de privación de libertad, y la identidad de los presuntos autores, junto con toda otra información que arroje luz sobre las circunstancias en que la persona fue privada de libertad;
 - b) Las razones dadas por las autoridades para la detención; la privación de libertad, o ambas;
 - c) La legislación aplicada al caso en cuestión;

- d) Las iniciativas adoptadas, en especial en forma de investigaciones o el uso de recursos internos, tanto en forma de contactos con las autoridades administrativas y judiciales, en particular para la verificación de la medida de privación de libertad, como actuaciones en el plano internacional y, cuando corresponda, sus resultados o las razones por las que esas medidas resultaron ineficaces o no se tomaron; y
- e) Una exposición de las razones por las que la privación de libertad se considera arbitraria."

La fuente informó al Grupo de Trabajo de que no podía proporcionar datos más completos sobre los detenidos. Señaló que precisamente debido al secreto que rodea a los sitios negros (que constituye uno de los puntos principales de la queja) aplicar estrictamente las normas equivaldría a dificultar la presentación de esta queja y quejas similares y por tanto premiaría a los Estados que llevan a cabo prácticas secretas de traslado.

6. El Presidente-Relator del Grupo de Trabajo remitió un resumen de la comunicación al Representante Permanente de los Estados Unidos de América ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra el 8 de diciembre de 2005 (párrs. 7 a 18 *infra*).

7. Según las denuncias recibidas, algunos de estos centros de detención secretos, que se encuentran situados fuera de los territorios bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, están administrados por agentes de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA), quienes aplican las técnicas de interrogatorio mejoradas o más duras aprobadas por la CIA, que al parecer son contrarias a los convenios internacionales e incluso a las normas militares de los Estados Unidos. Entre ellas hay tácticas como el submarino, en que se hace creer al detenido que se está ahogando.

8. Se informó asimismo de que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos han trasladado a algunos detenidos a países que utilizan para extraer confesiones unas técnicas de interrogatorio que son incluso más duras que cualquiera de las autorizadas por los funcionarios de inteligencia de los Estados Unidos. Estos detenidos no eran necesariamente nacionales de esos países. En esos países las cárceles secretas están bajo la dirección de los países anfitriones, con la asistencia financiera de la CIA y, en algunos casos, su dirección.

9. Se informó también de que se ha trasladado a esos detenidos de un país a otro en vuelos de tres a ocho horas de duración, que han permanecido en los sitios por períodos de 18 meses a más de 2 años y luego han sido nuevamente trasladados a un tercer país. Algunos de los detenidos fueron trasladados del Afganistán y países del Oriente Medio a Europa oriental en una pequeña flota de jets privados utilizados por la CIA..

10. Se recibieron también denuncias acerca de la existencia de un sistema conexo de devolución en secreto de los prisioneros a sus países de origen cuando ya no son útiles para los Estados Unidos. Argelinos, chinos, egipcios, jordanos, marroquíes, pakistaníes, árabes sauditas, tunecinos y uzbekos fueron devueltos al parecer a los servicios de inteligencia de sus respectivos países tras la presentación de un informe inicial por parte de los funcionarios de inteligencia de los Estados Unidos.

11. El traslado, también conocido como "entrega" o "entrega extraordinaria" es, supuestamente, una técnica de lucha contra el terrorismo. Se mantiene a los detenidos para interrogarlos y para intercambiar información con los agentes de inteligencia extranjeros que llevan a cabo los interrogatorios.

12. Algunos de estos centros de detención estaban situados en antiguas bases aéreas o militares soviéticas. Las personas que han estado detenidas en esos centros de detención secretos cuentan que no se les acusó oficialmente de ningún delito ni se les hizo comparecer ante autoridad alguna, administrativa ni judicial, que se hiciera responsable de su detención para que pudieran impugnar su legalidad. Se les retuvo en régimen de incomunicación, sin acceso al mundo exterior ni a sus familias -que desconocían su paradero-, ni a un abogado defensor. No se les permitía hablar con nadie salvo con sus interrogadores, y se les obligaba a oír música a alto volumen noche y día. A algunos de los detenidos se los retuvo en celdas subterráneas y sin ventanas.

13. Se expresó preocupación por que los traslados se efectúen sin recurrir a ningún procedimiento legalmente reconocido, como la deportación o la extradición, y sin que los detenidos puedan acceder a un asesor letrado o a un órgano judicial ante el cual impugnar el traslado.

14. Según la información recibida por el Grupo de Trabajo, muchas de las personas que a continuación se citan se encuentran detenidas en prisiones secretas o "sitios negros" situados fuera de los territorios bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. Muchos de ellos son sospechosos de haber cometido delitos graves, incluidos los ataques del 11 de septiembre, los ataques con bombas a las embajadas de los Estados Unidos en Kenya y Tanzania en 1998 y los perpetrados en 2002 contra dos clubes nocturnos de Bali (Indonesia). Sin embargo, ninguna de las personas de esta lista ha comparecido ante un tribunal ni ha sido acusada de ningún delito y, según se dice, algunos funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos han sugerido que ciertos detenidos han sido objeto de torturas o de malos tratos graves durante su detención.

15. Actualmente se desconoce el paradero de esos prisioneros. La lista de las personas detenidas es la siguiente:

- Sr. Ibn al-Shaykh al-Libi. Al parecer fue detenido el 11 de noviembre de 2001 en el Pakistán. Libio, se sospecha que estaba al mando de un campamento de entrenamiento de Al-Qaeda.
- Sr. Abu Faisal. Al parecer fue detenido el 12 de diciembre de 2001. Nacionalidad desconocida.
- Sr. Abdul Aziz. Al parecer fue detenido el 14 de diciembre de 2001. Nacionalidad desconocida. A principios de enero de 2001, Kenton Keith, portavoz de la Embajada de los Estados Unidos en Islamabad, presentó un gráfico con los nombres de miembros veteranos de Al-Qaeda de quienes se decía que habían muerto en combate o estaban detenidos o en fuga. De Faisal y Aziz se decía que habían sido detenidos los días 12 y 14 de diciembre de 2001.

- Sr. Abu Zubaydah (conocido también como Zain al-Abidin Muhahhad Husain). Al parecer fue detenido el 14 de marzo de 2002 en Faisalabad (Pakistán). Palestino, nacido en Arabia Saudita, se sospecha que se dedicaba a la planificación de operaciones de Al-Qaeda desde un puesto de responsabilidad. La fuente añade que el sistema de las prisiones secretas comenzó con el traslado del Sr. Abu Zubaydah del Pakistán a Tailandia, donde lo alojaron en un pequeño almacén en desuso de una base aérea en funcionamiento. Después de recibir allí tratamiento para curar sus heridas de bala de un médico de la CIA enviado especialmente del cuartel general de esta organización para garantizar que el Sr. Zubaydah recibía la atención adecuada, fue objeto de bofetadas y tirones de pelo, tuvo que permanecer largas horas de pie en una fría celda y finalmente lo esposaron y lo ataron boca abajo en un barreño hasta que a los 31 segundos suplicó clemencia y empezó a cooperar.
- Sr. Abdul Rahim al-Sharqawi (alias Riyadh el facilitador). Al parecer fue detenido en enero de 2002. Posiblemente yemenita, se sospecha que es miembro de Al-Qaeda (es posible que anteriormente lo retuvieran en Guantánamo).
- Sr. Abd al-Hadi al-Iraqi. Al parecer fue detenido en enero de 2002. Nacionalidad desconocida, probablemente iraquí. Se sospecha que dirigía un campamento de entrenamiento de Al-Qaeda.
- Sr. Muhammed al-Darbi. Al parecer fue detenido en agosto de 2002. Yemenita, se sospecha que es miembro de Al-Qaeda. El 26 de diciembre de 2002, citando a "funcionarios de inteligencia y seguridad nacional de los Estados Unidos", el *Washington Post* informa de que al-Darbi, así como Ramzi Binalshibh [ver más adelante], Omar al-Faruq [que al parecer escapó de la custodia de los Estados Unidos en julio de 2005], y Abd al-Rahim al-Nashiri [ver más adelante] "permanecen bajo el control de la CIA".
- Sr. Ramzi bin al-Shibh. Al parecer fue detenido el 13 de septiembre de 2002. Yemenita. Sospechoso de conspirar con Al-Qaeda en los ataques del 11 de septiembre (había compartido vivienda con uno de los secuestradores de los aviones). El Sr. Ramzi Binalshibh fue capturado en el Pakistán y trasladado a Tailandia.
- Sr. Abd al-Rahim Al-Nashiri (o Abdulrahim Mohammad Abda al-Nasherii) (alias Abu Bilal al-Makki o Mullah Ahmad Belal). Al parecer fue detenido en noviembre de 2002 en los Emiratos Árabes Unidos. Árabe saudita o yemenita. Sospechoso de haber sido jefe de operaciones de Al-Qaeda en el Golfo Pérsico, y de planificar el bombardeo del *USS Cole* y el ataque al petrolero francés *Limburg*.
- Sr. Mohammed Omar Abdel-Rahman (alias Asadullah). Al parecer fue detenido en febrero de 2003 en Quetta (Pakistán). Egipcio, hijo del Jeque Omar Abdel-Rahman, que fue condenado en los Estados Unidos por su participación en los complotos terroristas de Nueva York. Ver Agencia France Presse, 4 de marzo de 2003: "Agentes del Pakistán y de los Estados Unidos capturaron al hijo del clérigo egipcio ciego Omar Abdel Rahman. El martes un funcionario de los Estados Unidos declaró que se había detenido a Muhamad Abdel Rahman en Quetta (Pakistán). El funcionario declaró a condición de ser mantenido en el anonimato". David Johnston,

New York Times, 4 de marzo de 2003: "El 13 de febrero, cuando las autoridades del Pakistán registraron un apartamento en Quetta, encontraron lo que andaban buscando. Esperaban encontrar al Sr. [Khalid Sheikh] Mohammed, pero había huido del apartamento, eludiendo a las autoridades, como había hecho en numerosas ocasiones. En su lugar, encontraron y detuvieron a Muhammad Abdel Rahman, hijo del Jeque Omar Abdel Rahman, el clérigo egipcio ciego".

- Sr. Mustafa al-Hawsawi (alias Al-Hisawi). Al parecer fue detenido el 1º de marzo de 2003 (junto con Khalid Sheikh Mohammad) en el Pakistán. Árabe saudita. Sospechoso de financiar a Al-Qaeda.
- Sr. Khalid Sheikh Mohammed. Al parecer fue detenido el 1º de marzo de 2003 en Rawalpindi (Pakistán). Kuwaití (de padres pakistaníes). Sospechoso de pertenecer a Al-Qaeda; supuestamente planeó los ataques del 11 de septiembre, el asesinato de Daniel Pearl y el ataque al *USS Cole* en 2000.
- Sr. Majid Khan. Al parecer fue detenido en marzo-abril de 2003 en el Pakistán. Pakistani. Supuesto enlace de Khalid Sheikh Mohammad; supuesta participación en un complot para hacer explotar estaciones de servicio en los Estados Unidos. Los detalles de la detención de Khan se revelaron en diversos medios de comunicación, especialmente en *Newsweek*: Evan Thomas, "Al Qaeda in America: The enemy within", *Newsweek*, 23 de junio de 2003. En los Estados Unidos la acusación presentó pruebas de que Majid Khan se encontraba bajo la custodia de los Estados Unidos cuando se juzgó a Uzair Paracha, de 24 años, que fue condenado en noviembre de 2005 por conspiración, y por proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas.
- Sr. Yassir al-Jazeeri (alias Al-Jaziri). Al parecer fue detenido el 15 de marzo de 2003 en el Pakistán. Posiblemente marroquí, argelino o palestino. Sospechoso de pertenecer a Al-Qaeda; relacionado con Khalid Sheikh Mohammed. Detalles de su detención: Alex Spillius, "FBI questions al-Qaeda man in Pakistan," *Daily Telegraph*, 17 de marzo de 2003; Paul Haven, "Al-Qaeda suspect begins cooperating with authorities, Pakistani security officials say", Associated Press, 17 de marzo de 2003.
- Sr. Ali Abdul Aziz Ali (alias Ammar al Baluchi). Al parecer fue detenido el 29 de abril de 2003 en Karachi (Pakistán). Pakistani. Se le acusa de haber encauzado dinero para los secuestradores del 11 de septiembre, y de haber participado en el atentado del Marriot de Yakarta y en la tramitación del viaje de José Padilla a los Estados Unidos. El juez Sidney Stein de los Estados Unidos autorizó a los abogados defensores de Uzair Paracha a presentar las declaraciones que hizo Baluchi a interrogadores de los Estados Unidos, que demostraban que se encontraba bajo custodia de los Estados Unidos. El antiguo Fiscal General Adjunto James Comey también mencionó a Baluchi durante sus declaraciones a la prensa sobre el caso de José Padilla el 1º de junio de 2004.

- Sr. Waleed Mohammed bin Attash (alias Tawfiq bin Attash o Tawfiq Attash Khallad). Al parecer fue detenido el 29 de abril de 2003 en Karachi (Pakistán). Árabe saudita (de origen yemenita). Sospechoso de haber participado en el bombardeo del *USS Cole* en 2000, y en los ataques del 11 de septiembre. Véase Afzal Nadeem, "Pakistan Arrests Six Terror Suspects, including Planner of September 11 and *USS Cole* Bombing", *Associated Press*, 30 de abril de 2003. Su hermano, Hassan bin Attash, se encuentra detenido al parecer en Guantánamo. El Presidente Bush describió su detención como un "hito importante y significativo en la guerra contra el terrorismo: es un asesino. Era uno de los principales operativos de Al-Qaeda, justo por debajo de Khalid Shaikh Mohammad en el operativo de esta organización. Una persona menos de la que preocuparse para los que aman la libertad". David Ensor y Syed Mohsin Naqvi, "Bush hails capture of top al Qaeda operative", CNN.com, 1º de mayo de 2003.
- Sr. Adil al-Jazeeri. Al parecer fue detenido el 17 de junio de 2003 en las afueras de Peshawar (Pakistán). Argelino, sospechoso de pertenecer a Al-Qaeda y residente durante muchos años en el Afganistán; supuesto "líder" y "antiguo ayudante de Bin Laden." (Anteriormente detenido en Guantánamo.)
- Sr. Hambali (alias Riduan Isamuddin). Al parecer fue detenido el 11 de agosto de 2003 en Tailandia. Indonesio, supuestamente miembro de Jemaah Islamiyah y Al-Qaeda, sospechoso de haber participado en la organización y financiación del atentado contra el club nocturno de Bali, el del Hotel Marriot de Yakarta y los preparativos de los ataques del 11 de septiembre.
- Sr. Mohamad Nazir bin Lep (alias Lillie, o Li-Li). Al parecer fue detenido en agosto de 2003 en Bangkok (Tailandia). Malasio, supuesta relación con Hambali.
- Sr. Mohamad Farik Amin (alias Zubair). Al parecer fue detenido en junio de 2003 en Tailandia. Malasio; supuesta relación con Hambali. Para más información sobre la detención de Mohammad Farik Amin y Mohamad Nazir bin Lep, véase: Kimina Lyall, "Hambali talks under grilling - slaughter of innocents", *The Australian*, 21 de agosto de 2003; Kimina Lyall, "Hambali moved JI front line to Bangladesh, Pakistan", *The Weekend Australian*, 27 de septiembre de 2003; Simon Elegant y Andrew Perrin, "Asia's Terror Threat", *Time Asia Magazine*, 6 de octubre de 2003; Simon Elegant, "The Terrorist Talks", *Time*, 13 de octubre de 2003.
- Sr. Tariq Mahmood. Al parecer fue detenido en octubre de 2003 en Islamabad (Pakistán). Doble nacionalidad británica y pakistaní. Se lo acusa de tener contactos con Al-Qaeda. Véase "Pakistan grills detained British al-Qaeda suspect", Agencia France Presse, 10 de noviembre de 2005; Sean O'Neill, "Five still held without help or hope; Guantánamo", *The Times*, 12 de enero de 2005.
- Sr. Hassan Ghul. Al parecer fue detenido el 23 de enero de 2004 en las Tierras Altas kurdas (Iraq). Pakistaní; se lo acusa de ser el correo entre Zarqawi y Bin Laden; supuestos lazos con Khalid Sheikh Mohammad. El Presidente Bush describió la detención de Hassan Ghul el 26 de enero de 2004, en comentarios a la prensa ofrecidos en Little Rock (Arkansas): "Precisamente la semana pasada avanzamos aún más en la lucha por hacer que América esté más segura, cuando se capturó en el Iraq a un tipo

llamado Hassan Ghul, relacionado directamente con Khalid Sheik Mohammad, que fue el cerebro que planeó los ataques del 11 de septiembre. Fue capturado en el Iraq, donde ayudaba a Al Qaeda a presionar a nuestras tropas...".

- Sr. Musaad Aruchi (alias Musab al-Baluchi, al-Balochi, al-Baloshi). Al parecer fue detenido en Karachi el 12 de junio de 2004 en una operación "supervisada por la CIA". Probablemente pakistaní. Funcionarios de inteligencia del Pakistán declararon a los periodistas que Aruchi fue retenido por las autoridades pakistaníes en una base aérea durante tres días, para después ser entregado a los Estados Unidos, y después trasladado en un avión camuflado de la CIA a un lugar no desvelado. Anwar Iqbal, "Pakistan Hands Over 1998 Bomber to US", United Press International, 3 de agosto de 2004. Véase también Zahid Hussain, "Pakistan Intensifies Effort Against al Qaeda", *The Asian Wall Street Journal*, 5 de agosto de 2004; Bill Powell, "Target: America", *Time*, 16 de agosto de 2004, vol. 164, Nº 7; "Pakistani Aides: Al-Qaeda Arrest in June Opened Leads", *Dow Jones International News*, 3 de agosto de 2004; "CIA-supervised arrest in Pak opened valuable leads: Report", The Press Trust of India, 3 de agosto de 2004.
- Sr. Mohammed Naeem Noor Khan (conocido también como Abu Talaha). Al parecer fue detenido el 13 de julio de 2004 en el Pakistán. Pakistaní, ingeniero informático, fue capturado por las autoridades del Pakistán y supuestamente transferido a la custodia de los Estados Unidos. Véase Douglas Jehl y David Rohde, "Captured Qaeda figure led way to information behind warning", *New York Times*, 2 de agosto de 2004. Kamran Khan, "Al Qaeda arrest in June opened valuable leads", *Washington Post*, 3 de agosto de 2004; Kamran Khan y Dana Priest, "Pakistan pressures Al Qaeda; military operation results in terror alert and arrests", *Washington Post*, 5 de agosto de 2004; "Pakistan questioning almost 20 Al-Qaeda suspects", Agencia France Presse, 5 de agosto de 2005; Robert Block y Gary Fields, "Al Qaeda's data on U.S. targets aren't new: surveillance of listed sites in eastern cities took place over time, perhaps years", *The Asian Wall Street Journal*, 7 de agosto de 2004; Adrian Levy y Cathy Scott-Clark, "One huge U.S. jail", *The Guardian*, 19 de marzo de 2005.
- Sr. Ahmed Khalfan Ghailani. Al parecer fue detenido el 24 de julio de 2004 en el Pakistán. Tanzaniano. Supuestamente acusado en los Estados Unidos por los ataques con bomba a embajadas de 1998. Funcionarios de inteligencia de los Estados Unidos y del Pakistán declararon a United Press International que Ghailani fue transferido a la "custodia de la CIA" a principios de agosto. Véase Anwar Iqbal, "Pakistan hands over 1998 bomber to U.S.", United Press International, 3 de agosto de 2004. Funcionarios de seguridad del Pakistán declararon a las agencias France Presse y Reuters en enero de 2005 que Ghailani había sido entregado a los Estados Unidos "hace varios meses". Véase por ejemplo "Pakistan hands Tanzanian Al-Qaeda bombing suspect to U.S.", Agencia France Presse, 25 de enero de 2005.
- Sr. Abu Faraj al-Libi. Al parecer fue detenido el 4 de mayo de 2005, en la Provincia Fronteriza del Noroeste (Pakistán). Libio, sospechoso de ser líder de operaciones de Al-Qaeda; se le acusa de planear dos intentos de asesinato contra Musharraf. El Coronel James Yonts, portavoz militar de los Estados Unidos en el Afganistán, envió un correo electrónico a Associated Press en que decía que Al-Libi había sido

trasladado directamente del Pakistán a los Estados Unidos y no había sido llevado al Afganistán.

16. Se informó de que esta supuesta red oculta de internamiento es un elemento central de la guerra no convencional de la CIA contra el terrorismo mundial. Depende de la cooperación de los servicios de inteligencia extranjeros. Se expresó preocupación porque existan esos sitios de detención secretos en los que no se puede ejercer control jurídico ni velar por la protección de los derechos humanos, lo que facilita a los gobiernos que los tienen a su cargo la evasión de sus responsabilidades y obligaciones internacionales. También se sabe que durante las detenciones secretas sin control jurídico, especialmente durante los interrogatorios, aumenta la práctica de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

17. Se afirmó que este tipo de privación arbitraria de la libertad, carente de todo fundamento jurídico, contraviene todo el ordenamiento internacional de los derechos humanos y acarrea violaciones más graves de los derechos de los detenidos: desapariciones forzadas; imposibilidad de acceder a un abogado, a la familia, a la atención médica; falta de información a las familias sobre el lugar de la detención y encarcelamiento; violación del derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, todo ello en violación de las normas internacionales.

18. Se subrayó también que la detención de sospechosos de actos terroristas en esas condiciones, sin la debida acusación ni la perspectiva de un juicio en que se establezca su culpabilidad o inocencia, es de por sí una grave negación de sus derechos humanos básicos, incompatible con el derecho internacional humanitario y el ordenamiento relativo a los derechos humanos.

19. El Grupo de Trabajo pidió al Gobierno que le presentara, en un plazo de 90 días, información pertinente acerca de las alegaciones de la fuente con respecto tanto a los hechos como a la legislación aplicable. Como en el plazo señalado no llegó ninguna respuesta, la secretaría del Grupo de Trabajo envió un recordatorio el 7 de abril de 2006. El Representante Permanente, en una nota de 8 de mayo de 2006, prometió enviar una respuesta al Grupo de Trabajo tan pronto como pudiera proporcionar una respuesta más completa. Como no llegó ninguna respuesta, el Grupo de Trabajo comunicó al Gobierno que examinaría este caso durante su 46º período de sesiones, entre el 28 de agosto y el 1º de septiembre de 2006. Tampoco se recibió ninguna respuesta a esta comunicación.

20. La falta de cooperación de las autoridades no puede impedir al Grupo de Trabajo que formule una opinión. Tiene que basarse en la información recibida de la fuente. La información es coherente en la medida en que es posible en las circunstancias, y está corroborada por otra información procedente de fuentes independientes y fiables, para empezar de ONG. Ni siquiera las autoridades de los Estados Unidos niegan la práctica del traslado ni la existencia de centros de detención secretos en los Estados Unidos y en el extranjero. La propia Secretaria de Estado de los Estados Unidos declaró que muchos terroristas sumamente peligrosos poseen información que puede salvar vidas, quizás incluso miles de ellas; por tanto el traslado de dichos terroristas puede ser un instrumento vital en la lucha contra el terrorismo transnacional.

21. La detención de las 26 personas mencionadas queda fuera de todos los regímenes jurídicos nacionales e internacionales en lo referente a las salvaguardias contra la detención arbitraria. Además el secreto que rodea a la detención y el traslado entre Estados de los sospechosos de terrorismo puede exponer a las personas afectadas a torturas, desapariciones forzosas, matanzas extrajudiciales y, en caso de que sean procesados, a la falta de las garantías de un juicio justo.

22. A la luz de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Ibn al-Shaykh al-Libi , Abu Faisal, Abdul Aziz , Abu Zubaydah (conocido también como Zain al-Abidin Muhahhad Husain), Abdul Rahim al-Sharqawi (alias Riyadh el facilitador), Abd al-Hadi al-Iraqi, Muhammed al-Darbi, Ramzi bin al-Shibh, Abd al-Rahim al-Nashiri (o Abdulrahim Mohammad Abda al-Nasherii) (alias Abu Bilal al-Makki o Mullah Ahmad Belal), Mohammed Omar Abdel-Rahman (alias Asadullah), Mustafa al-Hawsawi (alias al-Hisawi), Khalid Sheikh Mohammed, Majid Khan, Yassir al-Jazeeri (alias al-Jaziri), Ali Abdul Aziz Ali (alias Ammar al Baluchi), Waleed Mohammed bin Attash (alias Tawfiq bin Attash o Tawfiq Attash Khallad), Adil al-Jazeeri, Hambali (alias Riduan Isamuddin), Mohamad Nazir bin Lep (alias Lillie, or Li-Li), Mohamad Farik Amin (alias Zubair), Tariq Mahmood, Hassan Ghul, Musaad Aruchi (alias Musab al-Baluchi, al-Balochi, al-Baloshi), Mohammed Naeem Noor Khan (aka Abu Talaha) Ahmed Khalfan Ghailani y Abu Faraj al-Libi es arbitraria, ya que contraviene al artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a la categoría I de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

23. Habiendo emitido esta opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de las mencionadas personas.

Aprobada el 1º de septiembre de 2006.

OPINION N° 30/2006 (COLOMBIA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 2 de febrero de 2006

Relativa a Natalia Tangarife Avendaño y siete personas más

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya respondido a pesar de la extensión del plazo de 90 días que había solicitado y obtenido del Grupo de Trabajo y el recordatorio que se le hizo el 9 de agosto de 2006.
3. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 38/2005.)
4. Habida cuenta de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo habría acogido con satisfacción la cooperación del Gobierno. Al no haber recibido información oficial sobre los hechos que se recogen a continuación, el Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión, teniendo en cuenta especialmente que los hechos y alegaciones contenidos en la comunicación no han sido impugnados por el Gobierno.
5. La fuente afirma que Natalia Tangarife Avendaño, nacida el 24 de enero de 1981, residente en Medellín; Juan David Ordóñez Montoya, nacido el 28 de mayo de 1977, residente en Medellín; Juan David Espinoza Henao, nacido el 7 de septiembre de 1982, residente en Medellín; Juan Camilo Mazo Arenas, nacido el 21 de noviembre de 1986, domiciliado en Medellín; Carlos Andrés Peláez Zapata, nacido el 6 de febrero de 1982, residente en Medellín; David Esneider Mejía Estrada, nacido el 26 de febrero de 1984, con domicilio en Envigado; Andrés Mauricio Zuluaga Rivera, nacido el 7 de enero de 1985, residente en Itagüí; y Yeison Arlet García Pérez, nacido el 5 de noviembre de 1985, con domicilio en Medellín, todos ellos estudiantes universitarios de nacionalidad colombiana, fueron arrestados el 5 de mayo de 2005 en horas de la madrugada en allanamientos simultáneos realizados en sus domicilios por agentes de la Policía Nacional. Los arrestos se realizaron en cumplimiento de órdenes impartidas por la Fiscalía 51 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Medellín destacada ante el Comando Elite Antiterrorista (CEAT) de la Policía Nacional, la cual dispuso medidas de aseguramiento de detención preventiva, sin beneficio de libertad provisional, contra los estudiantes.
6. Algunos de los arrestados son dirigentes de la Asamblea General de Estudiantes de la Universidad de Antioquia. Otros son estudiantes que resultaron heridos durante los hechos ocurridos el 10 de febrero de 2005 en el interior de la Universidad. En dicha ocasión, los universitarios llevaron a cabo una jornada de protesta contra las negociaciones de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América. Ante la presencia de personal del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional, quienes lanzaron perdigones y gases lacrimógenos contra los manifestantes, un grupo de encapuchados lanzó piedras y artefactos explosivos de bajo poder (las llamadas "papas explosivas") contra los agentes policiales.

7. A las 12.10 horas, se registró una fuerte explosión en el laboratorio de química y pasillo del primer piso del bloque N° 1 de la ciudadela universitaria, lugar en el cual los encapuchados preparaban los artefactos explosivos, lo que motivó la muerte por quemaduras de dos alumnas y un número indeterminado de heridos, algunos de consideración, quienes se encontraban en las cercanías del lugar de la explosión. Varias personas fueron trasladadas al centro de enfermería del claustro universitario y 17 de ellas a la Policlínica Municipal.
8. La fuente afirma que la Fiscalía 51 Especializada de Medellín destacada ante el CEAT no es un órgano independiente del poder judicial: se encuentra físicamente instalada en los terrenos del CEAT lo que limita, no sólo su independencia, sino también el acceso de las víctimas y testigos a prestar declaraciones o testimonios sin presiones ni temores, ni exposiciones adicionales a riesgos. Sus integrantes son fiscales destacados ante la fuerza pública.
9. Según precisa la fuente, normalmente la Fiscalía General de la Nación, en virtud de una directiva interna, asigna la investigación penal a un fiscal ajeno a la investigación policial, e independiente de los cuerpos de seguridad. Sin embargo, en este caso hubo un pedido expreso del Comandante del CEAT solicitando que la investigación penal fuese conducida por la Fiscalía 51 Especializada adscrita a dicho cuerpo de seguridad. Mediante oficio 0509/CEAT-MEVAL de 12 de abril de 2005, el Jefe del CEAT de Medellín solicitó expresamente que se asignara a la Fiscalía 51 Especial Delegada ante el CEAT la investigación referida. Se estableció así un trato diferente y discriminatorio contra los estudiantes detenidos.
10. La fuente sostiene que la detención de estas personas no era necesaria, proporcionada ni razonable. No se ha presentado prueba alguna que vincule a los estudiantes detenidos con los grupos guerrilleros antes mencionados y lo único que la investigación penal ha demostrado hasta el momento es que estas personas fueron víctimas de una explosión accidental y que resultaron heridas a causa de la misma.
11. La fuente precisa que no puede hablarse de terrorismo, porque la explosión fue un hecho accidental y fortuito. Tampoco de rebelión, porque no existe factor de correlación entre el suceso de la explosión y los elementos que tipifican dicha conducta delictiva. Menos aún de hurto agravado y calificado por la simple desaparición de unas llaves de los locales universitarios.
12. En conclusión, la fuente considera que se ha vulnerado el derecho a la libertad personal, a las garantías judiciales y al debido proceso de los estudiantes arriba mencionados, quienes se encuentran sujetos a un procedimiento judicial no imparcial y a condiciones discriminatorias.
13. La fuente ha aportado el texto del fallo del recurso de apelación contra la providencia de detención dictado por el Fiscal Tercero del Tribunal Superior de Medellín.
14. Invoca la fuente que el fiscal que acordó la detención en mayo de 2005 no es independiente, pues fue designado nominalmente y en concreto para la investigación de los hechos que se imputan, en lugar de haberse producido una asignación de la investigación al fiscal que le hubiera correspondido por reparto, en la forma ordinaria que prevé una directiva interna de la Fiscalía General de la Nación.

15. Añade la fuente que la fiscalía a la que se encargó esta investigación, la Fiscalía 55 Especializada de Medellín, no puede tener la consideración de órgano independiente pues se encuentra físicamente instalada en los locales del CEAT.
16. La fuente informa también de que otra fiscalía, la Tercera del Tribunal Superior de Medellín, vio el recurso de apelación formulado por los afectados, lo que puede significar que se ha dado cumplimiento al párrafo 1 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece como elemento esencial de la definición del juicio justo el que cualquier persona detenida pueda recurrir ante órgano judicial independiente el hecho mismo de la detención.
17. Sin embargo, aunque no se observa vulneración de los principios del juicio justo por lo que se refiere a que la investigación se lleva a cabo por un órgano cuya dependencia del Gobierno pueda cuestionarse, ya que los afectados han podido contradecir la detención ante organismo independiente, sí se aprecia que se han producido otras irregularidades del proceso que es preciso tener en cuenta.
18. Los detenidos se encuentran en prisión desde hace más de 15 meses, sin que se les haya acusado formalmente a todos y cada uno de ellos de hechos concretos por los que proceda la detención. Las acusaciones que se dirigen contra los detenidos son genéricas. Se refieren esencialmente al hecho de la explosión acaecida en mayo de 2005 en el laboratorio de la Universidad de Antioquia. La propia Fiscalía del Tribunal Superior de Medellín reconoce esa explosión como un accidente involuntario, aunque tuviera como última causa el que unos encapuchados -entre los que parece que a juicio de la Fiscalía de la investigación se encontraban algunos de los detenidos-, fabricaran "papas explosivas" con las que agredían y contestaban a los intentos de la Policía Nacional para disolver una protesta universitaria contra el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos.
19. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su párrafo 3 que toda persona tiene derecho a ser informada sin demora de la naturaleza y causas de la acusación, lo que en este caso no se ha observado ya que 15 meses después de la detención aún no se ha dirigido una acusación formal e individualizada.
20. Asimismo, el apartado c) del párrafo 3 del artículo 14 establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas. En esta valoración se debe tener en cuenta la naturaleza de los hechos y las características de los mismos, en los que no se observa una especial complejidad que pudiera justificar la dilación y la inactividad en el proceso de investigación.
21. A la luz de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Natalia Tangarife Avendaño, Juan David Ordóñez Montoya, Juan David Espinoza Henao, Juan Camilo Mazo Arenas, Carlos Andrés Peláez Zapata, David Esneider Mejía Estrada, Andrés Mauricio Zuluaga Rivera y Yeison Arlet García Pérez es arbitraria, ya que contraviene los apartados b) y c) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a la categoría III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

22. Habiendo emitido esta opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación, conforme a las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Aprobada el 1º de septiembre de 2006.

OPINIÓN N° 31/2006 (IRAQ Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Comunicación dirigida a los Gobiernos el 3 de mayo de 2005

Relativa al Sr. Saddam Hussein al-Tikriti

Ambos Estados son Partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. (Texto del párrafo 1 de la Opinión N° 38/2005.)
2. El Grupo de Trabajo lamenta que, a pesar de las reiteradas invitaciones al efecto, los Gobiernos no hayan proporcionado la información solicitada. El Grupo de Trabajo considera que se encuentra en posición de emitir una opinión sobre los hechos y circunstancias del caso.
2. (Texto del párrafo 3 de la Opinión N° 38/2005.)
3. El 30 de noviembre de 2005, el Grupo de Trabajo aprobó la Opinión N° 46/2005 acerca de la comunicación presentada en nombre del Sr. Saddam Hussein al-Tikriti contra los Gobiernos del Iraq y de los Estados Unidos de América. El Grupo de Trabajo expresó sus opiniones sobre determinadas cuestiones jurídicas planteadas por la fuente y los Gobiernos, en particular con respecto a su mandato y los principios que rigen la responsabilidad de los Gobiernos del Iraq y de los Estados Unidos de América por los hechos denunciados por la fuente.
4. En primer lugar, el Grupo de Trabajo decidió que, *de conformidad con el párrafo 16 de sus métodos de trabajo y el párrafo 14 de sus métodos de trabajo revisados*)¹⁰, el Grupo de Trabajo no evaluaría la legalidad de la privación de libertad del Sr. Saddam durante el período comprendido entre el 13 de diciembre de 2003 y el 30 de junio de 2004, ya que tuvo lugar durante un conflicto armado internacional y el Gobierno de los Estados Unidos reconoció que los Convenios de Ginebra se aplicaban a las personas capturadas en el conflicto del Iraq.
5. En segundo lugar, el Grupo de Trabajo decidió que hasta el 1° de julio de 2004 Saddam Hussein estuvo detenido únicamente bajo la responsabilidad de los miembros de la Coalición como Potencias ocupantes, o, de manera más precisa, bajo la responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos. Desde entonces, como el Tribunal Penal Supremo del Iraq es un tribunal del Estado soberano del Iraq, su detención preventiva bajo acusaciones pendientes ante el Tribunal Penal Supremo del Iraq corresponde a la responsabilidad del Iraq. El Grupo de Trabajo consideró también que, teniendo en cuenta que Saddam Hussein está bajo la custodia física de las autoridades de los Estados Unidos, toda posible conclusión sobre el carácter arbitrario de su privación de libertad puede conllevar también la responsabilidad internacional del Gobierno de los Estados Unidos.
6. Por último, con respecto a las supuestas violaciones del derecho a un juicio justo, el Grupo de Trabajo consideró que era prematuro adoptar una postura sobre las alegaciones de privación arbitraria de libertad, porque los defectos de procedimiento equivalentes a la violación del

¹⁰ Las situaciones de conflicto armado internacional, amparadas por el Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos Adicionales, no son competencia del Grupo de Trabajo, especialmente cuando tiene competencia el Comité Internacional de la Cruz Roja.

derecho a un juicio justo podían, en principio, remediarse durante las fases posteriores del proceso penal. Por tanto, el Grupo de Trabajo decidió seguir la evolución del juicio y pedir más información a ambos Gobiernos interesados y a la fuente. Mientras tanto, el Grupo de Trabajo decidió mantener el caso pendiente hasta que se recibiera más información, como se prevé en el apartado c) del párrafo 17 de sus métodos de trabajo.

7. El 14 de diciembre de 2005 el Grupo de Trabajo notificó su opinión a los dos Gobiernos y el 12 de enero de 2006 a la fuente. Posteriormente el Grupo de Trabajo recibió nuevas denuncias de la fuente. El 3 de mayo de 2006 el Presidente-Relator del Grupo de Trabajo las transmitió a los Gobiernos del Iraq y de los Estados Unidos de América a través de sus respectivos representantes permanentes en Ginebra y pidió sus comentarios y observaciones al respecto. Como no recibió ninguna respuesta, el 28 de junio de 2006 el Presidente-Relator del Grupo de Trabajo envió a los representantes permanentes de ambos gobiernos una carta en que los informaba de que el Grupo de Trabajo examinaría el caso durante su 46º período de sesiones, del 28 de agosto al 1º de septiembre de 2006. Aunque no se recibió ninguna respuesta del Gobierno del Iraq, el Gobierno de los Estados Unidos de América envió una respuesta el 30 de agosto de 2006.

8. La fuente ha presentado al Grupo de Trabajo nuevos datos acerca de las supuestas violaciones múltiples del derecho a un juicio justo desde que el Grupo de Trabajo emitió su opinión el 30 de noviembre de 2005. También reitera las acusaciones ya señaladas a la atención del Grupo de Trabajo.

9. Un primer grupo de acusaciones y argumentos presentados por la fuente se refieren a la composición del Tribunal Penal Supremo del Iraq. En enero de 2006 el juez que presidió el juicio Dujail, Rizar Amin, dimitió. Lo hizo tras las críticas del público por su tratamiento del caso por parte de funcionarios de alto rango iraquíes y, según la fuente, por las presiones de un alto cargo de un partido chiíta en la legislatura de transición. Su sucesor en la presidencia del juicio Dujail, Saed al-Hameesh, fue trasladado a otra cámara del Tribunal Supremo por haber sido acusado de haber sido miembro del partido Baath. El 24 de enero de 2006 se nombró a un nuevo juez, Raouf Rasheed Abdel-Rahman, para que presidiera el juicio Dujail. La fuente expresa serias dudas con respecto a su imparcialidad, ya que nació en Halabja, la ciudad curda que fue atacada con gas venenoso por las fuerzas armadas del Iraq en 1988, y al parecer había perdido a varios familiares en el ataque. Asimismo, el juez Abdel-Rahman realizó declaraciones que indicaban que era evidente que el resultado iba a ser la culpabilidad de Saddam Hussein. En particular, se informa de que, antes de asumir el cargo de presidente del tribunal, afirmó en la televisión nacional iraquí que Saddam Hussein debía ser ejecutado sin juicio. La fuente afirma que en febrero de 2006 el abogado defensor de Saddam Hussein impugnó en repetidas ocasiones la imparcialidad del nuevo presidente del tribunal. La recusación fue rechazada, pero al parecer el Tribunal Supremo se negó a emitir una decisión por escrito para los abogados defensores, a pesar de sus reiteradas peticiones. El 10 de febrero de 2006, los medios de comunicación curdos informaron de que otro juez del tribunal, Ali Hussein al-Shimmiri, había muerto el 9 de febrero. La fuente afirma que, con esta muerte, desaparecieron cuatro de los cinco jueces originales del tribunal, al parecer dos de ellos por motivos políticos.

10. La fuente informa también de que la identidad de los jueces que celebraron el juicio de Saddam Hussein en el caso Dujail no se ha revelado, a excepción del presidente del tribunal. Afirma que como consecuencia del "anonimato" de los jueces, la defensa no puede comprobar si cumplen los requisitos necesarios para ocupar sus cargos ni si son imparciales e independientes.

11. Un segundo grupo de acusaciones y argumentos presentados por la fuente se refiere a las restricciones al derecho de Saddam Hussein a ser representado por abogados de su elección y a comunicarse con sus abogados. Lo más fundamental es que la fuente afirma que no se permitió a los abogados reunirse con el acusado en privado, pues todos sus encuentros se celebraron en presencia de funcionarios de los Estados Unidos. Asimismo, la fuente cita numerosos ejemplos de obstrucción de la labor de los abogados. El 5 de diciembre de 2005, el presidente del tribunal nombró como defensores a algunos abogados que habían estado esperando fuera de la sala de juicios, a pesar de su falta de preparación y de las protestas del Sr. Hussein. El 21 de diciembre de 2005, a uno de los abogados acreditados del Sr. Hussein se le negó el derecho a presentar una petición de acompañar a su cliente directamente al Tribunal Supremo. El 17 de enero de 2006, las autoridades de los Estados Unidos denegaron la autorización de visitar al Sr. Hussein a cuatro de los nueve abogados, argumentando que tenían que presentar sus documentos acreditativos originales al tribunal, mientras que no se les permitió entrar en la sala de juicios para presentar sus credenciales.

12. La fuente afirma que el establecimiento y cancelación de las fechas de las audiencias con muy poco plazo impidió muchas veces a los abogados de Saddam Hussein asistir a las audiencias del caso. Con respecto a los abogados extranjeros del Sr. Hussein, la fuente añade que el 7 de marzo de 2006 el Tribunal Supremo comunicó que a dos de ellos, especialistas en normativa internacional de derechos humanos, el Sr. Doeblér y el Sr. Amouty, no se les permitió reunirse con su cliente ni entrar en la sala de juicios. El Tribunal Supremo no adujo ningún motivo para ello. El Sr. Doeblér y el Sr. Amouty tenían un poder del Sr. Hussein y anteriormente habían sido autorizados a ejercer ante el Tribunal Supremo.

13. Según la fuente, el hecho de que las autoridades no adoptaran medidas para proteger la vida y la integridad física de los abogados defensores contribuyó aún más a socavar la justicia del proceso. Como se ha informado públicamente, los abogados defensores han sido objeto de varios ataques, que han tenido como consecuencia la muerte de tres de ellos, entre ellos el Sr. Khamis Obeid, quien fue asesinado el 21 de junio de 2006. Tras su muerte, los abogados defensores declararon que no podían presentarse ante el Tribunal Supremo hasta que se les proporcionara mayor seguridad. Como no se adoptó ninguna medida para mejorar la seguridad, el Tribunal Supremo celebró sesiones los días 10, 11, 24, 26 y 27 de julio de 2006 sin su presencia. Nombró a otros abogados defensores sin hacer caso de las objeciones expresas del acusado.

14. El tercer grupo de acusaciones y argumentos presentados por la fuente se refiere al derecho a presentar la defensa en condiciones de igualdad con la acusación. A este respecto, la fuente afirma que al parecer se leyeron pruebas del expediente basadas en declaraciones juradas de las que los abogados defensores no tenían conocimiento previo, y que por tanto no pudieron cuestionar debidamente. Asimismo, la defensa no recibió copias de las declaraciones de los testigos de la acusación.

15. El Grupo de Trabajo también toma nota de los informes de que el 13 de junio de 2006, menos de 24 horas después de haber autorizado a declarar a nueve testigos más, el Tribunal Supremo interrumpió repentinamente la intervención de la defensa y desautorizó la introducción de ninguna otra prueba de la defensa.

16. En su declaración del 30 de agosto de 2006, el Gobierno de los Estados Unidos de América señala que el Grupo de Trabajo reconoció que el proceso penal contra el Sr. Hussein se estaba celebrando aún. Afirma que por tanto el Grupo de Trabajo reconoció que el Sr. Hussein tenía a su disposición recursos internos que no se habían agotado. El Gobierno también reitera su posición de que, aunque tiene la custodia física del detenido, el Sr. Hussein se encuentra detenido en virtud de la autoridad legal de un tribunal iraquí y por tanto las autoridades iraquíes apropiadas son las mejor situadas para responder a las preguntas sobre su detención continuada. Por tanto, el Gobierno de los Estados Unidos decidió no comentar las nuevas acusaciones de la fuente.

17. Aunque toma nota con agradecimiento de la cooperación del Gobierno de los Estados Unidos, el Grupo de Trabajo lamenta que ni el Gobierno del Iraq ni el Gobierno de los Estados Unidos hayan presentado información sobre las nuevas acusaciones de la fuente acerca de su posición sobre el fondo. No obstante, el Grupo de Trabajo considera que se encuentra en posición de volver a examinar el caso y de emitir una opinión sobre los hechos y las circunstancias en el contexto de las nuevas acusaciones probadas que se presentaron.

18. Por lo que respecta a la doctrina del agotamiento de los recursos internos mencionada por el Gobierno de los Estados Unidos en su respuesta, el Grupo de Trabajo recuerda que, como explicó por última vez en su informe de 2006 a la Comisión de Derechos Humanos, "la Comisión [...] nunca ha tenido la intención de que la doctrina del agotamiento de los recursos internos se aplicara a la actividad del Grupo de Trabajo como criterio para la admisibilidad de las comunicaciones" (E/CN.4/2006/7, párr. 11)¹¹. Sin embargo, nada impedirá que el Grupo de Trabajo tenga en cuenta la justificación de la doctrina, es decir que el Estado en que ha ocurrido una supuesta violación de los derechos humanos debe tener la oportunidad de rectificar esa supuesta violación por sus propios medios internos.

19. Como ya se mencionó, en este espíritu el Grupo de Trabajo decidió el 30 de noviembre de 2005 aclarar los principios rectores de su competencia y la responsabilidad de los dos Gobiernos con respecto a la detención del Sr. Saddam Hussein, pero no expresar aún una opinión sobre el fondo del caso. Desde entonces, han pasado nueve meses, y los Gobiernos interesados no han cooperado con el Grupo de Trabajo, y la fuente afirma que las violaciones del derecho

¹¹ E/CN.4/2006/7, párr. 11: "La resolución 1997/50 de la Comisión establece que, como norma, el Grupo de Trabajo se ocupará de los casos en que la judicatura nacional no se haya pronunciado definitivamente; el párrafo 15 de esa resolución dice lo siguiente: "Decide renovar [...] el mandato del Grupo de Trabajo [...] encargado de investigar los casos de privación de libertad impuesta arbitrariamente, *siempre que los órganos jurisdiccionales nacionales no hayan adoptado una decisión definitiva al respecto*" (énfasis añadido). Tras lo cual, en la resolución se califica ese principio: el Grupo de Trabajo será competente en los casos en que los tribunales nacionales hayan adoptado una decisión definitiva, siempre que ésta contravenga las normas internacionales pertinentes".

internacional en el juicio de Saddam Hussein han empeorado. Lo que es más importante, el párrafo 2 del artículo 27 del Estatuto del Tribunal Especial del Iraq prevé que las sentencias se ejecutarán en un plazo de 30 días después de ser definitivas, lo que en caso de imposición de la pena de muerte podría tener como consecuencia un final precipitado e irremediable del proceso. Por tanto, el Grupo de Trabajo considera que no puede seguir retrasando la emisión de su opinión acerca de la comunicación que se le presentó hace dos años.

20. A la luz de las acusaciones resumidas anteriormente, que no han sido refutadas por los Gobiernos a pesar de la invitación a hacerlo, y también de toda la información disponible públicamente sobre el juicio del Sr. Saddam Hussein ante el Tribunal Penal Supremo del Iraq, el Grupo de Trabajo observa que no se ha adoptado ninguna medida para corregir las deficiencias identificadas en su opinión emitida el 30 de noviembre de 2005. Además, se ha informado al Grupo de Trabajo de la existencia de nuevos defectos de procedimiento.

21. En su Opinión N° 46/2005, el Grupo de Trabajo había afirmado claramente que la forma adecuada de asegurarse de que la detención del Sr. Saddam Hussein no equivalía a una privación arbitraria de libertad sería hacer que el juicio estuviera dirigido por un tribunal independiente e imparcial en estricta conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Resulta lamentable comprobar que el juicio del Sr. Saddam Hussein se celebró y terminó con una serie de violaciones del derecho a la defensa y a un juicio justo, en violación del artículo 14 del Pacto, en que son Partes tanto el Iraq como los Estados Unidos.

22. Más concretamente, el Grupo de Trabajo considera que el Sr. Saddam Hussein no disfrutó del derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial como exige el párrafo 1 del artículo 14 del Pacto. Como informa la fuente, el presidente del tribunal que juzga a Saddam Hussein cambió dos veces, ambas como consecuencia de las presiones políticas ejercidas en el Tribunal Penal Supremo del Iraq. Se afirma que el actual presidente del tribunal ha hecho declaraciones incompatibles con la exigencia de imparcialidad y la presunción de inocencia consagradas en el párrafo 2 del artículo 14 del Pacto. Las circunstancias conocidas que rodean los cambios de presidente del tribunal hacen aún más inquietante el hecho de que se desconozca la identidad de los demás miembros del tribunal. Como ha señalado la fuente, ni los acusados ni el público se encuentran en posición de comprobar si estos jueces cumplen los requisitos necesarios para ocupar un cargo judicial, si están afiliados a partidos políticos o si su independencia e imparcialidad se encuentran debilitadas por otras causas.

23. Saddam Hussein no dispuso "del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa", como exige el apartado b) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto. Las severas restricciones de acceso a los abogados de su propia elección y la presencia de funcionarios de los Estados Unidos en dichas reuniones infringieron su derecho a comunicarse con sus abogados. El asesinato de dos de sus abogados durante el juicio, el Sr. Sadoun al-Janabi el 20 de octubre de 2005 y el Sr. Khamis al-Obedi el 21 de junio de 2006, debilitó gravemente su derecho a "ser asistid[o] por un defensor de su elección", consagrado en el apartado d) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto (además de ser, en primer lugar, una tragedia de por sí).

24. Por último, Saddam Hussein no disfrutó de la posibilidad de "obtener la comparecencia de los testigos de descargo y [de] que éstos [fueran] interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo", como exige el apartado e) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto. Esta garantía se vio debilitada por el hecho de que no se desvelaron adecuadamente las pruebas de la

acusación a los defensores, por la lectura dentro del expediente de declaraciones juradas sin una posibilidad adecuada de defensa y por la repentina decisión del presidente del tribunal de acortar la defensa el 13 de junio de 2006.

25. Como el Grupo de Trabajo está profundamente dedicado a defender el principio de que las violaciones graves de los derechos humanos, cometidas bien por líderes políticos o bien por otras personas, deben investigarse y remediarse mediante la presentación de los autores a la justicia, considera que los procedimientos para exigir responsabilidades a los culpables de violaciones manifiestas de los derechos humanos deben respetar escrupulosamente las normas y reglamentos establecidos y aceptados por la comunidad internacional de garantizar un juicio justo a toda persona acusada de un delito penal. Esto es aún más necesario cuando es posible que se imponga la pena de muerte.

26. El Grupo de Trabajo considera que también desde la perspectiva de las víctimas, quienes en virtud del derecho internacional tienen derecho a reparación, verdad y justicia, es especialmente importante que la investigación de las violaciones manifiestas de los derechos humanos y el procesamiento de los supuestos autores se lleven a cabo en un proceso legal transparente y legítimo. También para ellos es fundamental que la justicia no sólo sea justa sino que también lo parezca.

27. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo expresa la siguiente opinión:

La privación de libertad del Sr. Saddam Hussein es arbitraria porque es contraria a lo que dispone el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a la categoría III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

28. Por consiguiente, y después de emitir esa opinión, el Grupo de Trabajo pide a los Gobiernos del Iraq y de los Estados Unidos de América que adopten las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Saddam Hussein, de conformidad con las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este contexto, el Grupo de Trabajo invita al Gobierno del Iraq a que examine seriamente la cuestión de si es posible el procesamiento del ex Jefe de Estado de conformidad con el derecho internacional ante un tribunal iraquí en la situación actual del país, o si este caso no debería remitirse a un tribunal internacional.

Aprobada el 1º de septiembre de 2006.
